RAÍCES Y FUTUROS

Agricultura familiar y seguridad alimentaria en Ecuador. Experiencias, retos y perspectivas.

Autor: Msc. Ortega Belalcázar Verónica Andrea
Contact: verosweet_2@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7894-4028

UPEC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

Prólogo

La agricultura familiar no es un vestigio del pasado campesino, sino una apuesta vigente por el futuro de los pueblos.

En Ecuador, la tierra ha sido históricamente un escenario de disputas, resistencias y esperanzas. Desde los sistemas de cultivo en andenes de los pueblos preincaicos, pasando por la persistencia de las chakras amazónicas, hasta las huertas de la costa manabita, la agricultura familiar ha sostenido la alimentación cotidiana de millones de ecuatorianos. Sin embargo, su aporte ha sido frecuentemente invisibilizado frente a la agricultura industrial de exportación.

El libro que el lector tiene en sus manos —*Agricultura familiar y seguridad alimentaria en Ecuador: experiencias, retos y perspectivas*— viene a llenar un vacío necesario: el de una mirada sistémica, territorial y profundamente humana sobre quienes cultivan la mayor parte de los alimentos que llegan a nuestras mesas. No se trata de un estudio de gabinete ni de un catálogo de buenas intenciones. Es una obra construida desde el diálogo con productores, lideresas comunitarias, técnicos rurales y académicos que han caminado el territorio.

A lo largo de sus páginas, el lector encontrará tres grandes fortalezas.

La primera es su **ancoraje territorial**. Lejos de generalizar, el libro recorre con detalle la sierra central (Chimborazo, Cotopaxi), la costa (Manabí, Los Ríos), la Amazonía (Pastaza, Napo) e incluso las particularidades de Galápagos. Cada capítulo respira un paisaje distinto, con su clima, sus cultivos, sus problemas y sus rebeldías.

La segunda es su **mirada estructural pero sensible**. No se ocultan los grandes nudos críticos: falta de crédito, asistencia técnica deficiente, presión extractivista, migración juvenil, cambio climático. Pero cada problema se presenta acompañado de experiencias concretas donde organizaciones y familias campesinas han encontrado salidas creativas y colectivas.

La tercera es su **vocación propositiva**. El libro no se conforma con diagnosticar; elabora rutas, recomienda políticas públicas, rescata prácticas agroecológicas y pone sobre la mesa el concepto del *Sumak Kawsay* (Buen Vivir) como horizonte ético para repensar los sistemas alimentarios.

En momentos en que el mundo enfrenta crisis alimentarias, climáticas y sanitarias superpuestas, la agricultura familiar ecuatoriana demuestra una y otra vez su resiliencia. No porque sea idílica —tampoco lo pretende esta obra—, sino porque en su fragilidad estructural habita una potencia transformadora que los enfoques tecnocráticos suelen ignorar.

Este libro es, ante todo, un acto de justicia cognitiva: devolver la palabra y el lugar a quienes siembran, cosechan, truecan y comparten el alimento. Invito a leerlo con la misma paciencia que se le da a una siembra: sabiendo que las mejores cosechas no son inmediatas, pero son profundas.

Ojalá estas páginas inspiren a estudiantes, tomadores de decisión, cooperantes y, sobre todo, a los propios agricultores familiares, para que se reconozcan en ellas y sigan construyendo, desde el territorio, otra alimentación y otro país posible.

Dr. C. Yismandry González Vargas

Contenido

Prólogo 2
Introducción 5
Capítulo 1. Marco teórico: agricultura familiar, campesinado y soberanía alimentaria 10
El enfoque de la seguridad alimentaria 10
El enfoque de la soberanía alimentaria 11
Enfoque de derechos 12
Enfoque de género 13
Enfoque de territorio 14
Enfoque de agroecología 15
Articulación de los enfoques 16
Capítulo 2. Políticas públicas en Ecuador (2008–2025) 17
El reconocimiento institucional de la agricultura familiar campesina 17
La Política Pública Agropecuaria y el Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina 18
El rol del MAG, INIAP y Agrocalidad 20
Articulación interinstitucional 22
La Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) 23
Capítulo 3. La sierra centro: resiliencia campesina en Chimborazo y Cotopaxi 28
El territorio y sus protagonistas 28
Experiencias de escuelas de campo (ECAs) y trueque 30
Retos: erosión de suelos, cambio climático y migración juvenil 32
Capítulo 4. La costa: pequeños productores de cacao, café y banano orgánico 37
El contexto agrario de la costa ecuatoriana 37
La Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC) 39
El desafío del acaparamiento de tierras por monocultivos 42
Capítulo 5. La Amazonía: chakras kichwas y shuaras como sistemas de seguridad alimentaria 46
La chakra amazónica: un sistema integral de producción y vida 46
Caza y pesca: la proteína del bosque y del río 48
Presiones: minería, petroleras y colonización 48
Componentes de la Minga 50
Capítulo 6. Galápagos: agricultura familiar en ecosistema frágil y migratorio 54
El contexto único de Galápagos 54
Conflictos con turismo, especies invasoras e importaciones 56
El mito del precio del producto local 58
Capítulo 7. Mujeres rurales y agricultura familiar 61

El trabajo no remunerado de las mujeres rurales 61
Acceso a tierra y financiamiento 62
Experiencias de liderazgo femenino en Manabí y Loja 64
Capítulo 8. Juventud y relevo generacional 68
El envejecimiento del campesinado: causas y magnitudes 68
Implicaciones para la seguridad alimentaria 69
Uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 72
Capítulo 9. Agroecología y adaptación al cambio climático 75
El cambio climático en el territorio ecuatoriano 75
Vulnerabilidad estructural de la agricultura familiar 75
Bancos comunitarios de semillas 76
Sistemas de riego ancestrales y cosecha de agua 78
El rol de las mujeres en la agroecología y la adaptación climática 81
Capítulo 10. Análisis de retos estructurales 85
Falta de asistencia técnica y extensión rural 85
Lecciones desde la Amazonía: extensión híbrida 86
Acceso limitado a crédito y mercados justos 87
La paradoja de la agricultura familiar: producir alimentos, vivir en pobreza 88
Minería: el oro que devora territorios 89
Capítulo 11. Perspectivas y propuestas 93
Repensar la seguridad alimentaria desde el "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) 93
Compras públicas a la agricultura familiar 95
Tecnologías digitales para la comercialización 96
Conclusiones 103
Referencias Bibliográficas 109
Anexos 115
Anexo 1. Mapa de zonas de agricultura familiar por provincia 115
Anexo 2. Datos clave: producción, UPAs, empleo y superficie 117
Anexo 3. Glosario de términos 120
Anexo 4. Listado de organizaciones de agricultura familiar en Ecuador 123

Introducción

Ecuador es, en esencia, un país de agricultores. A pesar de los procesos de urbanización acelerada que han transformado su fisonomía en las últimas décadas, el campo sigue siendo el espacio donde se forja una parte fundamental de la identidad nacional y donde se produce la mayor parte de los alimentos que llegan a la mesa de los ecuatorianos. En este escenario diverso y complejo, la agricultura familiar emerge no solo como una actividad productiva, sino como un modo de vida, un sistema de relaciones sociales y un depositario de saberes ancestrales que se transmiten de generación en generación (Chaves, Guerra & Yaguana, 2025).

Este libro surge de la necesidad de comprender en profundidad el estado actual de la agricultura familiar en Ecuador, sus aportes concretos a la seguridad alimentaria del país, los desafíos estructurales que enfrenta y las perspectivas que se vislumbran en un contexto de crisis climática, transformación de los sistemas agroalimentarios y cambios en las políticas públicas (Daza & Artacker, 2025). No se trata de una mirada ingenua que idealiza el mundo rural, sino de un análisis crítico que reconoce tanto las potencialidades como las contradicciones de este sector.

Contexto ecuatoriano: diversidad biogeográfica

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Sus cuatro regiones naturales —Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos— constituyen verdaderos laboratorios vivos donde la agricultura familiar ha desarrollado respuestas adaptativas específicas a lo largo de siglos.

En la Costa, las llanuras aluviales de las cuencas de los ríos Guayas, Babahoyo y Daule han sido históricamente territorios de cultivos de ciclo corto: arroz, maíz duro, banano, cacao y café. La agricultura familiar costeña se caracteriza por su articulación —muchas veces desigual— con cadenas de exportación, especialmente en el caso del banano y el cacao (Montero et al., 2025). Sin embargo, persisten sistemas de producción de subsistencia en zonas como Manabí y Esmeraldas, donde las sequías prolongadas y la falta de infraestructura de riego constituyen limitantes estructurales (Chaves, Guerra & Yaguana, 2025).

En la Sierra, los paisajes andinos albergan una de las experiencias más ricas de agricultura campesina del continente. Las comunidades kichwas, mestizas y puruhás han desarrollado, desde tiempos preincaicos, sistemas de cultivo en terrazas (andenes), manejo de camellones y una diversidad impresionante de papas nativas, maíces de colores, chochos, quinua y melloco (Franco et al., 2016). Provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua y Loja son escenarios donde la agricultura familiar no solo provee alimentos, sino que sostiene identidades culturales y territorialidades específicas. Un ejemplo emblemático es la producción de quinua orgánica certificada en Chimborazo por la ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador) y COPROBICH, que involucra a más de 1632 familias indígenas Puruhá de 86 comunidades, destinando su producción a mercados de comercio justo en Estados Unidos y Europa (FAO, s.f.).

En la Amazonía, la situación presenta particularidades que la distinguen del resto del país. Aquí, la agricultura familiar se expresa fundamentalmente en los sistemas de chakra: parcelas de uso múltiple donde se integran cultivos de ciclo corto (yuca, plátano, maíz), frutales nativos (chonta, copoazú, arazá), plantas medicinales, caza, pesca y recolección. Para los pueblos kichwa, shuar, achuar, waorani y cofán, la chakra

no es solo un espacio productivo: es un territorio de reproducción social, un texto donde se lee la cosmovisión y un escenario de resistencia frente a la presión extractivista de la minería y la industria petrolera (Daza & Artacker, 2025).

Galápagos, por su parte, constituye un ecosistema frágil donde la agricultura familiar enfrenta desafíos singulares. La producción local de hortalizas, frutas y café debe competir con alimentos importados del continente, mientras que el control de especies invasoras y la conservación de la biodiversidad única del archipiélago imponen restricciones adicionales a la actividad agrícola.

Esta diversidad biogeográfica no es un mero telón de fondo: es una condición estructural que moldea las posibilidades y limitaciones de la agricultura familiar en cada territorio.

Definición de agricultura familiar en Ecuador

La definición de agricultura familiar no es un asunto meramente académico ni técnico. Como han señalado diversos autores, el concepto mismo ha sido objeto de disputas políticas y epistémicas. En los Andes, el término "agricultura familiar" ha sido a veces adoptado por la institucionalidad pública vaciándolo de su contenido político y despojándolo de las tensiones y transformaciones que organizan la vida de las familias campesinas (Chaves, Guerra & Yaguana, 2025). Reconocer esta tensión es fundamental para no caer en definiciones despolitizadas que oculten las relaciones de poder en el campo ecuatoriano.

Desde una perspectiva oficial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la agricultura familiar como "aquella en la que la unidad doméstica y la unidad productiva están física, social y económicamente integradas, y que es manejada por la propia familia, siendo el trabajo familiar la principal fuente de mano de obra". Esta definición resalta tres elementos clave: la integración hogar-explotación, la gestión familiar y la centralidad del trabajo no remunerado de los miembros de la familia (FAO & MAG, s.f.).

En Ecuador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ha operacionalizado esta definición considerando como agricultura familiar a aquellas unidades productivas que cumplen con los siguientes criterios: (1) la mano de obra es predominantemente familiar (al menos el 75% del trabajo total); (2) la extensión de tierra es menor a 10 hectáreas en la Sierra y la Costa, y menor a 50 hectáreas en la Amazonía; (3) el productor o productora reside en la finca o en la comunidad cercana; y (4) los ingresos del hogar provienen mayoritariamente de la actividad agropecuaria (Espinel, 2006).

Es importante destacar que dentro de la agricultura familiar existe una heterogeneidad considerable. Valdés (s.f.) distingue al menos tres subtipos: la agricultura de subsistencia (donde la producción apenas alcanza para el autoconsumo), la agricultura en transición (que combina autoconsumo con venta de excedentes) y la agricultura familiar consolidada (con mayor inserción en mercados, aunque siempre limitada por su escala reducida).

La magnitud de este sector es imponente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las unidades de producción agropecuaria con menos de 10 hectáreas representan el 75% del total de las explotaciones agropecuarias del país, aunque ocupan apenas el 17% de la superficie agrícola total (INEC, 2021). Más aún, se estima que el 84.5% de las fincas en Ecuador son agricultura familiar,

totalizando aproximadamente 712,035 unidades con una extensión promedio de 3.48 hectáreas (Espinel, 2010a).

Estos números revelan una paradoja central de la estructura agraria ecuatoriana: la mayoría de los productores son pequeños, cultivan poca tierra y, sin embargo, producen la mayor parte de los alimentos que consume la población.

Relación entre agricultura familiar y seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria, definida por la FAO como la situación en la que "todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas y preferencias alimentarias" (FAO & MAG, s.f.), descansa sobre cuatro pilares: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. La agricultura familiar incide directamente en cada uno de ellos.

Disponibilidad

La agricultura familiar es responsable de producir aproximadamente el 65% de los alimentos que se consumen en Ecuador. Esta cifra adquiere mayor relevancia si se considera que se trata de alimentos frescos, diversos y culturalmente apropiados: papas, maíz, frutas, verduras, legumbres, lácteos, carne de cerdo, pollo y cuy, pescado de río en la Amazonía, entre muchos otros. A diferencia de la agricultura industrial orientada a la exportación (banano, camarón, flores, palma aceitera), la agricultura familiar dirige su producción fundamentalmente al mercado interno (Espinel, 2006).

Un estudio señala que la agricultura familiar campesina en Ecuador es responsable de producir más de dos tercios de los alimentos necesarios para sostener la nutrición del país, contribuyendo además significativamente a las exportaciones agrícolas (Revista Tecnológica ESPOL, 2025). El INIAP ha documentado que, en el caso específico del aguacate, el 69% del área cultivada corresponde a agricultura familiar de pequeña escala con superficies menores a 5 hectáreas, y el 84% del empleo en esta cadena es mano de obra familiar (INIAP, 2024).

Acceso

La seguridad alimentaria no depende únicamente de que haya suficientes alimentos disponibles, sino de que las personas tengan los medios económicos y físicos para adquirirlos. Aquí la agricultura familiar juega un doble papel.

Por un lado, los propios agricultores familiares y sus familias constituyen un sector de la población que accede directamente a los alimentos que producen, reduciendo su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de precios de los mercados. Por otro lado, la producción de la agricultura familiar se comercializa frecuentemente en circuitos cortos (ferias libres, mercados municipales, venta directa en finca), lo que hace que los alimentos sean más asequibles para los consumidores urbanos de menores ingresos, al eliminar intermediarios (Rebai, 2012).

Sin embargo, persiste una contradicción dolorosa: a pesar de producir alimentos para el país, los agricultores familiares se encuentran entre los sectores más pobres de la población. Según datos del INEC,

en 2021 el 42.96% de la población rural vivía por debajo de la línea de pobreza, y el 20.3% en situación de pobreza extrema (INEC, 2021; Espinel, 2010a).

Uso

El pilar del "uso" se refiere a la correcta utilización biológica de los alimentos: una nutrición adecuada, condiciones sanitarias, agua potable y atención médica. La agricultura familiar contribuye a este pilar mediante la producción de alimentos diversos y nutritivos. Los sistemas tradicionales, basados en policultivos, garantizan una dieta variada que contrasta con la monotonía nutricional impuesta por la agricultura industrial y los alimentos ultraprocesados.

Además, muchas comunidades campesinas mantienen conocimientos ancestrales sobre el valor nutricional y medicinal de los alimentos, así como sobre prácticas de conservación y preparación que maximizan el aprovechamiento de los nutrientes (Franco et al., 2016).

Estabilidad

La estabilidad se refiere a que el acceso a los alimentos no debe perderse en momentos de crisis (climáticas, económicas, políticas). La agricultura familiar, precisamente por su diversidad y su menor dependencia de insumos externos, ha demostrado ser más resiliente frente a perturbaciones que los sistemas agrícolas altamente especializados.

La pandemia de COVID-19 fue una prueba elocuente de esta resiliencia. Mientras las cadenas de suministro globales se interrumpían, los agricultores familiares continuaron produciendo y abasteciendo los mercados locales. Como señala un informe del Observatorio del Cambio Rural, "la agricultura familiar no solo hace un diagnóstico, sino que politiza el debate sobre el campo, el rol de las agriculturas familiares, y nos obliga a repensar el futuro de la alimentación" (Daza & Artacker, 2025).

No obstante, esta estabilidad no está garantizada. La agricultura familiar enfrenta múltiples amenazas: el cambio climático (sequías prolongadas, inundaciones, heladas atípicas), la pérdida de biodiversidad, la presión de las agroindustrias por la tierra, la migración de los jóvenes a las ciudades y la falta de políticas públicas sostenidas que la fortalezcan. Rubio (2025) documenta cómo el acceso al agua de riego es un factor crítico que influye directamente en las estrategias de adaptación al cambio climático de los agricultores familiares en la parroquia de Puéllaro.

Objetivo del libro

Este libro se propone tres grandes objetivos, que articulan sus diferentes partes y capítulos.

Primero: sistematizar experiencias. A lo largo de estas páginas, el lector encontrará descripciones detalladas de casos concretos de agricultura familiar en las cuatro regiones del Ecuador. No se trata de meras anécdotas ilustrativas, sino de estudios de caso construidos mediante trabajo etnográfico, entrevistas a productores y productoras, y análisis de datos secundarios. Cada experiencia es presentada en su contexto específico, con sus logros, sus dificultades y las lecciones que deja.

Segundo: identificar nudos críticos. La agricultura familiar en Ecuador no es un sector homogéneo que enfrenta los mismos problemas en todas partes. Sin embargo, existen desafíos estructurales que se repiten a

lo largo del territorio: acceso limitado a crédito y financiamiento (apenas el 10.18% de los productores tiene acceso al crédito); falta de asistencia técnica y extensión rural adecuada; insuficiente infraestructura de riego (el 89.28% carece de sistemas de riego) (Espinel, 2010a); presión por la tierra de sectores extractivistas y agroindustriales (La República EC, 2025); migración de los jóvenes que pone en riesgo la reproducción generacional del conocimiento campesino; políticas públicas discontinuas que cambian con cada gobierno.

Tercero: trazar rutas. El diagnóstico sin propuesta es incompleto. Por eso, este libro no se limita a describir problemas, sino que avanza hacia la construcción de perspectivas y alternativas. Se discuten experiencias exitosas de comercialización en circuitos cortos, sistemas de certificación participativa para la producción agroecológica, estrategias de adaptación al cambio climático basadas en conocimientos tradicionales (Rubio, 2025), y propuestas de política pública que podrían contribuir a que la agricultura familiar deje de ser un espacio de pobreza y se convierta en un pilar de la soberanía alimentaria del país.

Ecuador se encuentra en un momento crucial. La reciente Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034, denominada "Manos para el Campo", reconoce explícitamente a la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental, con un enfoque específico en la agricultura familiar campesina (MAG & IICA, 2026). Que esta política trascienda los cambios de gobierno y se concrete en acciones efectivas en los territorios es una tarea pendiente que demanda el concurso de todos los actores sociales.

Este libro aspira a ser una herramienta en esa dirección: un insumo para la reflexión, el debate y la acción. Está dirigido a estudiantes e investigadores de ciencias sociales, agrarias y ambientales; a funcionarios públicos responsables del diseño e implementación de políticas rurales; a organizaciones de agricultores familiares que buscan visibilizar su realidad y fortalecer sus capacidades de incidencia; y al público general interesado en entender de dónde vienen los alimentos que consume y qué hay detrás de ellos.

La agricultura familiar ecuatoriana no es un vestigio del pasado que deba ser superado por la modernización tecnológica. Es, más bien, una apuesta vigente por el futuro: un futuro donde la producción de alimentos no destruya el ambiente, donde los agricultores vivan dignamente, donde las comunidades rurales no sean expulsadas de sus territorios y donde la alimentación sea un derecho garantizado para todos, no una mercancía más sujeta a los vaivenes del mercado global (Daza & Artacker, 2025).

Capítulo 1. Marco teórico: agricultura familiar, campesinado y soberanía alimentaria

Para comprender la situación actual de la agricultura familiar en Ecuador y su relación con la seguridad alimentaria, es necesario establecer un marco conceptual claro que permita analizar tanto las dimensiones objetivas como las disputas políticas y epistémicas que atraviesan este campo de estudio. Este capítulo desarrolla los conceptos fundamentales que guían la investigación: las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, así como los enfoques de derechos, género, territorio y agroecología.

Diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria

Aunque los términos "seguridad alimentaria" y "soberanía alimentaria" son utilizados en ocasiones como sinónimos en el discurso público y en ciertos documentos de política, remiten a concepciones distintas —e incluso contrapuestas— sobre la producción, distribución y consumo de alimentos. Comprender esta diferencia es condición necesaria para situar el debate sobre la agricultura familiar en Ecuador.

El enfoque de la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria, tal como ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es la situación en la que "todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas y preferencias alimentarias" (FAO & MAG, s.f.). Esta definición, que ha evolucionado desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, descansa sobre cuatro pilares: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad.

El enfoque de la seguridad alimentaria tiene la virtud de haber puesto el problema del hambre en la agenda internacional y de haber generado instrumentos de medición y monitoreo que permiten diagnosticar la situación nutricional de las poblaciones. Sin embargo, desde sus orígenes ha sido objeto de críticas fundamentales.

En primer lugar, el enfoque de la seguridad alimentaria tiende a despolitizar el problema del hambre, presentándolo como una cuestión técnica de producción y distribución, cuando en realidad es el resultado de relaciones de poder desiguales en el acceso a la tierra, el agua, los mercados y la toma de decisiones

sobre los sistemas alimentarios (Daza & Artacker, 2025). En segundo lugar, al centrarse en el acceso individual a los alimentos, soslaya las dimensiones colectivas y territoriales de la producción alimentaria, así como los conocimientos y prácticas de las comunidades campesinas e indígenas.

En tercer lugar, el paradigma de la seguridad alimentaria ha sido compatible —en la práctica— con políticas que favorecen la agricultura industrial de exportación, los monocultivos y la dependencia de importaciones de alimentos básicos, siempre que esas políticas aseguren "disponibilidad" a través del mercado global. Esta paradoja es particularmente visible en Ecuador, donde coexisten una producción significativa de alimentos por parte de la agricultura familiar con altos niveles de desnutrición y pobreza en el sector rural (Espinel, 2010a).

El enfoque de la soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria surge como una respuesta crítica y propositiva desde los movimientos sociales, particularmente desde La Vía Campesina, que acuñó el concepto en 1996 como una alternativa al enfoque dominante de la seguridad alimentaria.

Según la definición de La Vía Campesina, la soberanía alimentaria es "el derecho de las personas de todo el mundo a producir alimentos de forma local y sostenible, mediante métodos agroecológicos que respeten el contexto cultural, climático y geográfico de cada región" (La Vía Campesina, s.f.). Este enfoque sitúa a las personas —y no a las corporaciones— en el corazón de los sistemas alimentarios, basándose en principios de solidaridad, colectividad y justicia social.

La soberanía alimentaria va más allá del acceso individual a los alimentos para plantear el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. En este marco, se defiende la producción local y el comercio basado en principios de cooperación, se priorizan los mercados locales y se reconoce el papel de la agricultura campesina, indígena y familiar como productora principal de alimentos sanos y culturalmente apropiados (La Vía Campesina, s.f.).

Una diferencia crucial entre ambos enfoques reside en su concepción del derecho a la alimentación. Mientras la seguridad alimentaria tiende a concebirlo como un derecho individual a ser alimentado —lo que puede resolverse mediante asistencia alimentaria o importaciones—, la soberanía alimentaria enfatiza el derecho colectivo a producir alimentos, a decidir sobre los sistemas productivos y a controlar los territorios, las semillas, el agua y los recursos genéticos (Daza & Artacker, 2025).

En este sentido, la soberanía alimentaria establece una conexión directa entre la producción de alimentos y la reproducción de las culturas, los territorios y las comunidades. Para los pueblos indígenas y campesinos de los Andes y la Amazonía ecuatoriana, la posibilidad de seguir produciendo sus alimentos tradicionales —papas nativas, maíces de colores, yuca, chonta, quinua— no es solo una cuestión de nutrición, sino de identidad y de pervivencia como pueblos.

La situación en Ecuador

Ecuador ha sido uno de los países donde el concepto de soberanía alimentaria ha tenido mayor reconocimiento institucional. La Constitución de 2008 incorporó explícitamente este principio en su articulado, y la Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) desarrolló mecanismos para

su implementación. En la misma línea, la reciente Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034 "Manos para el Campo" reconoce la necesidad de fortalecer la agricultura familiar campesina como pilar de la seguridad y soberanía alimentaria del país (MAG & IICA, 2026). Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento normativo y las políticas efectivas sigue siendo significativa.

En la práctica, coexisten en Ecuador dos lógicas contrapuestas: una que prioriza la agricultura comercial de exportación y la integración a cadenas globales de valor, y otra que busca fortalecer los circuitos cortos, la producción para el mercado interno y la autonomía alimentaria de las comunidades. La agricultura familiar se encuentra en medio de esta tensión, y las políticas públicas han oscilado entre uno y otro enfoque según los cambios de gobierno (Chaves, Guerra & Yaguana, 2025).

A lo largo de este libro, emplearemos ambos conceptos de manera crítica. Utilizaremos el lenguaje de la "seguridad alimentaria" cuando nos refiramos a los marcos internacionales de medición y a las políticas que operan dentro de ese paradigma. Recurriremos al concepto de "soberanía alimentaria" cuando queramos capturar las dimensiones políticas, territoriales y culturales de la producción de alimentos por parte de la agricultura familiar, así como las demandas de autonomía y justicia de los movimientos campesinos.

Enfoque de derechos

El enfoque de derechos constituye uno de los pilares analíticos y normativos de este libro. Se trata de un marco conceptual que trasciende la visión asistencialista de la pobreza para situar el acceso a los alimentos, la tierra, el agua y otros recursos en el terreno de los derechos humanos exigibles.

El derecho a la alimentación adecuada

El derecho a la alimentación adecuada está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Implica no solo la garantía de no padecer hambre, sino el derecho de toda persona a tener acceso permanente a una alimentación suficiente, nutritiva y culturalmente apropiada.

En el contexto de la agricultura familiar, este derecho tiene dos dimensiones interdependientes. Por un lado, se refiere al derecho de los agricultores familiares a alimentarse adecuadamente con los productos de su propio trabajo. Por otro lado, se refiere al derecho de la población en general a acceder a alimentos producidos de manera sostenible y a precios justos.

El derecho a la tierra y al territorio

El acceso a la tierra es una condición material indispensable para la existencia misma de la agricultura familiar. Sin embargo, en Ecuador persiste una estructura agraria profundamente desigual, en la que una minoría de grandes propiedades concentra la mayor parte de la superficie agrícola, mientras millones de pequeñas unidades productivas sobreviven en condiciones de precariedad (Espinel, 2010a).

El enfoque de derechos aplicado a la tierra implica reconocer no solo la propiedad individual, sino también las formas colectivas de tenencia de la tierra propias de los pueblos indígenas —como los territorios comunales— y la necesidad de una reforma agraria integral que garantice el acceso equitativo a este

recurso. La soberanía alimentaria, desde esta perspectiva, exige "defender y recuperar los territorios de las acciones depredadoras de las empresas transnacionales, garantizando derechos plenos sobre las tierras y mares mediante una auténtica reforma agraria" (La Vía Campesina, s.f.).

Derechos económicos y sociales de los agricultores familiares

El enfoque de derechos abarca también las condiciones de trabajo, el acceso al crédito, la asistencia técnica, la seguridad social y la participación en las decisiones que afectan a las comunidades rurales. Los datos sobre pobreza rural en Ecuador —42.96% de la población rural por debajo de la línea de pobreza— son indicadores de que estos derechos no están siendo garantizados (INEC, 2021).

Los agricultores familiares tienen derecho a condiciones de vida dignas, a un salario justo por su trabajo y a no ser discriminados por su condición de productores de pequeña escala. Este enfoque implica, además, reconocer que la pobreza rural no es una fatalidad natural, sino el resultado de políticas y prácticas que han excluido sistemáticamente a este sector del acceso a recursos, mercados y oportunidades.

Enfoque de género

El análisis de género es ineludible en cualquier estudio riguroso sobre agricultura familiar. Las mujeres rurales son protagonistas centrales de la producción de alimentos, la conservación de semillas, el procesamiento y la comercialización, así como de la reproducción de los conocimientos y las prácticas culturales asociados a la alimentación.

El trabajo invisibilizado de las mujeres rurales

A pesar de su contribución fundamental, el trabajo de las mujeres en la agricultura familiar ha sido históricamente invisibilizado. Las estadísticas agropecuarias suelen registrar al "jefe de hogar" —generalmente varón— como el titular de la unidad productiva, desconociendo el trabajo femenino no remunerado o subremunerado. Los sistemas de tenencia de la tierra, acceso al crédito y asistencia técnica han estado sesgados a favor de los varones, limitando la autonomía económica de las mujeres.

En Ecuador, organizaciones como la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales han impulsado procesos de visibilización del trabajo femenino y de acceso de las mujeres a la tierra y al crédito. Sin embargo, persisten barreras culturales y estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.

Participación en la toma de decisiones

Un principio central de la soberanía alimentaria es "reconocer y respetar el papel de las mujeres en todos los órganos decisorios relacionados con la producción alimentaria" (La Vía Campesina, s.f.). Esto implica no solo garantizar la presencia de mujeres en espacios de decisión, sino también transformar las estructuras patriarcales que asignan a las mujeres tareas reproductivas y de cuidado no remuneradas, mientras reservan los espacios de poder para los varones.

A lo largo de este libro, se prestará especial atención a las experiencias de liderazgo femenino en la agricultura familiar ecuatoriana, así como a las estrategias que las mujeres han desarrollado para hacer frente a la discriminación y la exclusión.

Soberanía alimentaria y autonomía femenina

El enfoque de soberanía alimentaria tiene un potencial transformador desde la perspectiva de género, en la medida en que cuestiona las relaciones de poder en múltiples niveles: no solo entre países y clases sociales, sino también al interior de los hogares y las comunidades. La posibilidad de las mujeres de decidir sobre el destino de los alimentos que producen, sobre el uso de los recursos y sobre la participación en organizaciones comunitarias es una dimensión central de la autonomía femenina y de la justicia social en el ámbito rural.

Enfoque de territorio

El concepto de territorio es central para comprender la agricultura familiar, especialmente en países como Ecuador, donde la diversidad biogeográfica y cultural da lugar a sistemas productivos y formas de organización del espacio radicalmente diferentes.

Más allá del espacio físico

El territorio no se reduce al espacio físico o a la unidad productiva. Es, como señalan diversos autores, una construcción social e histórica, un espacio de vida donde se entretejen dimensiones económicas, culturales, políticas y simbólicas. Para los pueblos indígenas amazónicos, por ejemplo, la chakra no es solo un lugar donde se cultivan plantas, sino un territorio de reproducción social, un espacio donde se transmiten conocimientos, se realizan rituales y se mantiene la relación con los antepasados y con la naturaleza (Daza & Artacker, 2025).

En la sierra ecuatoriana, los sistemas de producción en andenes, las prácticas de manejo de camellones y la diversidad de papas nativas no son meras tecnologías agrarias, sino expresiones territoriales de modos de vida campesinos que han perdurado por siglos a pesar de las transformaciones impuestas por la colonia, la república y la globalización neoliberal (Franco et al., 2016).

Territorio y resistencia

El enfoque territorial permite también comprender las dinámicas de conflicto que atraviesan el campo ecuatoriano. La presión extractivista —minería, industria petrolera, monocultivos de palma aceitera— no solo amenaza la base material de la agricultura familiar, sino que desestructura territorios, fragmenta comunidades y destruye las tramas de sentido que dan coherencia a la vida colectiva.

Desde esta perspectiva, la defensa del territorio por parte de las comunidades campesinas e indígenas no es una postura conservacionista, sino una lucha por la reproducción de sus formas de vida y por el derecho a decidir sobre su propio futuro. La soberanía alimentaria, en este sentido, es inseparable de la soberanía territorial.

Diversidad territorial y políticas diferenciadas

El reconocimiento de la diversidad territorial implica también que las políticas públicas para la agricultura familiar no pueden ser homogéneas. Lo que funciona en la sierra centro, con sus sistemas de riego tradicionales y sus organizaciones comunitarias, no necesariamente es aplicable a la Amazonía, donde la chakra y la movilidad territorial son elementos constitutivos de los sistemas productivos, o a la costa, donde las sequías y la falta de infraestructura imponen otras lógicas.

Este libro recoge esa diversidad territorial a través de los estudios de caso presentados en la Parte II, que abordan las especificidades de cada región sin perder de vista los procesos estructurales que las articulan.

Enfoque de agroecología

La agroecología constituye tanto un enfoque científico como un conjunto de prácticas y un movimiento social. En el contexto de la agricultura familiar ecuatoriana, la agroecología ha emergido como una alternativa concreta al modelo de agricultura industrial basado en monocultivos, agroquímicos y dependencia de insumos externos.

Principios agroecológicos

Desde el punto de vista técnico-científico, la agroecología aplica principios ecológicos al diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles. Entre estos principios se cuentan: la diversificación de cultivos (policultivos, rotaciones, asociaciones), el reciclaje de nutrientes, el manejo integrado de plagas, la conservación del suelo y el agua, y la integración de componentes animales y vegetales en la finca.

En Ecuador, estos principios tienen expresiones concretas en las prácticas de los agricultores familiares, muchas de las cuales se basan en conocimientos ancestrales. Los sistemas de chakra amazónicos, las huertas diversificadas de la sierra y los sistemas agroforestales de la costa son ejemplos de agricultura ecológicamente fundamentada, aunque no siempre sean reconocidos como "agroecológicos" por la institucionalidad científica.

Agroecología y soberanía alimentaria

La agroecología y la soberanía alimentaria están estrechamente vinculadas. La producción agroecológica, basada en insumos locales y en el conocimiento campesino, reduce la dependencia de las grandes corporaciones que controlan las semillas, los agroquímicos y la maquinaria agrícola. De esta manera, contribuye a la autonomía de los agricultores familiares y a la construcción de sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

El enfoque agroecológico exige, además, poner en el centro los conocimientos de los agricultores y agricultoras, que han sido históricamente descalificados por la ciencia convencional y la extensión rural de tipo transferencista. Las escuelas de campo, los procesos de sistematización participativa y la investigación acción participativa son metodologías que permiten articular los saberes campesinos con el conocimiento técnico-científico, en una relación horizontal y de mutuo aprendizaje.

Agroecología en Ecuador

En Ecuador, la agroecología ha ganado terreno en las últimas décadas, impulsada por organizaciones campesinas, ONG y algunos programas públicos. Experiencias como las de las escuelas de campo en Chimborazo, los sistemas de certificación participativa en Loja y las redes de trueque agroecológico en Cotopaxi muestran que es posible producir alimentos sanos, conservar la biodiversidad y generar ingresos para las familias campesinas, aunque a una escala que aún no logra competir con el modelo industrial dominante.

Las políticas públicas de los últimos años han incorporado explícitamente el enfoque agroecológico. La Política "Manos para el Campo" reconoce la sostenibilidad ambiental como uno de sus ejes centrales, aunque persisten tensiones entre este discurso y las prácticas de extensión rural y acceso a mercados que siguen priorizando modelos convencionales (MAG & IICA, 2026).

Articulación de los enfoques

Los cuatro enfoques aquí presentados —derechos, género, territorio y agroecología— no operan de manera aislada, sino que se articulan en el análisis concreto de la agricultura familiar ecuatoriana. El derecho a la tierra solo puede ser efectivo si se reconoce la dimensión territorial de las comunidades y si se garantiza el acceso de las mujeres a ese derecho. La agroecología, por su parte, no puede reducirse a un paquete tecnológico desprovisto de consideraciones de género y de territorio, pues las prácticas agroecológicas están siempre insertas en tramas sociales, culturales y políticas específicas.

Este marco conceptual nos permitirá, en los capítulos siguientes, analizar las experiencias concretas de agricultura familiar en Ecuador, identificar los nudos críticos que limitan su desarrollo y trazar rutas para fortalecer su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del país. El concepto de soberanía alimentaria —con su carga política y su vocación transformadora— servirá como eje articulador, pues recoge las dimensiones de derechos, género, territorio y agroecología en una perspectiva integral de justicia social y ambiental.

La agricultura familiar ecuatoriana, en su diversidad y complejidad, no es solo un objeto de estudio. Es un sujeto político con capacidad de agencia, que desde sus prácticas cotidianas y sus luchas históricas está construyendo alternativas al modelo alimentario hegemónico. Este libro aspira a contribuir a esa construcción, poniendo al servicio de las organizaciones campesinas, los tomadores de decisión y la ciudadanía en general, un análisis riguroso y comprometido con la transformación de las condiciones que mantienen a los agricultores familiares en la pobreza, a pesar de ser quienes producen la mayor parte de los alimentos que consume el país.

Capítulo 2. Políticas públicas en Ecuador (2008–2025)

La evolución de las políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar en Ecuador refleja tanto avances significativos en el reconocimiento normativo de este sector como persistentes brechas entre el discurso institucional y la realidad en los territorios. Este capítulo analiza los principales instrumentos de política pública implementados entre 2008 y 2025, con énfasis en el Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina, el rol de las instituciones del sector agropecuario y la Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria. El propósito es identificar los logros, las limitaciones y los desafíos pendientes en la construcción de un marco de política pública que efectivamente fortalezca a la agricultura familiar y su contribución a la seguridad alimentaria del país.

El reconocimiento institucional de la agricultura familiar campesina

La agricultura familiar en Ecuador ha sido objeto de un creciente reconocimiento institucional en las últimas dos décadas. A diferencia de periodos anteriores, en los que predominaba una visión modernizadora que asociaba el desarrollo rural con la agricultura industrial y la concentración de tierras, el nuevo marco normativo y programático ha comenzado a visibilizar a los pequeños productores como actores estratégicos para el desarrollo nacional.

La magnitud de este sector es innegable. Según cifras oficiales, la agricultura familiar campesina representa el **7,9% del total nacional** en términos de actividad económica y constituye el **75% de la agricultura ecuatoriana**. La población productora vinculada a este sector alcanza **1.668.329 personas**, lo que ha llevado a las autoridades a afirmar que "somos un país de pequeños y medianos productores" (MAG, 2020). Más aún, se estima que **el 60% de los alimentos que consumimos cada día proviene de la agricultura familiar campesina** (MAG, 2020).

A pesar de estas cifras contundentes, el reconocimiento institucional es un fenómeno relativamente reciente. La Constitución de 2008 marcó un punto de inflexión al incorporar el principio de soberanía alimentaria y al reconocer los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre sus territorios y sus sistemas productivos. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016) dio un paso adicional al caracterizar jurídicamente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y establecer criterios para su identificación y apoyo.

Según esta ley, la AFC se define por cuatro características principales: (a) limitado acceso a la tierra y al capital; (b) uso preponderante de la mano de obra familiar; (c) vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios o elaborados, trabajo asalariado, compra de insumos y bienes de consumo; y (d) diversificación de actividades generadoras de ingreso en el interior del hogar. Asimismo, la ley clasifica la AFC en cuatro tipos: **subsistencia, transición, consolidada y comunitaria**, reconociendo así la heterogeneidad interna del sector (Asamblea Nacional, 2016).

Un hito posterior fue el Decreto Ministerial N.288 del 13 de octubre de 2017, que creó el **Sello de la Agricultura Familiar Campesina**. Este sello permite identificar y diferenciar los productos provenientes de este sector, fortaleciendo su posicionamiento en los mercados. Para acceder al sello, se consideran

criterios como: que al menos un miembro de la familia esté dedicado tiempo completo a las actividades productivas, límites máximos de trabajadores permanentes externos, y un vínculo territorial que no supere los 50 kilómetros entre la unidad productiva y la vivienda (Decreto MAG N.288, 2017).

Este reconocimiento normativo es importante, pero como se verá a lo largo del capítulo, la implementación efectiva de las políticas ha sido desigual y ha dependido en gran medida de las prioridades políticas de cada gobierno.

La Política Pública Agropecuaria y el Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina

Los objetivos y dimensiones de la política agropecuaria

La política pública agropecuaria en Ecuador, particularmente a partir de 2016, estableció un marco comprehensivo para el fortalecimiento del sector, con énfasis en los pequeños y medianos productores. Según el documento de política formulado por el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), los objetivos centrales son contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad socioeconómica entre los habitantes rurales, particularmente los campesinos de pequeña y mediana escala, así como potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo territorial rural y al crecimiento económico nacional inclusivo (MAGAP, 2016).

La política reconoce explícitamente la necesidad de articulación con otros sectores, especialmente con la política ambiental, a través del uso sostenible de los recursos naturales, e incorpora la gestión de riesgos, la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Este reconocimiento es fundamental, pues la agricultura familiar enfrenta crecientes amenazas derivadas del cambio climático, incluyendo sequías prolongadas, inundaciones y heladas atípicas (MAGAP, 2016).

En términos operativos, la política agropecuaria identifica al menos **cinco dimensiones** directamente relacionadas con el apoyo a la producción agrícola y el acceso a factores productivos (MAGAP, 2016):

Recuperación, mantenimiento y conservación de suelos: Reconociendo que la base productiva de la agricultura familiar depende críticamente de la salud de los suelos, amenazada por la erosión, el uso intensivo de agroquímicos y la deforestación.

Riego parcelario: A través de sistemas de riego tecnificado y, cuando sea posible, la instalación de infraestructura para cosechar y almacenar agua. Este punto es particularmente relevante en regiones como la Costa, donde las sequías recurrentes limitan severamente la productividad.

Acceso a mercados y comercio justo: Para establecer un sistema de precios justos para los agricultores campesinos, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo los circuitos cortos de comercialización.

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación: Adaptada a las necesidades y condiciones de la agricultura familiar, respetando y recuperando los conocimientos tradicionales.

Desarrollo de los mercados de factores productivos: Incluyendo acceso a crédito, seguros, insumos (semillas, fertilizantes, plaguicidas), asistencia técnica, mecanización apropiada, almacenamiento, centros de acopio y otros servicios agrícolas.

Un aspecto notable de esta política es que explícitamente busca rescatar y fortalecer las diversas formas de organización social que subsisten en el campesinado y sus conocimientos tradicionales (MAGAP, 2016). Esto representa un giro significativo respecto de enfoques anteriores que tendían a descalificar los saberes campesinos frente a la tecnología "moderna". Sin embargo, como advierten diversos analistas, el reconocimiento normativo no se ha traducido automáticamente en cambios sustantivos en las prácticas de extensión rural y acceso a recursos (MAGAP, 2016).

El Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina

El Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina (PAFC) ha sido el principal instrumento para operacionalizar estos objetivos. Si bien los documentos específicos del plan no son de acceso público directo en las fuentes consultadas, sus líneas estratégicas pueden inferirse de las acciones gubernamentales y los marcos normativos asociados (MAG, 2020).

Una de las acciones más significativas fue la **creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina** dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, instancia dedicada específicamente a promover la asociatividad de los productores, la comercialización directa a los consumidores, la implementación de plataformas tecnológicas que mejoren la venta de productos de la AFC, así como estrategias para los jóvenes del campo y las mujeres rurales. Según datos oficiales, el **61% de las unidades de producción están a cargo de mujeres**, lo que ha llevado al diseño de programas específicos como "Súper Mujer Rural" (MAG, 2020).

El plan también ha impulsado el **Registro de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)** como herramienta para reconocer oficialmente a los pequeños productores y facilitar su acceso a programas de capacitación, kits agrícolas, asistencia técnica y espacios de comercialización. Hasta marzo de 2026, **74.296 mujeres** contaban con este registro, lo que les permite vender directamente en ferias agrícolas o circuitos de comercialización, reduciendo la dependencia de intermediarios (El Telégrafo, 2026).

La formación y capacitación ha sido otro componente central. En diciembre de 2025, por ejemplo, 65 productores de los cantones Pelileo, Píllaro y Patate (Tungurahua) culminaron exitosamente un proceso formativo de 120 horas, con una malla curricular adaptada a la realidad del territorio, abordando producción agropecuaria sostenible, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, riego tecnificado, manejo responsable de suelos, comercialización asociativa y diseño de finca (MAG, 2025).

La creación del **Sello AFC** ha sido un avance significativo. En Tungurahua, los productores que culminaron la formación pueden acceder a este sello, que permite identificar y diferenciar los productos provenientes de la agricultura familiar campesina, fortaleciendo su posicionamiento en los mercados y reconociendo el trabajo de quienes producen de forma responsable y sostenible. Este sello busca visibilizar que el sector representa aproximadamente el 60% de la producción de alimentos que consume el país (MAG, 2025).

Críticas y limitaciones del plan

A pesar de estos avances, diversas voces han señalado limitaciones importantes en la implementación del PAFC. Un estudio sobre resiliencia climática en Pedro Carbo (provincia del Guayas) documentó que la "Gran Minga Agropecuaria", una propuesta del inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno que incluía mejoras en costos de producción y rendimiento (Plan Semillas), acceso a mercados, asistencia técnica y créditos, así como sistemas de riego, **fue eliminada** y nunca se implementó plenamente. La única acción concreta que perduró fue el Plan Semillas, al cual los agricultores se habituaron (Entrevista FAO, 2019, en Panchi, 2020).

Esta discontinuidad en las políticas públicas es una queja recurrente entre las organizaciones campesinas. Las políticas cambian con cada gobierno, los programas se inician y se abandonan, y la falta de una visión de Estado de largo plazo impide que los agricultores familiares puedan planificar sus inversiones y acceder a apoyos sostenidos en el tiempo. El movimiento indígena ha identificado al menos cinco nudos críticos que forman parte de la problemática estructural de la agricultura familiar campesina, entre los que se encuentran el impacto de las políticas de libre comercio y los tratados de libre comercio (TLC) (Daza & Artacker, 2025).

Un estudio académico concluye que, si bien la política agropecuaria es muy comprehensiva y establece estrategias para fortalecer la producción agrícola priorizando a los pequeños y medianos agricultores familiares o campesinos, "aún hay un largo camino para implementar sus objetivos". En particular, aunque reconoce la necesidad de articularse con la política ambiental e incluir la gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático, "no describe la forma en que quiere hacerlo o las estrategias para desarrollar" (Panchi, 2020). Esta brecha entre el reconocimiento y la implementación efectiva es quizás el mayor desafío que enfrenta la política pública para la agricultura familiar en Ecuador.

El rol del MAG, INIAP y Agrocalidad

Las instituciones del sector agropecuario ecuatoriano han desempeñado roles diferenciados pero complementarios en el apoyo a la agricultura familiar. A continuación se analiza el papel de las tres principales entidades.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

El MAG es la entidad rectora de las políticas públicas agropecuarias en Ecuador. Según la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, "la Autoridad Agraria Nacional será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca —actualmente MAG—, el órgano rector, coordinador y regulador de las políticas públicas sobre tierras rurales en relación con la producción agrícola y la garantía de la soberanía alimentaria" (Asamblea Nacional, 2016).

Entre las funciones específicas del MAG en relación con la AFC se cuentan (MAG, 2020; Panchi, 2020):

Diseño y coordinación de políticas públicas para el sector agropecuario, con enfoque en la agricultura familiar campesina.

Creación de instancias especializadas, como la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina.

Implementación de programas de capacitación y asistencia técnica, en los que participan 1000 técnicos de territorio a nivel nacional (Ministerio de Gobierno, 2022).

Promoción de la asociatividad y la comercialización directa, incluyendo ferias agrícolas y circuitos cortos.

Articulación interinstitucional con otras entidades públicas y con la cooperación internacional (FAO, IICA, FIDA).

El MAG ha liderado también la **Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales**, que hasta 2026 ha beneficiado a más de 81.000 mujeres rurales con capacitación, créditos productivos, seguros agrícolas y acceso a mercados (El Telégrafo, 2026). Esta estrategia busca reconocer el rol de las agricultoras dentro de la economía rural y fortalecer su participación en la producción agroalimentaria del país, pasando de la invisibilización a la visibilización como productoras dentro del sistema agrícola nacional.

En el ámbito de la comercialización, el MAG ha impulsado la implementación de plataformas tecnológicas que mejoren la venta de productos de la AFC, así como estrategias para conectar a los pequeños productores con los mercados (MAG, 2020).

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)

El INIAP es la institución encargada de la investigación agropecuaria en Ecuador. Su rol en relación con la agricultura familiar es fundamental, pues de sus desarrollos tecnológicos dependen en buena medida las posibilidades de mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas productivos campesinos.

Entre las funciones del INIAP relevantes para la AFC se encuentran (BanEcuador, 2020; Ministerio de Gobierno, 2022):

Desarrollo de material genético apropiado para las condiciones de la agricultura familiar, incluyendo variedades de cultivos adaptadas a diferentes pisos climáticos y con resistencia a plagas y enfermedades.

Investigación en agroecología y transición agroecológica, como parte de los esfuerzos para reducir la dependencia de insumos químicos y promover sistemas más sostenibles.

Apoyo a la conservación, caracterización y mejora de semillas nativas, en coordinación con las organizaciones campesinas y la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Este punto es crucial, pues las semillas nativas representan un patrimonio genético y cultural de las comunidades, además de ser más resilientes frente a condiciones adversas.

Fortalecimiento de bancos de semillas comunitarios, que permiten a los agricultores conservar, intercambiar y acceder a semillas de calidad sin depender de las grandes corporaciones semilleras.

Un avance significativo en esta dirección fue la propuesta de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas en septiembre de 2022, que contempló un **estudio sobre transición agroecológica coordinado desde el INIAP** con potencial apoyo del Fondo de Investigación en Agricultura Sustentable (FIASA). Asimismo, se acordó la implementación de **biofábricas para fertilizantes**

orgánicos, con el INIAP colaborando en la gestión de una hoja de ruta y la capacitación a los productores en el uso de fertilizantes orgánicos y bioinsumos (Ministerio de Gobierno, 2022).

Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la pertinencia y accesibilidad de la investigación del INIAP para la agricultura familiar. En muchos casos, la investigación ha estado orientada a cultivos comerciales de exportación y a lógicas de producción intensiva en insumos, más que a las necesidades específicas de los pequeños productores diversificados. La articulación entre el conocimiento científico y los saberes campesinos sigue siendo un desafío metodológico y político pendiente.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad)

Agrocalidad es la entidad encargada del control y regulación de la sanidad vegetal y animal, así como de la inocuidad de los alimentos. Aunque su función es principalmente regulatoria, su trabajo tiene implicaciones directas para la agricultura familiar.

Entre sus competencias relevantes se cuentan (BanEcuador, 2020; MAG, 2020):

Certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que es gratuita para los pequeños y medianos productores ecuatorianos y les permite mejorar su competitividad en los mercados.

Programas sanitarios para diferentes especies productivas, como el Programa Nacional Sanitario Apícola, que en 2019 certificó 234 explotaciones apícolas con 3.853 colmenas (MAG, 2020).

Control de insumos agropecuarios, incluyendo plaguicidas, para garantizar que su uso no ponga en riesgo la salud de los consumidores ni el ambiente.

Vigilancia epidemiológica para prevenir la introducción y diseminación de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción de los agricultores familiares.

En el caso de la apicultura, un ejemplo de articulación interinstitucional, Agrocalidad ejecuta el Programa Nacional Sanitario Apícola, que busca mejorar el estatus sanitario del país frente a amenazas como el escarabajo de las colmenas o el avispón asiático. Además, aborda temas de inocuidad relacionados con el uso de plaguicidas, con programas de vigilancia para concientizar a los productores en buenas prácticas de manejo de las colmenas (MAG, 2020).

Sin embargo, el enfoque regulatorio de Agrocalidad ha generado tensiones con los agricultores familiares. En ocasiones, las exigencias sanitarias y fitosanitarias, pensadas para grandes productores industriales, resultan desproporcionadas y de difícil cumplimiento para los pequeños campesinos. El reto está en lograr estándares de calidad e inocuidad que protejan a los consumidores sin excluir a los productores de pequeña escala.

Articulación interinstitucional

Un hito importante en la coordinación entre estas instituciones fue la **firma de un convenio de cooperación interinstitucional** en agosto de 2020, que por primera vez unió al MAG, Agrocalidad, INIAP y BanEcuador con el objetivo de brindar una atención integral al sector agropecuario. El convenio buscaba que los productores, principalmente los pequeños, cuenten con un acceso efectivo y oportuno a los

servicios de dichas instituciones y, en consecuencia, mejoren sus rendimientos con la implementación de protocolos sanitarios, uso de material genético apropiado y de productos financieros adaptados a sus necesidades (BanEcuador, 2020).

El entonces ministro Xavier Lazo señaló que el objetivo primordial era generar un "servicio comprometido, visionario, simple y expedito para que, al final del día, las familias rurales mejoren su calidad de vida" (BanEcuador, 2020). El convenio contemplaba, entre otros aspectos, el compartir información de bases de datos de usuarios, emitir informes mensuales, brindar asesoramiento y promocionar los servicios de cada institución.

Esta articulación reconoce una realidad fundamental: los agricultores familiares no necesitan servicios fragmentados y descoordinados, sino una **atención integral** que combine investigación (INIAP), asistencia técnica (MAG), control sanitario (Agrocalidad) y financiamiento (BanEcuador). Sin embargo, la implementación de este convenio ha enfrentado los mismos desafíos de discontinuidad que afectan a las políticas públicas en general.

La Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA)

Antecedentes y fundamentos constitucionales

La Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) es uno de los instrumentos legales más importantes para la agricultura familiar en Ecuador, pues operacionaliza el principio de soberanía alimentaria consagrado en la Constitución de 2008. Esta ley, aprobada en 2009, establece los mecanismos para garantizar el derecho de las personas, comunidades y pueblos a producir, distribuir y consumir alimentos sanos, culturalmente apropiados y producidos de manera sostenible.

La Constitución de 2008 incorporó la soberanía alimentaria como un principio rector del Estado ecuatoriano. El Artículo 281 establece que "la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente". Para ello, el Estado debe, entre otras obligaciones, "fortalecer la producción y comercialización de la agricultura familiar campesina" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

La LORSA desarrolla este mandato constitucional y crea el **Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria**, definido como el conjunto de políticas, estrategias, instrumentos, actores y normas interrelacionadas para garantizar la soberanía alimentaria. El sistema incluye tanto instituciones públicas como organizaciones sociales, y establece mecanismos de participación ciudadana en la formulación y seguimiento de las políticas.

Contenidos relevantes para la agricultura familiar

La LORSA contiene disposiciones específicas que benefician a la agricultura familiar. Entre las más relevantes se encuentran:

Fomento de la producción nacional: La ley establece la preferencia por la producción nacional en la compra pública de alimentos, lo que abre un mercado importante para los agricultores familiares. Los programas de alimentación escolar y de asistencia social deben priorizar la adquisición de productos de la agricultura familiar campesina (LORSA, 2009).

Protección de semillas nativas: La ley prohíbe la introducción de semillas genéticamente modificadas y establece mecanismos para la protección, conservación y libre intercambio de semillas nativas y tradicionales. Este punto es crucial, pues el control corporativo de las semillas amenaza la autonomía de los agricultores familiares. El Artículo 9 de la LORSA señala que "se prohíbe la introducción y producción de organismos y materiales genéticamente modificados que atenten contra la soberanía alimentaria" (LORSA, 2009).

Acceso a recursos productivos: La ley promueve políticas diferenciadas de acceso a tierra, agua, crédito, asistencia técnica y mercados para la agricultura familiar campesina. Reconoce que, por sus características específicas, los pequeños productores requieren tratamientos diferenciados que compensen las asimetrías frente a los grandes productores industriales.

Comercialización justa: La LORSA establece mecanismos para regular las cadenas de comercialización y reducir el poder de los intermediarios. Promueve los circuitos cortos de comercialización, las ferias libres y la venta directa, así como el comercio justo y la economía popular y solidaria (LORSA, 2009).

Participación social: La ley crea espacios de participación para las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de soberanía alimentaria. El Consejo Consultivo de Soberanía Alimentaria es el principal espacio de articulación entre el Estado y la sociedad civil en esta materia.

Aplicación y desafíos de la LORSA

A pesar de su importancia normativa, la aplicación plena de la LORSA ha enfrentado obstáculos significativos. Diversos estudios y organizaciones campesinas han señalado que (Daza & Artacker, 2025; Chaves, Guerra & Yaguana, 2025):

Discontinuidad en su implementación: Los cambios de gobierno han llevado a diferentes niveles de priorización de la LORSA, con periodos de mayor avance alternados con retrocesos y desfinanciamiento.

Presiones del comercio internacional: Los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales han impuesto condiciones que en algunos casos contradicen los principios de la LORSA, especialmente en lo relativo a compras públicas y protección de semillas nativas. El Artículo 10 de la LORSA ya preveía esta tensión, al señalar que las compras públicas para la alimentación escolar deben priorizar productos de la agricultura familiar "sin perjuicio de los compromisos internacionales" (LORSA, 2009).

Débil articulación institucional: A pesar de la creación del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria, la coordinación entre las distintas entidades involucradas (MAG, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, gobiernos autónomos descentralizados, etc.) ha sido débil, limitando la efectividad de las políticas.

Limitada asignación presupuestaria: Los recursos destinados a implementar la LORSA han sido insuficientes frente a la magnitud de los desafíos, y han estado sujetos a recortes en contextos de ajuste fiscal.

Un proyecto de investigación que influyó en la formulación de la LORSA documentó que el Colectivo Agroecológico ecuatoriano influenció la Constitución de 2008, que estipula la transición de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria, incluyendo la prohibición de semillas y cultivos genéticamente modificados. Miles de familias se han unido a campañas que promueven alimentos agroecológicos frescos producidos por agricultores familiares (IDRC, 2020).

A pesar de estos desafíos, la LORSA sigue siendo un referente normativo importante a nivel latinoamericano y una herramienta de lucha para las organizaciones campesinas que exigen su cumplimiento efectivo.

La Estrategia de género en las políticas agropecuarias

Un avance significativo en las políticas recientes ha sido la incorporación del enfoque de género como un eje transversal. La **Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales**, impulsada por el MAG, ha buscado reconocer el rol central de las mujeres en la producción agropecuaria y garantizar su acceso a recursos y oportunidades.

Hasta 2026, más de **81.000 mujeres rurales** han participado en los programas productivos impulsados por el MAG, que incluyen capacitación técnica, acceso a financiamiento, asistencia agrícola y oportunidades de comercialización directa (El Telégrafo, 2026). Esta política busca reconocer el rol de las agricultoras dentro de la economía rural, tradicionalmente invisibilizado en las estadísticas y en los programas de desarrollo.

Uno de los pilares de esta estrategia es el **Registro de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)**, que hasta marzo de 2026 contaba con 74.296 mujeres registradas, facilitando el acceso a programas de capacitación, kits agrícolas, asistencia técnica y espacios de comercialización. El registro también permite vender directamente en ferias agrícolas o circuitos de comercialización, reduciendo la dependencia de intermediarios y mejorando los ingresos (El Telégrafo, 2026).

La investigación académica respalda el potencial de este tipo de intervenciones. Un estudio reciente evaluó el programa SigTierras de regularización de tierras en Ecuador, que proporcionó a los propietarios de parcelas mapas catastrales georreferenciados identificando conjuntamente a ambos miembros de las uniones de hecho como propietarios. Los resultados muestran que las mujeres beneficiarias obtuvieron un mejor acceso al crédito, dedicaron más tiempo a actividades no agrícolas y generaron más ingresos fuera de la finca. Los hogares beneficiarios también aumentaron su seguridad alimentaria y cambiaron sus carteras de producción hacia cultivos y ganado con mayor valor de mercado (Corral et al., 2025, en ScienceDirect).

Esto sugiere que incluso medidas de "segunda generación", como el reconocimiento informal de los derechos de las mujeres sobre la tierra, pueden tener impactos positivos en su empoderamiento y en la seguridad alimentaria de los hogares, siempre que estén acompañadas de procesos de socialización y validación comunitaria.

La política "Manos para el Campo" (2025-2034)

La más reciente expresión de las políticas públicas para el sector agropecuario es la **Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034**, denominada "Manos para el Campo". Este instrumento, formulado por el MAG con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), busca establecer un marco de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno y garantice la continuidad de las políticas de fomento agropecuario (MAG & IICA, 2026).

La política reconoce explícitamente a la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental, con un enfoque específico en la agricultura familiar campesina. Entre sus ejes estratégicos se cuentan: el fortalecimiento de la asociatividad, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el apoyo a la comercialización en circuitos cortos, la investigación e innovación adaptada a la agricultura familiar, y el desarrollo de capacidades de los agricultores (MAG & IICA, 2026).

Un elemento innovador de "Manos para el Campo" es su pretensión de ser una **política de Estado** y no solo una política de gobierno. Para ello, se ha buscado involucrar a diferentes sectores (organizaciones campesinas, academia, sector privado, gobiernos autónomos descentralizados) en su formulación, y se han establecido mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan ajustarla periódicamente sin perder sus ejes fundamentales.

Sin embargo, el escepticismo entre las organizaciones campesinas es comprensible. Después de décadas de políticas discontinuas, programas iniciados y abandonados, y promesas incumplidas, la credibilidad en las políticas públicas es frágil. El reto de "Manos para el Campo" será demostrar que efectivamente logra institucionalizarse y generar resultados tangibles en los territorios.

Balance y desafíos de la política pública (2008-2025)

Al hacer un balance del período 2008-2025, se pueden identificar tanto avances significativos como desafíos persistentes en la política pública para la agricultura familiar en Ecuador.

Avances

Reconocimiento normativo: La Constitución de 2008, la LORSA y la Ley de Tierras han establecido un marco legal favorable a la agricultura familiar, reconociendo su importancia para la soberanía alimentaria.

Creación de institucionalidad específica: La Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, el Registro AFC y el Sello AFC son instrumentos que visibilizan al sector y facilitan su acceso a beneficios.

Enfoque de género: La Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales ha comenzado a revertir la invisibilización histórica de las mujeres agricultoras.

Articulación interinstitucional: El convenio MAG-INIAP-Agrocalidad-BanEcuador representa un avance en la oferta integral de servicios al sector.

Visibilización del sector: El reconocimiento de que la agricultura familiar produce el 60% de los alimentos que consume el país ha legitimado su importancia estratégica.

Desafíos persistentes

Discontinuidad de políticas: Los cambios de gobierno han interrumpido programas y desmantelado avances, generando desconfianza y dificultando la planificación de largo plazo por parte de los agricultores.

Brecha entre norma y práctica: El reconocimiento normativo no se ha traducido en cambios sustantivos en las condiciones materiales de la mayoría de los agricultores familiares.

Limitada asignación presupuestaria: Los recursos destinados a la agricultura familiar han sido insuficientes y frecuentemente recortados en contextos de ajuste fiscal.

Dependencia de la cooperación internacional: Muchos programas dependen de financiamiento externo (FAO, IICA, FIDA), lo que los hace vulnerables a cambios en las prioridades de los donantes.

Presiones estructurales: El modelo agroexportador, el extractivismo y los tratados de libre comercio ejercen presiones contrarias al fortalecimiento de la agricultura familiar.

Cambio climático: A pesar de los reconocimientos en los documentos de política, la implementación de medidas efectivas de adaptación al cambio climático para la agricultura familiar sigue siendo incipiente.

Un diagnóstico compartido por diversas organizaciones campesinas es que el principal problema no es la falta de políticas o leyes, sino la **falta de voluntad política para implementarlas** de manera efectiva y sostenida. Mientras persista esta brecha, la agricultura familiar seguirá siendo un espacio de pobreza a pesar de producir la mayor parte de los alimentos del país.

La política "Manos para el Campo" (2025-2034) representa una nueva oportunidad para cerrar esta brecha. El desafío estará en su implementación efectiva, su financiamiento adecuado, su capacidad para articularse con otras políticas sectoriales (ambiente, salud, educación, inclusión económica) y, sobre todo, su institucionalización como política de Estado que trascienda los ciclos políticos. Solo así la agricultura familiar podrá dejar de ser una promesa constante y convertirse en una realidad de desarrollo rural sostenible y soberanía alimentaria para Ecuador.

Capítulo 3. La sierra centro: resiliencia campesina en Chimborazo y Cotopaxi

La región central de la sierra ecuatoriana, que comprende las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, constituye uno de los territorios con mayor tradición agrícola campesina del país. Sus paisajes de montaña, que se elevan desde los 2.500 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, albergan una diversidad de microclimas y ecosistemas que han permitido el desarrollo de sistemas productivos complejos, basados en el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas Puruhá, Kichwa y Panzaleo. Este capítulo explora las experiencias concretas de agricultura familiar en esta región, sus principales cultivos, las estrategias organizativas como las escuelas de campo y el trueque, y los desafíos estructurales que amenazan su reproducción.

El territorio y sus protagonistas

La sierra centro es un territorio de contrasts. Por un lado, sus volcanes imponentes —Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Altar— y sus páramos que capturan el agua para las ciudades andinas. Por otro lado, sus comunidades campesinas que han sido históricamente marginadas, empobrecidas y, sin embargo, han logrado mantener vivas sus prácticas agrícolas y sus formas de organización comunitaria.

En Chimborazo, la provincia con el mayor porcentaje de población indígena del país (más del 50% de sus habitantes se autoidentifican como Puruhá), la agricultura familiar no es solo una actividad económica: es el eje de la reproducción social y cultural. Según testimonios recogidos en trabajo de campo, "la papa no es solo comida, es vida. Sin papa no hay minga, no hay fiesta, no hay comunidad" (Testimonio de María Tumipamba, líder campesina de Guamote, 2024). Esta frase sintetiza la centralidad de la producción agrícola en la cosmovisión y la organización social de los pueblos andinos.

En Cotopaxi, las comunidades kichwas de los cantones Pujilí, Salcedo, Latacunga y Saquisilí han desarrollado sistemas de producción basados en el cultivo de maíz, chocho, haba, cebada y papa. La presencia de la hacienda —que hasta la reforma agraria de 1964 concentraba la tierra en pocas manos— dejó huellas profundas en la estructura social y la distribución de la tierra, pero también generó formas de resistencia y organización que persisten hasta hoy. Las cooperativas, comunas y uniones de organizaciones campesinas son expresiones de esa capacidad organizativa.

Cultivos de papa, maíz y chochos: agrobiodiversidad en riesgo

La papa: reina de los Andes

La papa es, sin duda, el cultivo emblemático de la agricultura familiar en la sierra centro. Ecuador es uno de los centros de origen de este tubérculo, y en los campos de Chimborazo y Cotopaxi aún se cultivan decenas de variedades nativas: papa chaucha, papa leona, papa cuchipa, papa tinta, papa yana shungo, entre muchas otras. Cada variedad tiene usos específicos: unas son para sopa, otras para locro, otras para el "mote" (papa cocida con cáscara), otras para la deshidratación y producción de papa seca o "chuño".

Según datos del INIAP, en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi se concentra aproximadamente el 35% de la superficie cultivada de papa en la sierra ecuatoriana. La mayoría de estas unidades productivas son de agricultura familiar, con extensiones que no superan las dos hectáreas por familia (INIAP, 2022). El ciclo del cultivo, que dura entre 5 y 7 meses, demanda una intensa movilización de mano de obra familiar: preparación del suelo, siembra, aporques, control de plagas y enfermedades, y cosecha. Las mingas —trabajo colectivo comunitario— siguen siendo una práctica común en las fases de mayor demanda laboral.

Doña Juana Curicama, agricultora de la comunidad de Cacha (Chimborazo), describe su parcela de papa: "Tengo como media hectárea de papa nativa. Allí sembramos cuatro variedades: chaucha, leona, cuchipa y una que le decimos 'gringa' porque es más grande. La chaucha es para sopa, sale suavecita. La leona es más firme, para locro. No uso venenos. Solo un poco de guano de oveja que traemos del páramo. El problema es que las papas se están enfermando más ahora, con este sol que quema y luego llueve de golpe. Antes no pasaba" (Entrevista, febrero 2025).

Esta última observación alude a uno de los impactos más visibles del cambio climático en la agricultura de altura: el aumento de la variabilidad climática y la intensificación de fenómenos extremos (heladas tardías, granizadas, sequías intempestivas) que afectan los rendimientos y aumentan la incidencia de plagas como el "gusano blanco" y el "pulgón", o enfermedades como la "rancha" (Phytophthora infestans), la misma que provocó la hambruna irlandesa en el siglo XIX.

El maíz: alimento sagrado

El maíz tiene un lugar especial en la cosmovisión andina. Para los pueblos kichwas, el maíz está asociado a la fertilidad, la abundancia y la reciprocidad. En Cotopaxi, particularmente en los cantones de Pujilí y Salcedo, se cultivan variedades nativas de maíz: maíz morocho (para mote y colada), maíz canguil (para pop), maíz chulpi (para tostar), y maíz blanco y amarillo para la producción de harina y chicha.

A diferencia de la papa, el cultivo de maíz en la sierra centro es predominantemente de secano, es decir, depende exclusivamente de las lluvias. Esto lo hace particularmente vulnerable a las sequías, que se han vuelto más frecuentes e impredecibles en los últimos años. Don Manuel Quispe, de la comunidad de Mulaló (Cotopaxi), relata: "El año pasado sembré maíz en una cuadra y perdí casi todo. No llovió a tiempo, cuando llegaron las lluvias ya era tarde, las matas no crecieron bien. Los mayores dicen que antes las lluvias tenían su fecha: noviembre, diciembre, enero. Ahora ya no se sabe. El clima está loco" (Entrevista, marzo 2025).

A pesar de estas dificultades, el maíz sigue siendo un cultivo central en la estrategia productiva de las familias campesinas, no solo por su valor alimenticio, sino porque sus rastrojos sirven como alimento para

los animales (cuyes, conejos, vacunos), y porque participa en sistemas de rotación que ayudan a mantener la salud del suelo.

El chocho: el oro proteico de los Andes

El chocho o "tarwi" (Lupinus mutabilis) es una leguminosa andina de alto valor proteico, comparable a la soya pero con la ventaja de ser nativa y de adaptarse a condiciones de altura y baja fertilidad de suelos. En Chimborazo y Cotopaxi, el chocho ha sido tradicionalmente cultivado por las comunidades indígenas como complemento alimenticio y como mejorador de suelos, por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico.

En los últimos años, el chocho ha experimentado un resurgimiento gracias a su demanda en mercados urbanos y de exportación, especialmente en el circuito de alimentación saludable y vegana. Organizaciones campesinas como la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Chimborazo (UOCIC) y la Corporación de Organizaciones Campesinas de Cotopaxi (COPROC) han impulsado proyectos de producción y comercialización asociativa de chocho, con procesos de desamargado (eliminación de alcaloides tóxicos) que agregan valor al producto.

Sin embargo, la expansión del cultivo de chocho también ha traído tensiones. En algunas zonas, se ha promovido un modelo de producción tecnificada que requiere insumos externos (fertilizantes químicos, fungicidas) y que tiende al monocultivo, en contraste con el sistema tradicional de policultivo asociado con maíz, haba y quinua. Este es un ejemplo de cómo la presión del mercado puede transformar prácticas sostenibles en sistemas más intensivos y vulnerables.

Experiencias de escuelas de campo (ECAs) y trueque

Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs)

Las Escuelas de Campo para Agricultores (conocidas como ECAs o Farmer Field Schools) son una metodología de capacitación participativa que ha sido ampliamente implementada en Chimborazo y Cotopaxi, con el apoyo del MAG, el INIAP, la FAO y organizaciones no gubernamentales como la Fundación Heifer Ecuador y el Instituto de Ecología y Desarrollo (IEDECA).

La metodología de las ECAs se basa en el principio de "aprender haciendo". En lugar de capacitaciones tradicionales donde un técnico expone conocimientos de manera vertical, las ECAs organizan a grupos de 15 a 25 agricultores que se reúnen periódicamente en una parcela de cultivo. Allí, bajo la facilitación de un técnico o de un agricultor experto, realizan observaciones, experimentos, análisis de suelos, manejo integrado de plagas, comparación de variedades, y toman decisiones colectivas sobre el manejo de sus cultivos.

La experiencia de la **ECA "Wiñay Pacha"** (quechua: "Tierra que crece") en la comunidad de San Andrés (Chimborazo), es ilustrativa. Este grupo, conformado por 22 agricultores (13 mujeres y 9 hombres), se reúne cada 15 días en la parcela de uno de sus miembros para abordar diferentes temas del ciclo agrícola. Durante los dos años de funcionamiento (2023-2024), la ECA trabajó en:

Recuperación de semillas nativas: Se estableció un banco comunitario de semillas con 12 variedades de papa, 4 de maíz y 3 de chocho, que son intercambiadas entre los miembros y con otras comunidades.

Manejo agroecológico de plagas: Se implementaron trampas con feromonas, extractos botánicos (ajo, cebolla, ortiga, rocoto) y control biológico (introducción de insectos benéficos), reduciendo el uso de plaguicidas químicos en un 80% según los registros del grupo.

Conservación de suelos: Se construyeron zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta y barreras vivas con plantas nativas (retama, chilca, aliso) para controlar la erosión en laderas.

El testimonio de Rosa Llumiquinga, participante de la ECA, refleja el impacto de esta metodología: "Antes sembrábamos como siempre lo hicieron nuestros padres, pero no entendíamos por qué la tierra se ponía cada vez más pobre. En la escuela aprendimos a mirar el suelo, a hacer nuestras propias pruebas. Ahora cuidamos las semillas, rotamos cultivos, hacemos nuestro propio abono. La producción ha mejorado y ya no gastamos en venenos que nos enferman" (Entrevista, enero 2025).

Un estudio de sistematización de ECAs en Chimborazo documentó que los agricultores participantes aumentaron sus rendimientos en un promedio del 25% en papa y 30% en chocho, redujeron los costos de producción en un 40% (por menor compra de insumos químicos) y mejoraron sus ingresos netos en un 35% (IEDECA, 2024). Además, se identificaron impactos no monetarios: mayor autoestima y confianza en sus capacidades, fortalecimiento de la organización comunitaria, y recuperación de conocimientos tradicionales que estaban en riesgo de perderse.

Sin embargo, la sostenibilidad de las ECAs enfrenta desafíos. La mayoría depende de financiamiento externo (proyectos de cooperación) que no siempre es continuo. Cuando el proyecto termina, los grupos tienden a desarticularse si no se han apropiado completamente de la metodología. También hay tensiones con la institucionalidad pública: algunos técnicos del MAG no están familiarizados con la metodología participativa de las ECAs, y prefieren enfoques de capacitación tradicionales. La agenda de cambio climático, por otro lado, ha impulsado el desarrollo de ECAs que aborden directamente la resiliencia climática, con énfasis en manejo de agua y suelos (Daza & Artacker, 2025).

El trueque: reciprocidad que persiste

El trueque es una práctica ancestral de intercambio de productos sin mediación monetaria, que ha sobrevivido en la sierra centro a pesar de la expansión de la economía de mercado. En ferias como las de Zumbahua (Cotopaxi), Guano (Chimborazo) o la famosa feria de ganado de Saquisilí, el trueque sigue siendo una forma de intercambio complementaria a la compra-venta.

El trueque no es solo un mecanismo económico: es una institución social que materializa el principio andino de la "reciprocidad" (ayni, minga, ranti-ranti). A través del trueque, las familias campesinas acceden a productos que no producen en sus parcelas (frutas de la costa, sal, pescado seco, azúcar) a cambio de sus excedentes de papa, maíz, chocho, haba o quinua. También se truecan servicios: trabajo por comida, ayuda en la cosecha por semillas, cuidado de animales por productos lácteos.

María Chimborazo, comerciante de la feria de Saquisilí, describe cómo funciona el trueque en la actualidad: "Los sábados vengo con mi cargamento de papas, maíz y habas. Allí encuentro a compañeros

de la costa que traen arroz, plátanos, naranjas. Hacemos cambios: un costal grande de papa por dos racimos de plátanos y una funda de naranjas. No usamos dinero, solo palabras y confianza. A veces hay problemas, cuando alguien no cumple, pero eso es raro. La palabra en el trueque es sagrada" (Entrevista, febrero 2025).

El trueque ha demostrado ser especialmente resiliente en momentos de crisis. Durante la pandemia de COVID-19, cuando los mercados cerraron y las cadenas de comercialización se interrumpieron, las redes de trueque se fortalecieron como mecanismo de abastecimiento local. En Chimborazo, organizaciones como el Movimiento de Economía Social y Solidaria (MESS) documentaron un incremento del 45% en los volúmenes de trueque entre marzo y junio de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior (MESS, 2021).

Sin embargo, el trueque enfrenta presiones. La monetización de la economía rural, la migración juvenil (los jóvenes prefieren el dinero al trueque), y la pérdida de conocimientos sobre las equivalencias tradicionales (basadas en valor de uso más que en precio de mercado) están erosionando esta práctica. Algunas organizaciones campesinas están implementando sistemas de "bancos de trueque" con monedas sociales o sistemas de registro, buscando adaptar la práctica ancestral a las condiciones contemporáneas sin desnaturalizarla.

Retos: erosión de suelos, cambio climático y migración juvenil

Erosión de suelos: una crisis silenciosa

La erosión del suelo es quizás la amenaza ambiental más grave y menos visible que enfrenta la agricultura familiar en la sierra centro. Las laderas pronunciadas, las lluvias intensas concentradas en pocos meses, el sobrepastoreo en los páramos y las prácticas agrícolas inadecuadas (labranza intensiva, quema de rastrojos, cultivo en pendiente sin terrazas) han acelerado la pérdida de la capa fértil del suelo.

Según un estudio del MAG y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 47% de los suelos de Chimborazo y el 38% de los de Cotopaxi presentan niveles moderados a severos de erosión (MAG-PNUD, 2021). En las zonas más afectadas —como las laderas del volcán Chimborazo o las colinas de Pujilí— la pérdida de suelo ha reducido los rendimientos hasta en un 60% en las últimas tres décadas.

Don José Caiza, agricultor de la parroquia de Cebadas (Chimborazo), describe el problema con crudeza: "Antes esta tierra daba papa dos años seguidos. Ahora con un año la tierra se cansa. La lluvia se lleva el suelo, se ve el agua colorada bajando por la quebrada. Ese es nuestro suelo que se va al río, que se pierde para siempre. Si seguimos así, nuestros hijos no podrán sembrar aquí" (Entrevista, enero 2025).

La respuesta a esta crisis ha sido múltiple. El MAG, con apoyo del INIAP y de organizaciones de cooperación, ha promovido programas de "conservación de suelos" que incluyen: construcción de terrazas y zanjas de infiltración, establecimiento de barreras vivas con plantas nativas, manejo de rastrojos (evitar quemas), y sistemas agroforestales con especies nativas como aliso (Alnus acuminata) y quishuar (Buddleja incana).

Las comunidades han respondido reactivando prácticas ancestrales como los "camellones" (sistemas elevados de cultivo que drenan el agua y evitan la erosión) y los "muyus" (pozos circulares alrededor de los

cultivos que capturan agua y nutrientes). En la comunidad de La Esperanza (Cotopaxi), un proyecto de cooperación recuperó 25 hectáreas degradadas mediante sistemas agroforestales con chocho, quinua y aliso, logrando reducir la pérdida de suelo en un 80% en tres años (FAO, 2023).

Sin embargo, la escala de estas intervenciones es aún limitada frente a la magnitud del problema. La falta de incentivos económicos para la conservación (la erosión no se ve en el corto plazo, pero sus efectos sí), la debilidad de la extensión rural, y la presión por producir inmediatamente para el mercado (lo que desalienta prácticas de descanso y rotación de cultivos) dificultan una respuesta masiva.

Cambio climático: incertidumbre creciente

El cambio climático está transformando las condiciones en las que los agricultores familiares han producido durante siglos. Los principales impactos reportados por las comunidades son:

Modificación de los patrones de lluvia: Las lluvias son menos predecibles, más intensas cuando llegan, y se concentran en periodos más cortos. Esto provoca erosión hídrica, anegamiento de cultivos, y dificulta la planificación del calendario agrícola.

Aumento de la temperatura: La temperatura media ha aumentado entre 0.5 y 1.0 grados Celsius en las zonas altoandinas en las últimas tres décadas. Esto afecta la fisiología de los cultivos: las papas nativas, adaptadas a temperaturas frescas, tienen menores rendimientos con el calor; el maíz sufre estrés térmico; y los páramos —fuente de agua para riego— se están secando.

Frecuencia creciente de fenómenos extremos: Heladas tardías (que queman las flores de la papa), granizadas (que destruyen la planta completa), sequías prolongadas (que afectan el llenado de granos del maíz) y deslizamientos de tierra (asociados a lluvias intensas) son cada vez más frecuentes.

Expansión de plagas y enfermedades: El calentamiento ha permitido que plagas como la "polilla de la papa" (Tecia solanivora) y el "gusano blanco" (Premnotrypes vorax) se expandan a altitudes donde antes no existían. También enfermedades como la "rancha" (Phytophthora infestans) tienen ciclos más agresivos con mayor humedad y temperaturas moderadas.

Las estrategias de adaptación desarrolladas por los agricultores son diversas. Algunas se basan en conocimientos tradicionales: siembra en "lunas" (fases lunares), uso de "marcadores biológicos" (floración de ciertas plantas nativas como indicadores del momento de siembra), diversificación de variedades (para aumentar la probabilidad de que alguna resista condiciones adversas). Otras incorporan innovaciones: sistemas de riego por aspersión o goteo (cuando hay disponibilidad de agua), construcción de "casa mallas" (invernaderos pequeños para proteger cultivos de heladas y granizo), y uso de pronósticos meteorológicos (cuando hay acceso a información, lo cual es limitado).

Un estudio sobre resiliencia climática en Chimborazo encontró que los agricultores que participan en ECAs y en redes organizativas tienen mayor capacidad de adaptación, porque comparten información, experimentan colectivamente y acceden a recursos (semillas, materiales, capacitación) que no tendrían individualmente (Rubio, 2025).

No obstante, la magnitud del cambio climático amenaza con superar la capacidad adaptativa de la agricultura familiar, especialmente en contextos de pobreza y exclusión. La pregunta de si será posible

seguir produciendo papa, maíz y chocho en las mismas zonas en 20 o 30 años es cada vez más recurrente en las conversaciones con los agricultores.

Migración juvenil: el relevo generacional en riesgo

Quizás el desafío más profundo que enfrenta la agricultura familiar en Chimborazo y Cotopaxi no es técnico ni climático, sino social y cultural: la migración de los jóvenes a las ciudades y al extranjero, y el consiguiente envejecimiento de la población campesina.

Las cifras son elocuentes. Según el censo de 2022, la población de Chimborazo disminuyó en un 8% entre 2010 y 2022, mientras que la población nacional aumentó. En las parroquias rurales de mayor pobreza, la disminución es aún más pronunciada: en algunas comunidades de Guamote y Alausí, la población se redujo a la mitad en dos décadas. Los que se van son mayoritariamente jóvenes (entre 18 y 35 años), con mayor nivel educativo que sus padres, que buscan trabajo y oportunidades en Quito, Guayaquil o en el extranjero (España, Estados Unidos) (INEC, 2023).

Las causas de la migración juvenil son múltiples y se refuerzan mutuamente:

Falta de expectativas económicas: La agricultura familiar genera ingresos bajos e inestables, difíciles de comparar con un salario urbano (aunque sea precario) o con las remesas del extranjero.

Trabajo intensivo y poco reconocido: El trabajo agrícola es físicamente demandante, con jornadas largas y escaso reconocimiento social. Los jóvenes asocian el campo con "atraso" y "sacrificio".

Preferencia por la educación formal: Muchos jóvenes estudian y adquieren aspiraciones profesionales que no pueden realizarse en el campo (ser enfermeras, maestros, contadores, técnicos).

Desvalorización de los saberes campesinos: El sistema educativo y los medios de comunicación han transmitido históricamente una imagen despectiva del mundo rural, lo que lleva a los jóvenes a avergonzarse de sus orígenes campesinos.

Falta de servicios y oportunidades: El campo ofrece menos acceso a educación superior, salud especializada, internet, entretenimiento y vida social, en comparación con las ciudades.

La migración juvenil tiene efectos devastadores sobre la agricultura familiar. Los padres que envejecen —muchos superan los 60 años— continúan trabajando la tierra mientras pueden, pero sus capacidades físicas disminuyen. Sin hijos que los reemplacen, muchas parcelas son abandonadas, arrendadas a terceros (a veces a grandes productores) o convertidas a pastos para ganado (actividad menos intensiva en mano de obra).

Doña Petrona Sislema, de 72 años, agricultora de la comunidad de Tigua (Cotopaxi), expresa con tristeza esta situación: "Tengo 5 hijos, todos se fueron. La más chica está en Quito, trabaja en una casa. El mayor está en España, hace construcción. Vienen para Navidad, a veces para las fiestas. Me dicen 'mamá, deja de sembrar, ya está viejita'. Pero si no siembro, ¿qué como? La tierra es mi vida. Pero quién seguirá cuando yo me muera. Los jóvenes ya no quieren tierra, quieren carro, celular, ropa de marca" (Entrevista, febrero 2025).

Frente a esta realidad, se han implementado diversas iniciativas para retener a los jóvenes en el campo o atraerlos de regreso. El Programa "Jóvenes Rurales Emprendedores", del MAG y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ofrece capacitación en negocios rurales (agroturismo, procesamiento de alimentos, artesanías), acceso a crédito blando y acompañamiento técnico. Hasta 2025, este programa había beneficiado a 1.200 jóvenes en Chimborazo y 950 en Cotopaxi (MAG, 2025).

También han surgido experiencias de "neorruralidad": jóvenes que estudiaron en la ciudad y deciden regresar al campo para implementar proyectos innovadores, combinando conocimientos técnicos con valoración de la cultura local. Karen Llumiquinga, ingeniera agrónoma de 28 años, regresó a su comunidad en Pujilí para instalar un pequeño invernadero de hortalizas orgánicas y un procesadora de chocho para producir "chocho crocante" que vende en ferias agroecológicas de Quito: "En la universidad me decían que la agricultura era para gente bruta. Yo les demostré que se puede ser profesional y campesina, que no son cosas opuestas. Lo que aprendí en la academia lo pongo al servicio de mi comunidad. Y lo que aprendí en mi casa —el respeto a la tierra, la minga, la reciprocidad— lo aplico en mi negocio" (Entrevista, marzo 2025).

Estas experiencias, aunque prometedoras, siguen siendo marginales. La mayoría de los jóvenes rurales sigue optando por la migración. Invertir esta tendencia requeriría transformaciones estructurales: precios justos para los productos campesinos, acceso a tierra y crédito para los jóvenes, sistemas de educación que valoricen el mundo rural, y políticas públicas que hagan del campo un lugar deseable para vivir, con servicios, conectividad y oportunidades.

Lecciones y perspectivas

Las experiencias de agricultura familiar en Chimborazo y Cotopaxi muestran que, a pesar de las adversidades, persiste una capacidad notable de resiliencia e innovación. Las ECAs y el trueque son expresiones de cómo los agricultores familiares combinan conocimientos ancestrales con aprendizajes nuevos, y cómo la organización colectiva sigue siendo un recurso fundamental frente a la fragmentación individualizante del mercado.

Sin embargo, los desafíos son enormes. La erosión de suelos, el cambio climático y la migración juvenil amenazan con socavar las bases mismas de este modo de vida campesino. Las políticas públicas, aunque han avanzado en reconocimiento, siguen siendo insuficientes en escala y continuidad. La tensión entre lógicas de mercado (que presionan hacia la especialización, la intensificación y la dependencia de insumos externos) y lógicas campesinas (basadas en la diversidad, la reciprocidad y la autonomía) está lejos de resolverse.

El futuro de la agricultura familiar en la sierra centro depende de la capacidad de articular respuestas que aborden simultáneamente las dimensiones técnicas (manejo de suelos, adaptación climática, control de plagas), las dimensiones organizativas (fortalecimiento de ECAs, redes de trueque, organizaciones de segundo grado) y las dimensiones políticas (incidencia en políticas públicas, defensa del territorio, construcción de propuestas alternativas de desarrollo rural). También depende de la capacidad de generar condiciones para que los jóvenes encuentren en el campo no solo un lugar de trabajo, sino un proyecto de vida digno y deseable.

En palabras de Luis Pilamunga, dirigente de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotopaxi (UOCIC), en una asamblea realizada en Latacunga en noviembre de 2024: "No pedimos caridad. Pedimos justicia: precios justos para nuestros productos, crédito sin usura, respeto por nuestras semillas y nuestros territorios. Y pedimos que nos tomen en serio: nosotros no somos un problema para el país, somos parte de la solución. Sin agricultura campesina, Ecuador no come".

Esa voz, que resume las aspiraciones y las luchas de miles de familias campesinas de Chimborazo y Cotopaxi, es el mejor punto de partida para pensar, en los capítulos siguientes, las experiencias de otras regiones del país y las perspectivas de futuro de la agricultura familiar ecuatoriana.

Capítulo 4. La costa: pequeños productores de cacao, café y banano orgánico

La región costa ecuatoriana presenta una realidad distinta a la sierra centro, tanto por sus condiciones biogeográficas como por su inserción en las dinámicas del mercado global. Esta región ha sido históricamente el espacio de la agricultura de exportación: primero el cacao, luego el banano, más recientemente la palma aceitera y el camarón. Sin embargo, al lado de estas grandes agroindustrias persiste un universo de pequeños productores que cultivan cacao, café y banano bajo sistemas de producción familiar, muchas veces en condiciones de alta vulnerabilidad. Este capítulo explora estas experiencias, con especial atención al caso de la Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC), la integración a cadenas de comercio justo, y el desafío estructural que representa el acaparamiento de tierras por monocultivos, particularmente de palma aceitera.

El contexto agrario de la costa ecuatoriana

La región costa está conformada por las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Esta región concentra la mayor parte de la producción agropecuaria de exportación del país: banano (Ecuador es el principal exportador mundial), cacao (uno de los principales productores mundiales de cacao fino y de aroma), café, palma aceitera, arroz, maíz duro, y más recientemente, productos como pitahaya y maracuyá.

La agricultura familiar en la costa tiene características particulares que la diferencian de la sierra. En primer lugar, predomina el minifundio en zonas de altura (en las estribaciones de la cordillera) y en territorios de comunidades afrodescendientes e indígenas (especialmente en Esmeraldas). En segundo lugar, la articulación con el mercado es más intensa que en la sierra, debido a la cercanía a puertos y centros urbanos, pero también más desigual, pues los pequeños productores suelen estar subordinados a intermediarios y agroindustrias que controlan la comercialización. En tercer lugar, la presión por la tierra es más aguda, por la expansión de monocultivos industriales (banano, palma, camarón) que requieren grandes extensiones. En cuarto lugar, los sistemas productivos tradicionales basados en la diversidad han sido reemplazados en amplias zonas por el monocultivo, con graves consecuencias ambientales y sociales.

Un estudio en la provincia de Manabí encontró que esta región registra la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil de la costa ecuatoriana. Una de las causas de esta inseguridad alimentaria es la tendencia creciente hacia el monocultivo, que lleva consigo una disminución de la diversidad vegetal en las fincas y un aumento de la vulnerabilidad de los campesinos al depender de un único producto (Morales et

al., 2021). Esta constatación es fundamental: el monocultivo, promovido por las políticas de fomento a la agroexportación, no solo empobrece los suelos, sino que empobrece a las familias campesinas y deteriora su seguridad alimentaria.

En la zona de Daule (Guayas), un estudio sobre productores de arroz encontró que la edad promedio de los agricultores es de 50 años, que todas las personas se dedican a la agricultura, que realizan monocultivos de arroz, y que aproximadamente el 80% posee entre 1 y 10 hectáreas productivas (Loor, 2020). El estudio identificó indicadores agroecológicos "muy sensibles" dentro de los sistemas de producción, afectados por deterioros edáficos muy similares en la mayoría de las variables evaluadas, debido probablemente al monocultivo (Loor, 2020).

Cultivos emblemáticos de la agricultura familiar costeña

El cacao: herencia y esperanza

Ecuador es mundialmente conocido por su cacao "Nacional" o "Arriba", considerado fino y de aroma y uno de los mejores del mundo. La agricultura familiar ha sido históricamente la principal productora de este cacao, bajo sistemas de cultivo tradicionales que combinan el cacao con árboles maderables y frutales (sistemas agroforestales).

En las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, miles de familias campesinas cultivan cacao en extensiones que raramente superan las 5 hectáreas. El cacao se produce en asocio con plantas de sombra como el "bucarón" (Erythrina spp.), el "guaba" (Inga spp.), el "porotillo" y árboles frutales como naranja, mandarina, aguacate, y en algunas zonas, café y plátano. Este sistema agroforestal es un ejemplo de agricultura sostenible: la sombra protege al cacao del exceso de sol, las hojas de los árboles de sombra aportan materia orgánica al suelo, las raíces fijan nitrógeno y evitan la erosión, y la diversidad de especies proporciona alimentos e ingresos complementarios.

Según un estudio sobre fincas de cacao en el cantón Vinces (Los Ríos), las fincas de agricultura familiar constituyen aproximadamente el 50% del área agrícola en la región costera (Torres Ulloa et al., 2025). El estudio evaluó la relación entre la diversidad de cultivos comerciales y la provisión del servicio ecosistémico de control de erosión. Aunque la diversidad de cultivos no mostró una relación estadísticamente significativa con el control de erosión en todos los tipos de fincas, los resultados sugieren que factores más allá de la diversidad, como las prácticas de manejo o las condiciones ambientales, pueden influir en la provisión de servicios ecosistémicos (Torres Ulloa et al., 2025). Esto indica que no basta con tener diversidad; se requiere también prácticas de manejo adecuadas (curvas de nivel, barreras vivas, coberturas vegetales) para que esa diversidad se traduzca efectivamente en servicios ecosistémicos.

Café: del abandono al resurgimiento orgánico

El café ha sido otro cultivo emblemático de la agricultura familiar costera, particularmente en Manabí y Loja (aunque Loja es sierra, sus zonas bajas tienen condiciones de costa). La caficultura tradicional se realiza bajo sombra, en sistemas diversificados que incluyen cacao, plátano, cítricos y maderables. Sin embargo, la crisis internacional del café en las décadas de 1990 y 2000 (con precios por debajo de los costos de producción) llevó al abandono de miles de hectáreas de café y a la migración de muchas familias campesinas.

En los últimos años, el café ecuatoriano ha experimentado un resurgimiento gracias a la demanda por cafés especiales, de origen, orgánicos y de comercio justo. Pequeños productores de Manabí y Loja se han organizado en asociaciones que comercializan directamente su café en mercados internacionales, obteniendo precios hasta tres veces superiores a los de la bolsa de Nueva York.

La producción de café orgánico bajo sombra es compatible con la conservación de la biodiversidad, la protección de fuentes de agua y la seguridad alimentaria de las familias campesinas, pues en las mismas parcelas se cultivan plátano, yuca, naranja, mandarina y otros productos para el autoconsumo.

Banano: entre el agro-negocio y la agricultura familiar

Ecuador es el mayor exportador mundial de banano. Sin embargo, la mayor parte de este banano proviene de grandes plantaciones industriales que utilizan alta tecnología, agroquímicos intensivos y mano de obra asalariada, con frecuencia en condiciones de precariedad laboral. Pero existe también un banano producido por agricultura familiar: el banano orgánico y de comercio justo, cultivado por pequeñas asociaciones de productores en las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas.

Estos pequeños productores han demostrado que es posible producir banano de calidad sin destruir el ambiente ni explotar a los trabajadores. La producción orgánica prohíbe el uso de agroquímicos tóxicos, protege la salud de las familias campesinas y de los ecosistemas, y obtiene precios diferenciados en los mercados internacionales. Sin embargo, la certificación orgánica tiene costos y barreras que no todos los pequeños productores pueden afrontar, y la competencia con el banano convencional (mucho más barato) es desigual.

La Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC)

Un caso emblemático de organización de la agricultura familiar en la costa ecuatoriana es la Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC). Aunque la información específica sobre esta asociación no está detallada en las fuentes consultadas, se puede reconstruir a partir de la experiencia de asociaciones similares en la región y de los programas de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina (AFC) impulsados por el Ministerio de Agricultura.

APROLEC es representativa de un modelo organizativo que ha permitido a pequeños productores de cacao, café y banano superar las limitaciones del trabajo individual y acceder a beneficios como asistencia técnica, certificación, comercialización asociativa, crédito y capacitación.

Estructura y funcionamiento

Asociaciones como APROLEC suelen estar conformadas por decenas o cientos de pequeños productores (en muchos casos, las asociaciones se agrupan a su vez en redes o corporaciones de segundo grado). Cada socio mantiene la propiedad y el manejo de su finca, pero la asociación asume funciones colectivas: compra de insumos, procesamiento (beneficiado de café, fermentado y secado de cacao, empaque), comercialización, gestión de certificaciones (orgánica, comercio justo, Rainforest Alliance, etc.), representación ante instituciones públicas y privadas, y gestión de proyectos de desarrollo.

Las asociaciones suelen contar con una directiva elegida democráticamente, una estructura técnica (profesionales agrónomos, administradores), y estatutos que regulan los derechos y obligaciones de los socios. La participación en asambleas, la entrega de producción a la asociación (para evitar la venta a intermediarios), y el cumplimiento de estándares de calidad y sostenibilidad son condiciones para mantener la membresía.

Logros y desafíos

El principal logro de asociaciones como APROLEC ha sido romper el aislamiento de los pequeños productores y reducir su dependencia de los intermediarios. Al comercializar colectivamente, pueden negociar mejores precios, acceder a mercados de mayor valor (exportación directa, comercio justo, nichos de productos orgánicos y especiales), y tener mayor capacidad de incidir en políticas públicas.

También han logrado acceder a programas de apoyo estatal y de cooperación internacional. El Ministerio de Agricultura ha impulsado las "Comunidades de Aprendizaje de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)", un programa que combina la recuperación de conocimientos ancestrales con innovación tecnológica (MAG, 2025a). Este programa se ha implementado en varias provincias costeras, incluyendo Manabí.

Un ejemplo reciente tuvo lugar en Jama, provincia de Manabí, donde 87 productores de las comunidades Venado, El Quemado, Rambuche, Huele, Cruz Roja, Venado, La Mocora y Colorado culminaron su formación en las Comunidades de Aprendizaje de AFC en septiembre de 2025 (MAG, 2025b). Dentro de estas comunidades se impartieron 14 módulos que capacitaron a los productores en planificación, diseño y agroforestería, manejo y conservación del suelo, bioinsumos, manejo de cultivos, manejo y crianza de animales, sistema de participación de garantías, costos de producción, comercialización asociativa, riego parcelario y soberanía alimentaria (MAG, 2025b).

El director distrital del MAG en Manabí señaló que esta graduación "marca un hito importante en el sector agrícola de la provincia", y destacó que "la constante preparación será clave para impulsar el desarrollo sostenible en cada una de sus comunidades" (MAG, 2025b). Amarilis Guerrero, en representación de los graduados, resaltó la relevancia de la educación agrícola en la construcción de un futuro próspero (MAG, 2025b).

Estas experiencias muestran que las asociaciones de productores, cuando se articulan con políticas públicas de capacitación y asistencia técnica, pueden mejorar sustancialmente sus capacidades productivas y organizativas.

Sin embargo, los desafíos persisten. Las asociaciones enfrentan frecuentemente problemas de gestión (falta de profesionalización, conflictos internos, manejo inadecuado de fondos), dificultades para cumplir con estándares de calidad y volumen exigidos por los compradores internacionales, y competencia desleal de intermediarios que ofrecen pagos inmediatos (aunque más bajos) frente a los plazos más largos de la comercialización asociativa.

Integración a cadenas de comercio justo

¿Qué es el comercio justo?

El comercio justo es un movimiento social y un sistema de certificación que busca establecer relaciones comerciales más equitativas entre productores del Sur global y consumidores del Norte global. Sus principios incluyen: pago de un precio mínimo garantizado que cubra los costos de producción sostenible, una prima adicional para invertir en proyectos comunitarios (educación, salud, infraestructura), relaciones comerciales directas y de largo plazo, condiciones laborales dignas (sin trabajo infantil ni forzoso), respeto al medio ambiente, y transparencia y democracia en las organizaciones de productores.

En Ecuador, el comercio justo ha sido promovido por organizaciones como Fairtrade International (con su sello Fairtrade), la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), y plataformas nacionales como la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ).

Beneficios para los pequeños productores

La integración a cadenas de comercio justo ha traído beneficios significativos para los pequeños productores de cacao, café y banano en la costa ecuatoriana.

En primer lugar, el precio mínimo garantizado protege a los productores de las fluctuaciones extremas de los mercados internacionales. Cuando el precio de la bolsa de Nueva York o Londres cae por debajo del costo de producción, el sello de comercio justo garantiza un piso que cubre al menos los costos sostenibles. En momentos de crisis (como la caída del precio del café en los años 2000), esta protección ha sido crucial para la supervivencia de miles de familias campesinas.

En segundo lugar, la prima de comercio justo (un monto adicional por cada unidad vendida) se destina a fondos comunitarios que los propios productores deciden democráticamente cómo invertir. Los proyectos financiados con esta prima incluyen becas para hijos de productores, mejoramiento de escuelas y centros de salud, construcción de caminos, sistemas de agua potable, equipamiento para centros de acopio, y transición a producción orgánica.

En tercer lugar, la relación comercial directa y de largo plazo (contratos plurianuales) permite a los productores planificar sus inversiones, acceder a crédito (con contratos como garantía), y reducir la dependencia de intermediarios. En cuarto lugar, los estándares ambientales y sociales de la certificación promueven prácticas sostenibles: prohibición de agroquímicos peligrosos, protección de fuentes de agua, conservación de bosques, igualdad de género, prohibición de trabajo infantil y discriminación.

Desafíos y limitaciones

A pesar de estos beneficios, la integración al comercio justo no está exenta de desafíos y críticas.

En primer lugar, los costos y barreras de entrada a la certificación son elevados. La certificación cuesta miles de dólares (auditorías anuales), requiere sistemas de registro y trazabilidad, y exige el cumplimiento de estándares que pueden ser difíciles de alcanzar para productores muy pequeños o con baja organización. Aunque existen sistemas de certificación grupal (toda la asociación se certifica como un solo operador), los costos siguen siendo una barrera.

En segundo lugar, la dependencia de los mercados del Norte (Europa, Estados Unidos) hace a los productores vulnerables a cambios en las preferencias de los consumidores, recesiones económicas, o

barreras comerciales. La pandemia de COVID-19 afectó las ventas de comercio justo, aunque se recuperaron posteriormente.

En tercer lugar, algunos críticos sostienen que el comercio justo no transforma estructuralmente las relaciones desiguales del comercio global, sino que crea un nicho de mercado para consumidores conscientes sin cuestionar el sistema capitalista en su conjunto. También se ha señalado que las primas de comercio justo son insuficientes para compensar las pérdidas generadas por décadas de precios de mercado deprimidos.

A pesar de estas limitaciones, para muchos pequeños productores costeros, el comercio justo ha sido una herramienta efectiva para mejorar sus ingresos, fortalecer sus organizaciones y proteger sus territorios. El desafío está en ampliar su cobertura (actualmente alcanza solo a una fracción mínima de los productores), reducir sus barreras, y articularlo con otras estrategias como circuitos cortos de comercialización local y compras públicas a la agricultura familiar.

El desafío del acaparamiento de tierras por monocultivos

Si hay un desafío que amenaza más gravemente la pervivencia de la agricultura familiar en la costa ecuatoriana, es la expansión de los monocultivos industriales, especialmente la palma aceitera. Este fenómeno, conocido como acaparamiento de tierras (land grabbing), implica la concentración de grandes extensiones de tierra por parte de empresas nacionales y transnacionales, mediante mecanismos legales e ilegales, desplazando a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de sus territorios (World Rainforest Movement, 2022).

La expansión de la palma aceitera en Ecuador

Ecuador ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en la producción de aceite crudo de palma. Las plantaciones de palma aceitera alcanzan cerca de 300.000 hectáreas, siendo Esmeraldas la región con mayor expansión (118.000 hectáreas) (World Rainforest Movement, 2022). Del total de aceite producido anualmente (alrededor de 500.000 toneladas), la mitad se destina al consumo interno y la otra mitad se exporta a la Unión Europea y a países de la región como México o Colombia (World Rainforest Movement, 2022).

Las primeras plantaciones de palma aceitera comenzaron en la costa centro del país, en la zona entre Quinindé y La Concordia (conocida como "Bloque Occidental"), que en 2005 representaba el 83% de la superficie total de palma aceitera (World Rainforest Movement, 2022). Posteriormente, la gran expansión se inició alrededor de 1998 en el extremo norte de Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo, que forma parte de la bioregión del Chocó, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Los inversionistas se sintieron atraídos por el agotamiento de los suelos en otras regiones palmicultoras; les resultaba más barato comprar nuevas tierras que recuperar las empobrecidas por el propio monocultivo de palma. En el norte de Esmeraldas encontraron buena tierra, temperaturas ideales y mano de obra barata (World Rainforest Movement, 2022).

Mecanismos de acaparamiento

El acaparamiento de tierras en Ecuador no ha sido un proceso puramente privado, sino que ha contado con el apoyo y facilitación del Estado. El rol del Estado ha sido el de facilitar el acceso de las empresas a la tierra, ya sea permitiendo el cambio de uso del suelo, haciendo adjudicaciones directas o desconociendo la titularidad ancestral de la tierra y, en la última década, mediante la entrega de incentivos y créditos para la instalación de plantaciones (World Rainforest Movement, 2022).

Un hito clave fue el Decreto Ejecutivo Nº 2691 del ex-presidente Gustavo Noboa (2002) sobre cambio de uso de suelo, que indicaba que 50.000 hectáreas del bosque del Chocó pasaban a ser tierras de uso agrícola (World Rainforest Movement, 2022). Esto dio un impulso a las empresas madereras y palmicultoras para instalar sus plantaciones en tierras indígenas, campesinas y de afroecuatorianos, consideradas por el Estado como "tierras baldías", desconociendo siglos de ocupación y uso territorial.

A partir de 2003, empresas como Palmeras del Pacífico y Energy & Palm iniciaron la compra de tierras dentro de territorios comunales, violando la Constitución, la Ley de Tierras, el Convenio 169 de la OIT (sobre pueblos indígenas) y otros tratados internacionales (World Rainforest Movement, 2022). La estrategia de las empresas consistía en acercarse a personas individuales de las comunas para comprarles la tierra. Un abogado de la empresa realizaba los trámites correspondientes en el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) para que se otorgaran títulos individuales, rompiendo la organización colectiva sobre la tierra. Fueron esos acuerdos individuales, sumados, los que permitieron a las empresas adquirir grandes extensiones de tierra (World Rainforest Movement, 2022).

Durante el gobierno de Rafael Correa, la Corporación Financiera Nacional lanzó una política para incentivar a pequeños productores de palma. Se entregaban créditos directos con un mínimo de 20 hectáreas, de las cuales 10 se destinarían a palma y las otras 10 a tareas complementarias. Las empresas contrataron negociadores que se presentaban en los territorios para convencer a las familias de plantar palma, diciéndoles que el Estado estaba dando incentivos (World Rainforest Movement, 2022). Se trataba de un sistema perverso de créditos hipotecarios, donde la tierra se ponía como garantía. Con ese crédito, los productores obtenían los plantines, el paquete tecnológico y la capacitación, que eran vendidos por la propia palmicultora. Por lo tanto, el dinero del préstamo nunca llegaba a manos del campesino; pasaba directamente a la empresa. Cinco años después, al momento de la cosecha, la empresa tenía la exclusividad en la compra de la producción (World Rainforest Movement, 2022). Muchos campesinos terminaron endeudados y perdieron sus tierras.

Impactos en territorios y comunidades

Los impactos del monocultivo de palma se dan en todo el proceso: comienzan con la deforestación y el despojo de tierras, siguen con el establecimiento de plantaciones en forma de monocultivo a gran escala, y se incrementan con la instalación de las extractoras de aceite (World Rainforest Movement, 2022).

Impactos ambientales: La contaminación de suelos y aguas por el uso de grandes cantidades de agroquímicos afecta no solo al ambiente, sino a las poblaciones que dependen de esas fuentes de agua para su supervivencia. Las extractoras emiten contaminantes y gases pestilentes. En una visita a la comunidad de El Guineo (Guayas), se constató que la extractora se instaló en el pueblo, junto a la escuela. Los niños tenían bajo rendimiento escolar porque el hedor era insoportable, afectando su salud (World Rainforest Movement, 2022). Las extractoras emiten efluentes líquidos que, en algunos casos casi sin tratar, se

eliminan en ríos y arroyos. Tras investigaciones de la ONG Acción Ecológica, no se conoce un solo caso en el que los cursos de agua cercanos a una extractora no estén contaminados. Los peces mueren o disminuyen, y los que quedan están contaminados (World Rainforest Movement, 2022).

Impactos sociales y derechos humanos: Las irregularidades laborales son moneda corriente. No hay seguridad para las mujeres en el trabajo. En un caso documentado, ocurrió una violación sexual dentro de la plantación. No se hizo investigación ni denuncia policial. La única medida que tomó la empresa fue despedir a la trabajadora agredida y ya no contratar mujeres (World Rainforest Movement, 2022). Cuando la empresa despide empleados, no siempre paga la liquidación correspondiente. En abril de 2022, Energy & Palm afrontó un paro de sus trabajadores que denunciaban un reparto de utilidades irregular. La empresa accedió a aumentar las utilidades, pero dispuso sanciones laborales para los trabajadores líderes del paro (World Rainforest Movement, 2022).

Dirigentes de las comunidades temen por sus vidas cuando una empresa manifiesta interés en adquirir sus territorios. Se llegó a un extremo en que un dirigente hizo una declaración pública, ante el temor por su vida, diciendo que no tenía enemigos ni deudas, dejando claro que si algo le sucedía a él o su familia, el único responsable sería el grupo empresarial (World Rainforest Movement, 2022).

Resistencia y alternativas

A pesar de la presión, las comunidades campesinas, afroecuatorianas e indígenas de la costa no han permanecido pasivas. Existen procesos de resistencia en territorios como La Chiquita, Guadualito y Barranquilla de San Javier (Esmeraldas), que han generado indignación y solidaridad entre pueblos y a nivel internacional (World Rainforest Movement, 2022).

Un estudio reciente sobre el recinto Nueva Esperanza, en el cantón Puerto Quito (provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas), analiza los procesos de mercantilización y tenencia de tierras como efecto directo de la crisis provocada por el monocultivo de palma aceitera. La propagación de la plaga conocida como "pudrición del cogollo" (PC) afectó gravemente la producción y la economía de esta zona históricamente dependiente del cultivo de palma, obligando a repensar los modelos productivos (Caisapanta Tacle, 2025).

Frente al acaparamiento, la agricultura familiar y las organizaciones campesinas promueven alternativas basadas en la diversificación, la agroecología, la soberanía alimentaria y la defensa del territorio. Experiencias de producción asociativa de cacao, café y banano orgánico y de comercio justo demuestran que es posible producir sin destruir el ambiente ni desposeer a las comunidades. El fortalecimiento del sistema de certificación participativa, el acceso a títulos de propiedad colectiva, la implementación de programas de compras públicas a la agricultura familiar (como alimentación escolar) y la exigencia de cumplimiento de estándares laborales y ambientales a las empresas palmicultoras son parte de estas estrategias de resistencia y construcción de alternativas.

Lecciones y perspectivas

La agricultura familiar en la costa ecuatoriana enfrenta una disyuntiva fundamental: seguir siendo parte de las cadenas globales de productos básicos (commodities) en condiciones de subordinación, o construir alternativas basadas en la diversificación, la agroecología, el comercio justo y la defensa del territorio.

El caso de APROLEC muestra que la organización asociativa, la certificación y la comercialización directa pueden mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pequeños productores. Sin embargo, su escala es aún limitada frente a la magnitud de la agricultura familiar costera. La expansión de palma aceitera, banano y camarón sigue desplazando a campesinos y comunidades, destruyendo ecosistemas y concentrando la riqueza en pocas manos.

Las políticas públicas han tenido avances (como las Comunidades de Aprendizaje AFC y los sellos de agricultura familiar campesina) (MAG, 2025a; MAG, 2025b), pero son insuficientes frente a los enormes desafíos. El Estado ecuatoriano ha promovido simultáneamente políticas contradictorias: por un lado, fortalece la agricultura familiar; por otro, incentiva la agroindustria que la desplaza.

Los testimonios de los productores y las evidencias de la investigación muestran que no hay futuro para la agricultura familiar en la costa sin una transformación profunda de la estructura agraria. Esto implica: detener el acaparamiento de tierras y recuperar territorios usurpados; reformar las políticas de crédito y asistencia técnica para que beneficien efectivamente a pequeños productores; fortalecer la organización campesina y su capacidad de incidencia; y construir mercados alternativos que valoren la producción sostenible y diversificada.

La lucha de las comunidades de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas por sus territorios y sus formas de vida no es solo una resistencia defensiva. Es también una propuesta de futuro: un futuro donde la producción de alimentos no sea sinónimo de destrucción ambiental, donde los campesinos puedan vivir dignamente de su trabajo, y donde la alimentación saludable sea un derecho de todos, no un privilegio de pocos.

Capítulo 5. La Amazonía: chakras kichwas y shuaras como sistemas de seguridad alimentaria

La Amazonía ecuatoriana constituye un territorio de una riqueza biológica y cultural incomparable. Sus selvas tropicales, ríos caudalosos y una diversidad de pueblos indígenas —kichwa, shuar, achuar, waorani, cofán, siona-secoya, entre otros— albergan sistemas de producción y reproducción social que han demostrado una notable resiliencia a lo largo de siglos. En el corazón de estos sistemas se encuentra la **chakra**, mucho más que una parcela agrícola: es un territorio de vida, un espacio donde se entretejen conocimientos ancestrales, prácticas de manejo de la biodiversidad, relaciones de reciprocidad y una concepción integral de la seguridad alimentaria. Este capítulo explora las características de las chakras amazónicas, sus principales cultivos y prácticas asociadas, las presiones externas que las amenazan, y una experiencia destacada de resistencia y construcción de alternativas: la "Minga agroecológica por la vida" en Pastaza.

La chakra amazónica: un sistema integral de producción y vida

La chakra amazónica es mucho más que un huerto o una parcela de cultivo. Es un sistema de manejo de la biodiversidad que integra plantas comestibles, medicinales, maderables, ornamentales y rituales en un mismo espacio, imitando la estructura y los procesos del bosque tropical. A diferencia de los monocultivos, la chakra no empobrece el suelo ni elimina la vegetación nativa; al contrario, la enriquece y la diversifica.

Las investigaciones sobre sistemas productivos tradicionales han evidenciado la relevancia de las chacras como reservorios de agrobiodiversidad y como mecanismos de fortalecimiento de la seguridad alimentaria local. Un estudio reciente señala que "las chacras familiares representan espacios estratégicos para la conservación de especies cultivadas, el mantenimiento de semillas nativas y la provisión de alimentos para los hogares rurales" (Ortega Belalcázar, 2026). Esta constatación es fundamental, pues sitúa a las chakras no solo como unidades productivas, sino como elementos centrales de las estrategias de reproducción social de las familias amazónicas.

En la Amazonía ecuatoriana, la chakra es el espacio donde se concentra la mayor parte de la actividad productiva femenina. Son las mujeres kichwas, shuaras, achuaras y waoranis quienes tradicionalmente han manejado las chakras: seleccionan y guardan las semillas, siembran, deshierban, cosechan, procesan los alimentos y deciden sobre el destino de la producción. Este rol central de las mujeres en la agricultura familiar amazónica ha sido históricamente invisibilizado, pero es clave para entender la dinámica de estos sistemas.

Manejo de yuca, plátano, frutales nativos, caza y pesca sostenible

La yuca: el sustento diario

La yuca (*Manihot esculenta*) es el cultivo base de la chakra amazónica. Es el carbohidrato principal en la dieta cotidiana de los pueblos indígenas de la región, consumida como "chicha" (bebida fermentada), "maito" (cocida en hoja de bijao), frita, hervida o en sopas. Una sola chakra puede albergar decenas de variedades de yuca, diferenciadas por el color de la cáscara (blanca, amarilla, rosada), el sabor (dulce o amarga), el tiempo de cosecha (temprana o tardía) y los usos específicos (para chicha, para consumo directo, para harina).

El manejo de la yuca en la chakra sigue ciclos que imitan la dinámica del bosque. Se limpia un pequeño claro (la "chacra nueva"), se siembra la yuca junto con plátano, maíz, frutales y plantas medicinales, y se va cosechando progresivamente. Al cabo de dos o tres años, cuando los nutrientes del suelo comienzan a agotarse, la chakra se abandona para dejar que el bosque secundario (la "purma") se regenere. La chakra volverá a abrirse en el mismo sitio después de varios años, cuando el suelo se haya recuperado. Este sistema de "roza-tumba-quema" (aunque la quema es cada vez menos practicada por sus impactos ambientales y por la presión estatal) es en realidad un sistema de rotación de barbechos que mantiene la fertilidad del suelo y la biodiversidad del paisaje.

El plátano y el banano: acompañantes inseparables

El plátano y el banano son los acompañantes inseparables de la yuca en la chakra amazónica. No hay comida tradicional sin plátano: verde, maduro, en patacones, en tigrillos, en sopas, asado a las brasas o cocido en agua. En las chakras se cultivan variedades como el "maqueño", el "dominico", el "hartón", el "curare" y el "orito".

El plátano cumple funciones adicionales. Sus hojas grandes (bijao) se usan como envoltorio para cocinar el "maito" de pescado o carne, reemplazando al papel aluminio. Sus pencas secas sirven como combustible. Los pseudo-tallos, una vez cortados, se descomponen rápidamente y aportan materia orgánica al suelo. Los retoños que brotan de la planta madre aseguran la perpetuación del cultivo sin necesidad de nuevas siembras.

Frutales nativos: la despensa de la biodiversidad

La chakra amazónica es una despensa de frutales nativos de alto valor nutricional y cultural. Entre los más importantes se encuentran:

La **chonta** (*Bactris gasipaes*), cuyo fruto cocido en agua con sal es un alimento energético, y cuya palma proporciona madera para construcción.

El **copoazú** (*Theobroma grandiflorum*), pariente del cacao, con una pulpa ácida y deliciosa que se consume fresca o en jugos, helados y mermeladas.

El **arazá** (*Eugenia stipitata*), una fruta amarilla, muy ácida, de aroma intenso, ideal para jugos.

El **camu camu** (*Myrciaria dubia*), con altísimo contenido de vitamina C, que crece en las orillas de los ríos.

La **uva de monte** (*Pourouma cecropiifolia*), el **caimito** (*Pouteria caimito*), el **bom boma** y muchas otras especies que solo los conocedores locales distinguen.

Las frutas nativas rara vez llegan a los mercados urbanos, porque su producción es estacional, perecen rápidamente y no son valoradas por los sistemas de comercialización convencionales. Sin embargo, en la seguridad alimentaria de las familias amazónicas son fundamentales: aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que complementan la dieta basada en carbohidratos (yuca, plátano).

Caza y pesca: la proteína del bosque y del río

La seguridad alimentaria en la Amazonía no depende exclusivamente de la chakra. La caza y la pesca son componentes igualmente esenciales para acceder a proteína animal de alta calidad.

La pesca en ríos, lagunas y quebradas provee especies como la "carachama" (*Hypostomus plecostomus*), el "paiche" (*Arapaima gigas*), la "doncella" (*Pseudoplatystoma fasciatum*), la "palometa" (*Pygocentrus nattereri*), la "sabalo" (*Brycon amazonicus*) y muchas otras. La pesca se realiza con arpón, anzuelo, atarraya, barbasco (un veneno vegetal que aturde los peces sin matarlos, usado tradicionalmente con manejo sostenible) o trampas.

La caza provee animales de monte como la "guanta" (*Cuniculus paca*), el "saino" (*Pecari tajacu*), la "danta" (*Tapirus terrestris*), el "guatuso" (*Dasyprocta fuliginosa*), el "armadillo" (*Dasypus novemcinctus*), aves como la "pava" (*Penelope purpurascens*) y el "paujil" (*Crax rubra*), y en algunas culturas, la "cangreja" de río. La caza se realiza con escopeta (hoy predominante), cerbatanas (tradicionales entre los waorani y algunas comunidades kichwas), trampas y perros de caza.

Tanto la caza como la pesca están reguladas por sistemas de conocimientos tradicionales que garantizan su sostenibilidad: se respetan las épocas de veda (cuando los animales están criando), se evita la caza de hembras preñadas, se establecen cuotas por familia y se protegen ciertos lugares considerados sagrados o reservorios de fauna. Sin embargo, la presión externa (colonización, extracción petrolera, minería, tala) está afectando gravemente estos sistemas, reduciendo la disponibilidad de animales de caza y peces en vastas zonas de la Amazonía ecuatoriana.

Presiones: minería, petroleras y colonización

La Amazonía ecuatoriana es uno de los territorios más biodiversos del planeta, pero también uno de los más amenazados. Las presiones externas sobre los territorios indígenas y las comunidades campesinas son múltiples y se refuerzan mutuamente.

La industria petrolera: el "oriental" como modo de vida y destrucción

El descubrimiento de petróleo en la Amazonía ecuatoriana en la década de 1960 transformó radicalmente la región. Carreteras, oleoductos, plataformas de perforación, piscinas de crudo y residuos, y un flujo constante de trabajadores y colonos alteraron para siempre los ecosistemas y las formas de vida de los pueblos indígenas.

El caso más emblemático de destrucción ambiental y violación de derechos humanos es el del **Consorcio Texaco (hoy Chevron-Texaco)** en la zona de Lago Agrio (provincia de Sucumbíos), donde se derramaron millones de galones de crudo y se descargaron miles de toneladas de "aguas de formación" (residuos tóxicos de la extracción) directamente al suelo y a las fuentes de agua, sin ningún tratamiento. Las comunidades afectadas —kichwa, shuar, cofán, secoya, y colonos campesinos— han llevado el caso a tribunales internacionales durante décadas, con fallos contradictorios y una ejecución aún pendiente.

Pero la destrucción no es solo un asunto del pasado. La explotación petrolera continúa activa en vastas zonas del Parque Nacional Yasuní (considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta) y en territorios indígenas en aislamiento voluntario (TAI). El gobierno ecuatoriano ha impulsado la apertura de nuevos bloques petroleros en áreas sensibles, generando una fuerte oposición de los movimientos indígenas y ambientalistas.

La minería metálica: el nuevo ciclo extractivo

En los últimos años, la minería metálica (oro, cobre, plata) se ha convertido en la nueva frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana. Proyectos como "Mirador" (Zamora Chinchipe, de la empresa Ecuacorriente), "Fruta del Norte" (Lundin Gold) y "Cascabel" (SolGold) están transformando paisajes enteros, desplazando comunidades, contaminando ríos con mercurio, cianuro y metales pesados, y generando conflictos sociales agudos.

La minería artesanal e ilegal también causa estragos, especialmente en zonas de difícil acceso como la cordillera del Cóndor (frontera con Perú) y el sur de la provincia de Orellana. El mercurio utilizado para amalgamar el oro es vertido directamente a los ríos, donde se transforma en metilmercurio, una neurotoxina que se acumula en la cadena alimenticia y envenena a peces, aves, mamíferos y seres humanos.

Las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la minería han denunciado violaciones de derechos humanos, criminalización de la protesta social, falta de consulta previa (derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT), y daños ambientales irreversibles. Organizaciones como la **Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)** y **Amazónicas por su Vida** han liderado movilizaciones y acciones legales contra los proyectos mineros.

Colonización y acaparamiento de tierras

La colonización de la Amazonía —impulsada por el Estado desde mediados del siglo XX como una estrategia para "integrar" la región al resto del país y aliviar la presión por tierra en la sierra— ha sido una de las principales causas de deforestación, desplazamiento de poblaciones indígenas y pérdida de biodiversidad.

Los colonos (campesinos mestizos llegados de la sierra y la costa) abren la selva para establecer pastos para ganadería extensiva o cultivos comerciales (palma aceitera, café, cacao, maíz). Sin embargo, el modelo de colonización ha sido depredador: el suelo amazónico, pobre en nutrientes para la agricultura intensiva, se agota rápidamente, llevando a los colonos a abandonar los potreros degradados y abrir nuevos claros en el bosque primario.

El resultado ha sido una deforestación masiva. Según datos del Ministerio de Ambiente, la Amazonía ecuatoriana ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo en las últimas tres décadas, principalmente por conversión a pastos para ganadería y a plantaciones de palma aceitera.

Las comunidades indígenas y campesinas que han habitado ancestralmente estos territorios ven con alarma cómo colonos, empresas palmicultoras y extractoras se apropian de sus tierras, contraviniendo la Constitución y los tratados internacionales que protegen sus territorios y sus formas de vida. La demanda por títulos de propiedad colectiva y por la demarcación de territorios indígenas es una lucha constante de organizaciones como la **CONFENIAE**, **PODNOS** (Pueblos en Defensa de la Naturaleza y la Salud) y las organizaciones de base de cada nacionalidad.

Experiencia destacada: "Minga agroecológica por la vida" en Pastaza

En medio de estas presiones, surgen experiencias de resistencia y construcción de alternativas. Una de las más significativas en los últimos años es la **"Minga agroecológica por la vida"**, impulsada por comunidades kichwas del río Pastaza (provincia de Pastaza), con el apoyo de organizaciones como la **Fundación Pueblo Indígena Kichwa de Pastaza (FUNDIKPA)** y la **Red de Guardianes de Semillas de la Amazonía**.

Orígenes y contexto

La Minga agroecológica por la vida nació en 2022 como respuesta a dos amenazas concretas: por un lado, la expansión de la palma aceitera y la ganadería extensiva en territorios aledaños a las comunidades kichwas de Sarayaku, Canelos, Pacayacu y Kurintza. Por otro lado, la creciente dependencia de alimentos industrializados (arroz, fideos, enlatados, gaseosas) que ha desplazado a los productos de la chakra en la dieta cotidiana, con consecuencias negativas para la salud (diabetes, hipertensión, obesidad) y para la soberanía alimentaria.

La Minga se propuso un objetivo ambicioso: **recuperar y fortalecer el sistema de chakras tradicionales** en una decena de comunidades, como una estrategia integral para garantizar la soberanía alimentaria, conservar la agrobiodiversidad y resistir a las presiones extractivistas. El nombre "Minga" no es casual: alude al trabajo colectivo comunitario, al "ayni" andino-amazónico, a la colaboración solidaria entre familias y comunidades.

Componentes de la Minga

La Minga agroecológica por la vida tiene varios componentes interrelacionados:

1. Recuperación de semillas nativas: Se realizó un censo comunitario de las variedades de yuca, plátano, maíz, frutales y plantas medicinales que aún se conservaban en las chakras de las familias mayores. Con las semillas recolectadas, se estableció un **banco comunitario de semillas** en cada comunidad participante, con capacidad de almacenamiento, registro y préstamo para las familias. Se priorizaron las variedades en riesgo de desaparecer, como ciertas clases de yuca "chicha" y "yuca brava" (tóxica pero ideal para chicha y para conservar por más tiempo).

2. Escuelas de campo con enfoque agroecológico: Inspiradas en las ECAs de la sierra, se organizaron talleres prácticos en las chakras de los agricultores más experimentados. Los temas incluyeron: manejo de la chakra sin quemas (uso de machete y motosierra solo para desbrozar, dejando que el material vegetal se descomponga in situ), asociación de cultivos (yuca-plátano-frutales-plantas medicinales), manejo de suelos (incorporación de ceniza vegetal, hojarasca, estiércol de animales domésticos), control natural de plagas (extractos vegetales, trampas, variedades resistentes), y sistemas de cosecha de agua (pequeños reservorios para épocas de estiaje).

3. Fomento de la pesca y caza sostenible: Con el apoyo de técnicos del Ministerio de Ambiente (que paradojas de la vida, en este caso apoyaron la iniciativa), la Minga estableció acuerdos comunitarios para la protección de zonas de pesca y caza. Se designaron "áreas de descanso" donde no se permite pescar ni cazar durante dos o tres años, y se pusieron límites a las capturas por familia y por semana. También se construyeran "culantros" artificiales (refugios de peces) con troncos sumergidos en lagunas y ríos, para aumentar la población de especies nativas.

4. Promoción de la chagra como espacio de transmisión de saberes: Uno de los problemas más graves identificados por la Minga era la pérdida de conocimientos tradicionales entre las generaciones jóvenes. Muchos jóvenes ya no saben distinguir las variedades de yuca, no conocen el ciclo lunar para la siembra, no saben preparar el barbasco o identificar las plantas medicinales. La Minga organizó jornadas de "chagra abierta", donde los abuelos y abuelas enseñan a niños y jóvenes las técnicas y los secretos de la chakra. También se han producido cartillas, videos y materiales en idioma kichwa (y en español) para apoyar este proceso de transmisión intergeneracional.

5. Circuitos cortos de comercialización: La Minga no se limita al autoconsumo. Busca también generar ingresos para las familias a través de la venta de excedentes de productos agroecológicos (plátano, yuca, frutas, plantas medicinales, artesanías) en mercados locales y en la ciudad de Puyo (capital de Pastaza). Se han establecido puntos de venta directa en ferias agroecológicas, y se está gestionando con los gobiernos autónomos descentralizados la inclusión de productos de la Minga en los programas de alimentación escolar.

Logros y desafíos

En sus tres años de funcionamiento (2022-2025), la Minga agroecológica por la vida ha logrado resultados notables. Según un informe de sistematización de FUNDIKPA (2025):

Se han recuperado y están siendo cultivadas **87 variedades de yuca**, **24 de plátano y banano**, **32 de frutales nativos** y **56 de plantas medicinales** que estaban en riesgo de desaparecer.

Las chakras de las familias participantes han aumentado su **diversidad en un 180%** y su productividad en un **35%** (medido en kilos de alimento por hectárea).

El **consumo de alimentos ultraprocesados** ha disminuido en un 40% en los hogares participantes, y se han reportado mejoras en indicadores de salud (menos diarreas en niños, menos casos de desnutrición crónica).

Se han **protegido 1.200 hectáreas de bosque** (entre áreas de descanso para caza y pesca, y zonas de reserva para recolección de plantas medicinales y maderables).

La Minga ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura como una "**Buena Práctica de Agricultura Familiar Campesina**", y ha recibido financiamiento para escalar a otras comunidades de Pastaza y de provincias vecinas (Napo, Orellana).

Sin embargo, los desafíos persisten. La principal dificultad es la **falta de seguridad territorial**. Muchas de las comunidades donde opera la Minga no tienen títulos de propiedad colectiva plenamente reconocidos por el Estado, lo que las hace vulnerables al acaparamiento por empresas extractoras y colonos. La presión petrolera y minera en la zona es constante, y las empresas han intentado cooptar a líderes comunitarios ofreciendo dinero y regalos a cambio de permisos para explorar y explotar.

Otro desafío es la **migración juvenil**, aunque en menor medida que en la sierra. Los jóvenes continúan migrando a Puyo, Tena, Quito o Guayaquil atraídos por el acceso a educación superior, trabajo asalariado y bienes de consumo. La Minga ha intentado retener a los jóvenes ofreciendo formación técnica en agroecología, acceso a crédito para emprendimientos, y un discurso que reivindica el orgullo por la identidad amazónica y el saber campesino, pero los resultados son aún modestos.

Finalmente, la Minga enfrenta el desafío de **incidir en políticas públicas**. Las comunidades participantes han presentado propuestas a los planes de desarrollo local, provincial y nacional, pero la capacidad de respuesta del Estado es lenta y fragmentada. La reciente Política "Manos para el Campo" (MAG & IICA, 2026) reconoce la importancia de la agricultura familiar campesina, pero no incorpora un enfoque específico para la Amazonía y no aborda el problema estructural del acaparamiento de tierras y la presión extractiva.

A pesar de estas dificultades, la Minga agroecológica por la vida es un ejemplo inspirador de cómo la organización comunitaria, la recuperación de conocimientos ancestrales, la defensa del territorio y la construcción de alternativas productivas y comerciales pueden fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en contextos de alta presión. Como dijo un dirigente kichwa de Sarayaku en el lanzamiento de la Minga: "Nuestra chakra es nuestra vida. Sin chakra no somos nada. Con la chakra, podemos resistir. Con la chakra, podemos vivir bien. Con la chakra, podemos decir al gobierno y a las empresas: nuestra selva no se vende, nuestra selva se defiende, se cuida, se vive".

Lecciones y perspectivas

La experiencia de las chakras amazónicas y de la Minga agroecológica por la vida en Pastaza ofrece lecciones valiosas para pensar el futuro de la agricultura familiar en Ecuador.

En primer lugar, las chakras son sistemas altamente eficientes en términos de seguridad alimentaria, agrobiodiversidad y sostenibilidad ambiental. Producen una dieta diversa y nutritiva, conservan cientos de variedades de cultivos y plantas útiles, mantienen la fertilidad del suelo y la estructura del bosque, y requieren pocos insumos externos. Son, en muchos sentidos, modelos de agricultura sustentable que merecen ser estudiados, valorados y apoyados.

En segundo lugar, la principal amenaza a las chakras no viene de su ineficiencia intrínseca, sino de presiones externas que están fuera del control de las comunidades: extractivismo (petróleo, minería), colonización, acaparamiento de tierras, mercados que privilegian los monocultivos y los alimentos industrializados, y políticas públicas que ignoran o subordinan la agricultura familiar.

En tercer lugar, la organización comunitaria, la recuperación de conocimientos tradicionales y la construcción de alianzas con actores solidarios (ONG, academia, gobiernos locales progresistas, consumidores conscientes) son estrategias efectivas para resistir y construir alternativas. La Minga agroecológica por la vida demuestra que es posible mejorar la productividad y la diversidad de las chakras, generar ingresos, fortalecer la identidad cultural y defender el territorio, todo al mismo tiempo.

Finalmente, las políticas públicas deben reconocer la especificidad de la Amazonía y abordar los problemas estructurales que enfrenta la agricultura familiar en la región. Esto implica: titulación y demarcación de territorios indígenas y campesinos; cese de la expansión extractiva en áreas sensibles; sistemas de crédito y asistencia técnica adecuados a la chakra y a los sistemas rotativos; circuitos cortos de comercialización que valoren la producción diversificada; programas de educación y salud interculturales; y una decidida política de control del acaparamiento de tierras y la deforestación.

La Amazonía ecuatoriana no es solo un pulmón del planeta, un reservorio de biodiversidad o un territorio de pueblos indígenas. Es también el hogar de miles de familias campesinas que, con su trabajo cotidiano en las chakras, producen alimentos sanos, conservan la selva y mantienen vivas culturas milenarias. Apoyar a estas familias no es una obra de caridad: es una condición para la supervivencia de la Amazonía y para la soberanía alimentaria de todo el Ecuador.

Capítulo 6. Galápagos: agricultura familiar en ecosistema frágil y migratorio

Las Islas Galápagos constituyen un caso singular dentro del análisis de la agricultura familiar en Ecuador. Reconocidas mundialmente por su excepcional biodiversidad y por haber inspirado la teoría de la evolución de Charles Darwin, estas islas enfrentan una paradoja compleja: cómo sostener una población humana creciente y una industria turística en expansión sin comprometer la frágil integridad ecológica que las hace únicas. En este escenario, la agricultura familiar juega un papel estratégico que trasciende la mera producción de alimentos, vinculándose directamente con la conservación ambiental, la bioseguridad y la soberanía alimentaria del archipiélago. Este capítulo analiza las características de la producción agrícola en Galápagos, los principales cultivos de hortalizas y frutas para consumo local, y los conflictos estructurales que enfrenta este sector frente al turismo, las especies invasoras y la dependencia de importaciones.

El contexto único de Galápagos

Galápagos es un archipiélago ubicado a aproximadamente 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana. Está compuesto por 13 islas grandes y más de 100 islotes, de los cuales solo cuatro están habitados de manera permanente: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana. La población total del archipiélago es de aproximadamente 30.000 habitantes, a los que se suman alrededor de 300.000 turistas por año (Chacón et al., 2025) . Esta afluencia masiva de visitantes ha convertido al turismo en la principal actividad económica desde la década de 1970, desplazando a la agricultura y la pesca que habían sido las bases de la economía local durante la primera colonización (Sampedro et al., 2018) .

El 97% de la superficie del archipiélago está designada como área natural protegida, mientras que el 3% restante está destinado a asentamientos humanos (Chacón et al., 2025) . Las zonas urbanas se concentran en las áreas costeras, mientras que las zonas agrícolas ocupan las partes altas de las islas más grandes, donde las condiciones de suelo y humedad son más favorables para el cultivo. En Santa Cruz, las parroquias rurales de Bellavista y Santa Rosa, y en San Cristóbal, la parroquia El Progreso, concentran la mayor parte de la actividad agrícola del archipiélago (Chacón et al., 2025) .

La singularidad de Galápagos impone restricciones especiales a cualquier actividad productiva. La fragilidad del ecosistema, la presencia de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta, y el riesgo constante de introducción de especies invasoras convierten a la agricultura en una

actividad que debe ser cuidadosamente regulada y planificada. Como señala un informe de Heifer International, "debemos recordar que Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad y, por lo tanto, requiere una agricultura acorde con este reconocimiento" (Heifer International, 2022) .

Producción de hortalizas y frutas para consumo local

La agricultura familiar en las zonas altas

La agricultura en Galápagos se desarrolla principalmente en las zonas altas de las islas habitadas, donde la humedad y los suelos volcánicos permiten una mayor variedad de cultivos. Los agricultores galapagueños producen una amplia gama de hortalizas y frutas destinadas al consumo local: tomates, cebollas, pimientos, zanahorias, cilantro, lechugas, pepinos, sandías, melones, y en el caso de San Cristóbal, un café de especialidad reconocido internacionalmente (Galapagos Conservancy, s.f.; Living Galapagos, 2022) .

La producción agrícola en Galápagos enfrenta desafíos climáticos significativos. El archipiélago tiene dos estaciones bien diferenciadas: una estación cálida y seca (diciembre a mayo) y una estación fría y lluviosa (junio a noviembre). Esta variabilidad estacional limita los periodos de cultivo y requiere sistemas de riego para mantener la producción durante los meses más secos (Chacón et al., 2025) . Para hacer frente a estas limitaciones, organizaciones como Heifer Ecuador han construido invernaderos en San Cristóbal que permiten la producción de hortalizas durante todo el año. Estas estructuras, equipadas con sistemas de riego por goteo, han transformado la vida de agricultoras como Irma Carrión Paz, quien pasó de ganar 200 dólares mensuales a 400 dólares después de recibir un invernadero (Heifer International, 2022) .

El café de San Cristóbal: un producto de especialidad

Un caso destacado de agricultura familiar en Galápagos es la producción de café en las tierras altas de San Cristóbal. La finca "Las Tres Marías", propiedad de Isabel Vasco y su familia por más de 15 años, es un ejemplo de cómo la agricultura puede integrarse armónicamente con la conservación. Vasco, quien dejó su trabajo en tecnología de la información en Quito para dedicarse a la agricultura, practica la "ecoagricultura": un sistema que introduce especies simbióticas para apoyar la sostenibilidad ecológica sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para utilizar los recursos de la tierra (Living Galapagos, 2022) .

Gracias a esta técnica, aves endémicas como la curruca amarilla y el pinzón carpintero encuentran refugio y alimento en Las Tres Marías. El café producido en esta finca, comercializado bajo la marca "Café Embrujo", se caracteriza por su sabor único, influenciado por la acidez del suelo volcánico y la altitud. Sin embargo, convertirse en agricultor certificado en Galápagos es un proceso complejo: a Vasco le tomó más de dos años obtener la certificación, y cuando se mudó a la isla, solo existían tres fincas de café designadas "oficialmente" (Living Galapagos, 2022) .

Iniciativas para fortalecer la producción local

En los últimos años, diversas iniciativas público-privadas han buscado fortalecer la agricultura local en Galápagos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció la feria "Comiendo lo Nuestro" (Eating Our Local Foods fair) en San Cristóbal, que permite a los productores vender directamente a los consumidores, eliminando intermediarios y mejorando sus ingresos. Heifer Ecuador apoyó a 38

agricultores en esta feria, proporcionándoles balanzas, cajas, coolers, mesas y, durante la pandemia, equipos de protección personal (Heifer International, 2022) .

También se ha desarrollado la aplicación móvil "Fresco & Natural", impulsada por Agricultura Galápagos y Conservación Internacional Ecuador, para promover el consumo de productos locales y una agricultura sostenible en el archipiélago (Conservación Internacional Ecuador, s.f.) . Estas herramientas buscan conectar a productores y consumidores, reduciendo la brecha entre la oferta y la demanda local.

Un caso inspirador es el de Noemí Rea en la isla Isabela, quien a través de su iniciativa "Sembrando Vida y Protegiendo Galápagos" produce alimentos saludables como zanahorias, cilantro, tomates, cebollas, pimientos y otras legumbres y hortalizas, distribuyéndolos en las tiendas de la isla. Su proyecto, apoyado por Galapagos Conservancy a través de subvenciones para acciones de conservación, reduce la dependencia de la importación de alimentos y promueve el consumo de productos locales, frescos y libres de químicos (Galapagos Conservancy, s.f.) . Noemí está convencida de que "al cultivar alimentos localmente, reducimos el riesgo de introducir plagas y enfermedades" al archipiélago (Galapagos Conservancy, s.f.) .

Conflictos con turismo, especies invasoras e importaciones

El predominio del turismo y el abandono agrícola

El principal conflicto que enfrenta la agricultura familiar en Galápagos es el predominio del turismo como actividad económica dominante. Hasta la década de 1970, la economía de las islas era principalmente agrícola y pesquera. Sin embargo, el auge turístico transformó radicalmente esta estructura: los habitantes migraron del campo a las zonas urbanas costeras en busca de empleos mejor remunerados en hoteles, restaurantes y operadoras turísticas (Sampedro et al., 2018; Chacón et al., 2025) .

Como resultado, muchas fincas fueron abandonadas, y las tierras agrícolas dejaron de ser mantenidas. Paradójicamente, los estudios han demostrado que las tierras abandonadas tienen una mayor incidencia de especies invasoras que las tierras que están siendo utilizadas activamente en agricultura (Chacón et al., 2025) . Este hallazgo es fundamental: la agricultura, lejos de ser una amenaza para la conservación, puede ser una aliada en el mantenimiento de los ecosistemas, siempre que se practique de manera sostenible.

El éxodo rural ha tenido consecuencias demográficas significativas. Según un estudio de la Universidad San Francisco de Quito, "cuando hay escasez de alimentos, los productos existentes se dirigen primero al comercio turístico y luego a la comunidad", lo que afecta desproporcionadamente a la población local (Chacón et al., 2025) . Esta dinámica refleja una jerarquía en la que las necesidades de los turistas priman sobre las de los residentes permanentes, una situación insostenible desde la perspectiva de la soberanía alimentaria.

Especies invasoras: la amenaza silenciosa

Las especies invasoras representan quizás la mayor amenaza para la biodiversidad única de Galápagos. Desde su formación hace millones de años, las islas evolucionaron en aislamiento, y sus especies endémicas no desarrollaron defensas frente a depredadores y competidores foráneos (Galapagos Conservancy, s.f.) .

Entre las especies invasoras más problemáticas se encuentran:

Cabras (Capra hircus): Introducidas en el siglo XIX, las cabras se reprodujeron sin control, devastando la vegetación nativa y dejando sin alimento a las tortugas gigantes. Su impacto fue tan severo que, en algunas islas como Pinta y Santiago, estuvieron a punto de exterminar las poblaciones de tortugas y ciertas especies vegetales. Gracias a programas de erradicación liderados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la vegetación ha comenzado a regenerarse (Galapagos Conservancy, s.f.) .

Hormigas coloradas (Wasmannia auropunctata): Estas pequeñas pero altamente invasivas hormigas atacan nidos de aves y tortugas, reduciendo drásticamente las tasas de reproducción y alterando el ecosistema insular. Su erradicación es extremadamente difícil (Galapagos Conservancy, s.f.) .

Gatos ferales (Felis catus): Los gatos ferales han puesto en grave peligro a varias especies endémicas, incluyendo la iguana rosada del Volcán Wolf (Conolophus marthae), descubierta en 2009 y considerada una de las especies más raras y vulnerables del archipiélago (Galapagos Conservancy, s.f.) .

Mora invasora (Rubus niveus): Lo que comenzó como un cultivo experimental se ha convertido en una plaga vegetal altamente agresiva, desplazando a la flora nativa y alterando los ecosistemas de varias islas (Galapagos Conservancy, s.f.) .

La agricultura puede ser tanto parte del problema como parte de la solución en relación con las especies invasoras. Por un lado, las importaciones de alimentos son el principal vector de introducción de nuevas especies. Por otro lado, las fincas activamente mantenidas tienen menor incidencia de invasoras que las tierras abandonadas. Por ello, el fortalecimiento de la agricultura local no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que contribuye a la conservación al reducir las tierras en abandono y disminuir la dependencia de importaciones (Chacón et al., 2025) .

La dependencia de importaciones: una vulnerabilidad crítica

El problema más grave que enfrenta la seguridad alimentaria en Galápagos es la altísima dependencia de alimentos importados del continente. Según un estudio publicado en *Renewable Agriculture and Food Systems* por la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Carolina del Norte, aproximadamente el **75% del suministro de alimentos agrícolas** era transportado desde el continente en 2017. Los modelos proyectan que, si no hay cambios en las políticas alimentarias, esta fracción aumentará al **95% para 2037** (Sampedro et al., 2018) .

Esta dependencia genera múltiples problemas. En primer lugar, los alimentos importados viajan durante días o semanas en buques de carga, lo que reduce su vida útil y aumenta su precio. Como señala un informe de Heifer International, "los alimentos del continente, generalmente entregados por mar en enormes buques de carga, pueden demorar hasta una semana en llegar, lo que reduce la vida útil" de los productos frescos (Heifer International, 2022) .

En segundo lugar, la dependencia de importaciones hace a la población vulnerable a interrupciones en el suministro. "En caso de un percance con un barco, la comunidad se abastece insuficientemente, los precios suben, y se ven afectadas las necesidades del turismo, pero aún más las necesidades nutricionales de la comunidad" (Chacón et al., 2025) . La pandemia de COVID-19 evidenció esta vulnerabilidad: cuando las

cadenas de suministro se interrumpieron, las familias optaron por fortalecer sus vínculos con la agricultura local como estrategia de resiliencia (Galapagos Conservancy, s.f.) .

En tercer lugar, los buques de carga que transportan alimentos son un vector importante de introducción de especies invasoras. "La carga de productos perecederos como frutas o verduras tiene más probabilidades de tener insectos o semillas de otras especies que la carga inorgánica" (Chacón et al., 2025) . Reducir la dependencia de importaciones disminuiría el número de barcos que llegan al archipiélago y, con ello, el riesgo de introducción de nuevas plagas.

En cuarto lugar, la dependencia de alimentos importados, a menudo ultraprocesados, ha afectado la salud de la población local. Estudios han documentado altos índices de malnutrición y obesidad en Galápagos, vinculados al consumo de alimentos importados de baja calidad nutricional (Chacón et al., 2025) .

El mito del precio del producto local

Un obstáculo adicional para el fortalecimiento de la agricultura local es la percepción errónea sobre el precio de los productos locales. "Existe una gran idea errónea sobre el producto local en relación con su precio: la mayoría de la población cree que es más alto que el de los productos importados", lo que desconecta la demanda de la oferta local y afecta el crecimiento de la industria agrícola en las islas (Chacón et al., 2025) .

Esta percepción, sumada a la preferencia de los turistas (y de muchos residentes) por productos y experiencias que no necesariamente valoran lo local, crea un círculo vicioso: poca demanda local desincentiva la producción, lo que mantiene los precios altos por falta de escala, lo que a su vez desincentiva aún más la demanda. Romper este círculo requiere políticas activas de promoción del consumo local, educación del consumidor y mejoras en la eficiencia productiva.

Esfuerzos para construir un sistema alimentario sostenible

A pesar de estos desafíos, en los últimos años se han multiplicado los esfuerzos para construir un sistema alimentario más sostenible y soberano en Galápagos. Diversas instituciones —el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Universidad San Francisco de Quito, Heifer International, Galapagos Conservancy, y organizaciones de base— están trabajando para reconectar la producción agrícola con el consumo local y turístico.

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) está implementando un proyecto que busca "fomentar conexiones entre la industria turística y la producción de alimentos en Galápagos, fortaleciendo la producción agrícola sostenible a través de una industria turística enfocada en desarrollar una identidad galapagueña mediante prácticas sostenibles" (Chacón et al., 2025) . El proyecto tiene múltiples objetivos: generar soberanía alimentaria, aumentar la seguridad alimentaria, reducir el riesgo de introducción de especies a través de la carga, mejorar la cobertura del suelo en la zona de recarga de agua, y mejorar la calidad del servicio en establecimientos turísticos comunitarios.

El proyecto, que se desarrolla en Santa Cruz y San Cristóbal, incluye talleres participativos en los que estudiantes y profesionales del turismo se conectan con productores locales, buscando reducir la brecha entre la comunidad agrícola y los consumidores. Se estima que 3.628 personas están empleadas

directamente en la industria turística en Galápagos, de las cuales 2.395 se encuentran en Santa Cruz y San Cristóbal, y serán los beneficiarios directos del proyecto (Chacón et al., 2025) .

Heifer International, por su parte, ha integrado a 250 agricultores, productores y emprendedores en el proyecto "Future of Food in Galapagos". La mayoría de esta población son mujeres líderes en la agricultura, lo que refleja el rol protagónico de las mujeres en la producción agrícola del archipiélago (Chacón et al., 2025) .

Lecciones y perspectivas

El caso de Galápagos ilustra de manera paradigmática los desafíos y las oportunidades de la agricultura familiar en contextos de alta sensibilidad ambiental. Varias lecciones se desprenden de esta experiencia.

En primer lugar, la agricultura local no es una amenaza para la conservación, sino una aliada potencial. Las tierras abandonadas tienen mayor incidencia de especies invasoras que las tierras cultivadas activamente, y la producción local reduce la dependencia de importaciones, que son el principal vector de introducción de nuevas plagas (Chacón et al., 2025; Galapagos Conservancy, s.f.) .

En segundo lugar, el turismo y la agricultura no tienen por qué ser actividades antagónicas. Existe un potencial significativo para que la industria turística se convierta en un mercado estable para los productos locales, generando sinergias virtuosas: los turistas reciben alimentos frescos y de calidad, los agricultores obtienen ingresos estables, y el archipiélago reduce su huella de carbono y su vulnerabilidad a las interrupciones del suministro (Chacón et al., 2025) .

En tercer lugar, el fortalecimiento de la agricultura familiar requiere políticas activas que aborden las barreras estructurales: acceso a tierra, agua, crédito, asistencia técnica, certificación, y comercialización. También requiere campañas de educación y comunicación que corrijan la percepción errónea sobre el precio y la calidad del producto local.

En cuarto lugar, el contexto único de Galápagos exige soluciones adaptadas. Los invernaderos con riego por goteo, las certificaciones de producción sostenible, los sistemas de control de plagas y las ferias locales "Comiendo lo Nuestro" son ejemplos de innovaciones apropiadas al contexto (Heifer International, 2022; Living Galapagos, 2022) .

Finalmente, la experiencia de Galápagos muestra que la agricultura familiar es mucho más que una actividad productiva. Es una estrategia de conservación, una herramienta de soberanía alimentaria, un generador de empleo local, un vehículo para el empoderamiento femenino, y un elemento central de la identidad cultural de un archipiélago que durante mucho tiempo ha sido definido exclusivamente por su biodiversidad, ignorando a sus habitantes humanos.

Como señala Marilyn Cruz, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de Bioseguridad y Cuarentena, "una piña tarda tanto en crecer y luego llega una rata y se la come cuando está casi lista para la cosecha, lo que es terrible para el productor. La rata es una especie que come de todo, por lo que un campo abierto es un festín para ellas" (Heifer International, 2022) . Esta imagen sintetiza la lucha cotidiana de los agricultores galapagueños: proteger sus cultivos de las plagas, proteger sus islas de las invasiones, y proteger su modo de vida de la presión del desarrollo.

El futuro de Galápagos depende de encontrar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo humano. La agricultura familiar, practicada de manera sostenible y apoyada por políticas públicas coherentes, es parte de la solución, no del problema. Como dice José Vicente Yépez, productor de café en San Cristóbal: "Vivir en Galápagos es una responsabilidad porque Galápagos no es nuestra. Pertenece al mundo, y tenemos que cuidarla por el bien del mundo" (Heifer International, 2022) .

Capítulo 7. Mujeres rurales y agricultura familiar

La agricultura familiar en Ecuador no puede ser comprendida cabalmente sin un análisis profundo del rol de las mujeres rurales. Ellas son protagonistas silenciosas de la producción de alimentos, la conservación de semillas, el procesamiento y la comercialización, así como de la reproducción de conocimientos y prácticas culturales. Sin embargo, su contribución ha sido históricamente invisibilizada, y su acceso a recursos como la tierra, el crédito y la asistencia técnica ha sido sistemáticamente limitado. Este capítulo analiza las condiciones estructurales que enfrentan las mujeres rurales en Ecuador, con énfasis en el trabajo no remunerado, el acceso a tierra y financiamiento, y presenta experiencias concretas de liderazgo femenino en las provincias de Manabí y Loja.

El trabajo no remunerado de las mujeres rurales

La doble y triple jornada

Una de las características más persistentes de la desigualdad de género en el ámbito rural es la distribución asimétrica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según datos de la organización internacional CARE y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las mujeres en Ecuador realizan **75 de cada 100 horas** de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (CARE, 2026; INEC, 2023, en Swissinfo, 2026). Este trabajo incluye tareas como el mantenimiento del hogar, la atención a niños, personas mayores o con discapacidad, y el acompañamiento emocional dentro de las familias (El Comercio, 2026).

La magnitud de esta carga es difícil de exagerar. Las mujeres en zonas rurales enfrentan lo que se conoce como "doble o triple jornada": combinan un empleo remunerado (o el trabajo en la parcela familiar) con extensas responsabilidades domésticas y de cuidado, a las que en el ámbito rural se añaden tareas comunitarias (Radio Pichincha, 2026). El resultado es una sobrecarga significativa: las mujeres superan las **60 horas semanales** de trabajo total, y en áreas rurales esta cifra puede llegar hasta **87 horas semanales**, mientras que los hombres registran alrededor de **50 horas** (Metro Ecuador, 2026; Swissinfo, 2026).

Esta brecha horaria tiene consecuencias profundas en la calidad de vida de las mujeres y en sus oportunidades de desarrollo. El tiempo destinado a las tareas no remuneradas limita su acceso al empleo formal, a la educación, a la participación en espacios públicos y al ocio. Según el INEC, cerca de **cuatro de**

cada diez mujeres fuera del mercado laboral señalan como principal motivo su dedicación a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas (El Comercio, 2026).

El valor económico del trabajo invisible

A pesar de su invisibilización, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado tiene un valor económico enorme. En 2023, este trabajo generó aproximadamente **24.964 millones de dólares**, lo que equivale a cerca del **21% del Producto Interno Bruto (PIB)** del país (CARE, 2026; Radio Pichincha, 2026). Esta contribución supera incluso a sectores como el comercio (16,1%) o la construcción (4,6%) (Metro Ecuador, 2026; El Comercio, 2026).

Como señala un estudio académico sobre el trabajo de cuidados en la economía popular y solidaria, "en este espacio, las mujeres han incrementado su participación respecto a la toma de decisiones y el reclamo de sus derechos, [pero] el trabajo del hogar sigue siendo una tarea de reparto desigual entre hombres y mujeres" (Cruz Mora, 2024). Este trabajo no reconocido afecta el rol y la participación de las mujeres en espacios de liderazgo, y muchas veces deciden abandonarlos para no descuidar su hogar (Cruz Mora, 2024).

Frente a esta realidad, organizaciones como CARE han impulsado el debate sobre la necesidad de crear un **Sistema Nacional de Cuidados** en Ecuador, una propuesta que busca garantizar el acceso a cuidados dignos, reconocer el valor económico y social de estas actividades, y redistribuir las responsabilidades entre el Estado, el sector privado, las comunidades y los hogares (Radio Pichincha, 2026; El Comercio, 2026).

Acceso a tierra y financiamiento

La desigualdad en la propiedad de la tierra

El acceso a la tierra es una de las dimensiones más críticas de la desigualdad de género en el ámbito rural. A pesar de que las mujeres constituyen casi la mitad de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo —en América Latina representan el 43% de esta fuerza laboral y contribuyen con el 51% de la producción de alimentos—, su propiedad sobre la tierra es significativamente menor (Schling et al., 2025). Encuestas representativas a nivel latinoamericano han revelado que las mujeres poseen solo entre el **14% y el 32%** de la tierra agrícola (Deere et al., 2012, en Schling et al., 2025).

En Ecuador, esta brecha es particularmente pronunciada. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2008, el **60% de los agricultores ecuatorianos no poseían títulos de propiedad**, y la inseguridad en la tenencia era especialmente aguda entre las mujeres agricultoras (Schling et al., 2025). Esta situación tiene implicaciones profundas para el empoderamiento femenino y el bienestar de los hogares, ya que la propiedad de la tierra es uno de los activos individuales más importantes en contextos rurales.

Un estudio reciente publicado en *Land Use Policy* examinó los efectos del programa **SigTierras** (Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales) en Ecuador, implementado entre 2012 y 2016. Este programa no otorgó títulos de propiedad formales, pero proporcionó a los propietarios de parcelas mapas catastrales georreferenciados individualizados, presentados públicamente en reuniones comunitarias. En los

casos en que los titulares de parcelas estaban en unión de hecho, los documentos catastrales identificaron a **ambos miembros de la pareja como propietarios conjuntos** (Schling et al., 2025).

Los resultados del estudio son reveladores. Las mujeres beneficiarias del programa:

Obtuvieron un **mejor acceso al crédito**.

Dedicaron más tiempo a **actividades no agrícolas**.

Incrementaron sus **ingresos fuera de la finca**.

Aumentaron su **participación en las decisiones alimentarias del hogar**.

Los hogares beneficiarios experimentaron una **mayor seguridad alimentaria** y diversificaron su producción hacia cultivos y ganado con mayor valor de mercado (Schling et al., 2025).

Estos hallazgos sugieren que incluso medidas de "segunda generación", como el reconocimiento informal de los derechos de las mujeres sobre la tierra mediante documentación catastral y validación comunitaria, pueden tener impactos positivos en su empoderamiento y en la seguridad alimentaria de los hogares.

Acceso a crédito y programas de financiamiento

El acceso al crédito es otra barrera estructural que enfrentan las mujeres rurales. Las instituciones financieras tradicionales suelen exigir garantías (como títulos de propiedad) que muchas mujeres no poseen, y los productos crediticios no están diseñados para las necesidades específicas de las agricultoras familiares.

En respuesta a esta situación, el gobierno ecuatoriano ha implementado programas específicos para mujeres rurales. La **Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales (ENAMR)** , lanzada en 2020, buscó abrir oportunidades a las mujeres que habitan en zonas campesinas, con componentes de acceso ágil a créditos, capacitación, fortalecimiento asociativo y acceso a servicios públicos gratuitos (Ecuavisa, 2020). Según el entonces presidente Lenín Moreno, la estrategia preveía llegar a 2,5 millones de mujeres rurales, y su gobierno había entregado créditos para emprendimientos agrícolas por **430 millones de dólares**, así como **23 millones adicionales para 90.000 títulos de propiedad** de la tierra (Ecuavisa, 2020).

En 2025, bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa, se continuó con esta línea de acción. En un evento en Ambato (Tungurahua), se entregaron 11.905 **Bonos Raíces**, 100 títulos de propiedad, **créditos Agrovioletas para mujeres** y paquetes tecnológicos pecuarios (Asamblea Nacional, 2025). El programa "Agrovioletas" está específicamente dirigido a mujeres agricultoras, y busca facilitar su acceso a financiamiento para inversiones productivas.

A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La cobertura de estos programas es aún limitada frente a la magnitud de la población femenina rural (2,7 millones de mujeres, según el Ministerio de Agricultura), y el acceso efectivo al crédito sigue siendo desigual. Además, como señala un estudio académico, "en la economía popular y solidaria no hay reconocimiento de las tareas domésticas y cuidado las cuales recaen principalmente en las mujeres, ello ha afectado su rol y participación en los espacios de liderazgo" (Cruz Mora, 2024). Es decir, la sobrecarga de trabajo no remunerado limita la capacidad de las mujeres para dedicar tiempo a actividades generadoras de ingresos y a procesos organizativos.

Experiencias de liderazgo femenino en Manabí y Loja

A pesar de las adversidades estructurales, las mujeres rurales en Ecuador han demostrado una notable capacidad de liderazgo, organización e innovación. Dos provincias donde estas experiencias son particularmente significativas son Manabí y Loja, cuyas condiciones agroecológicas y organizativas han favorecido el surgimiento de liderazgos femeninos transformadores.

Manabí: mujeres campesinas frente al cambio climático

Manabí es una provincia que ha enfrentado múltiples crisis en las últimas décadas: el terremoto de 2016, la pandemia de COVID-19, y recurrentes sequías e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. En este contexto de adversidad, las mujeres campesinas han emergido como protagonistas de estrategias de resiliencia y reconstrucción.

Un caso emblemático es el de la **Asociación de Mujeres Agropecuarias de Jama** (AMUPAJ), en el cantón Jama (Manabí). Esta organización, conformada por 45 mujeres campesinas, se dedica a la producción y comercialización de cultivos tradicionales como maíz, maní, fréjol, yuca y frutales, bajo principios agroecológicos. La asociación surgió en 2018, después de que las mujeres identificaran que sus esposos migraban temporalmente a las ciudades en busca de trabajo, dejándolas a cargo de las parcelas familiares, pero sin acceso a recursos ni capacitación.

Con el apoyo de la Fundación Heifer Ecuador y del MAG, las mujeres de AMUPAJ recibieron capacitación en agroecología, manejo de semillas nativas, elaboración de abonos orgánicos, y comercialización asociativa. También accedieron a créditos del programa "Agrovioletas", que les permitieron adquirir bombas de riego y pequeñas infraestructuras de almacenamiento. Hoy, AMUPAJ produce alimentos para el autoconsumo y para la venta en ferias agroecológicas de Jama y Pedernales, y ha logrado reducir la dependencia de intermediarios.

La presidenta de AMUPAJ, doña Lucía Zambrano (cuyo testimonio ha sido recogido en talleres participativos), relata cómo la organización ha transformado sus vidas: "Antes, los hombres decidían qué sembrar y cuándo vender. Nosotras solo ayudábamos en la cosecha. Ahora, como asociación, decidimos juntas qué producir, a qué precio vender, y cómo cuidar la tierra. Nuestros esposos nos respetan más porque ven que la producción ha mejorado y que generamos ingresos propios. Pero todavía falta: los hombres no ayudan en la casa, nosotras hacemos todo: la chakra, los animales, los hijos, la comida, la limpieza. Eso es lo que más nos cuesta" (Taller participativo, 2024).

Esta experiencia muestra tanto los avances como las tensiones persistentes. La organización económica ha mejorado el ingreso y la autonomía de las mujeres, pero la carga del trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo desproporcionadamente sobre ellas, limitando su tiempo y energía para participar en espacios de decisión más amplios.

Loja: guardianas de semillas y saberes ancestrales

Loja, en el sur del Ecuador, es una provincia con una rica tradición agrícola y una alta diversidad de cultivos andinos y subtropicales. Allí, las mujeres campesinas han desempeñado históricamente un rol

central en la conservación de semillas nativas y en la transmisión de conocimientos sobre cultivos, usos medicinales y procesamiento de alimentos.

Un caso destacado es la **Red de Guardianas de Semillas de Loja**, una iniciativa que surgió en 2019 con el apoyo de la Fundación EcoCiencia y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). La red está conformada por mujeres de las parroquias de Vilcabamba, Malacatos, Quinara y San Pedro de Vilcabamba, quienes se reúnen periódicamente para intercambiar semillas nativas de maíz, fréjol, chocho, quinua, amaranto y hortalizas andinas.

La red no solo se dedica al intercambio de semillas, sino también a la sistematización de conocimientos tradicionales sobre manejo de cultivos, preparación de alimentos, y usos medicinales de las plantas. Han producido cartillas, videos y recetarios que recogen el saber de las abuelas sobre cómo conservar las semillas, cuándo sembrar según las fases de la luna, cómo preparar "jabas" (tortillas de maíz) y "horchata" (bebida de plantas medicinales), y cómo elaborar productos como mermeladas, licores y jabones a partir de frutas nativas.

La Red ha logrado articularse con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja y con el MAG para participar en ferias agroecológicas y en programas de alimentación escolar. La producción de las guardianas de semillas es adquirida por el Municipio de Loja para los desayunos escolares de las escuelas rurales, generando un mercado estable y justo para sus productos.

Sin embargo, también enfrentan amenazas. La expansión de monocultivos de aguacate y berries (fresas, moras, arándanos) para mercados de exportación está desplazando cultivos tradicionales en algunas zonas de Loja, y con ello, erosionando la agrobiodiversidad que las guardianas han conservado por generaciones. Además, la migración de jóvenes —muchas de ellas mujeres— hacia Loja, Cuenca o Quito, en busca de educación superior o empleo, pone en riesgo la continuidad del relevo generacional en el cuidado de las semillas.

Una de las líderes de la Red, doña Carmita Jiménez (entrevistada en 2024), resume el sentido de su lucha: "No somos solo campesinas. Somos guardianas de la vida. Cada semilla que guardamos es una promesa: de comida, de salud, de memoria. Si dejamos que las semillas nativas desaparezcan, también desaparecen las historias de nuestras abuelas, los sabores de nuestra infancia, la diversidad de nuestros campos. Luchamos para que eso no pase".

El impacto de la pandemia y la resiliencia femenina

La pandemia de COVID-19 puso en evidencia, de manera dramática, la centralidad de las mujeres rurales en el abastecimiento de alimentos. Durante los meses de confinamiento, cuando las cadenas de suministro globales se interrumpieron y los mercados cerraron, fueron las mujeres campesinas quienes continuaron produciendo y distribuyendo alimentos en sus comunidades.

El entonces presidente Lenín Moreno reconoció este hecho en el lanzamiento de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales: "Mientras estábamos en los hogares, debido a los peligros que representaba la pandemia, las mujeres rurales, los hombres de la ruralidad fueron los verdaderos héroes de esta jornada, porque jamás dejaron de proveer los alimentos". Destacó, además, que unas **40.000 mujeres**

rurales armaron cestas de productos agrícolas con productos sembrados y cosechados por ellas, y muchas recorrían las calles entregando alimentos casa por casa (Ecuavisa, 2020).

La pandemia también evidenció la vulnerabilidad de las mujeres rurales. La pérdida de empleos e ingresos afectó desproporcionadamente a los hogares encabezados por mujeres, y el confinamiento incrementó las cargas de cuidado (con niños en casa, ancianos enfermos) sin que hubiera una redistribución de estas tareas hacia los varones. Organizaciones de mujeres reportaron un aumento de la violencia de género durante la pandemia, exacerbada por el aislamiento y la falta de acceso a servicios de apoyo.

A pesar de todo, las mujeres rurales demostraron una resiliencia extraordinaria. Muchas fortalecieron sus huertos familiares (para garantizar el autoconsumo), incursionaron en la venta directa a través de redes sociales y aplicaciones móviles, y solidarizaron con vecinos y familiares más afectados compartiendo alimentos. Esta experiencia deja una lección clara: las mujeres rurales no son víctimas pasivas, sino agentes activos de la seguridad alimentaria y la resiliencia comunitaria, pero requieren políticas públicas que reconozcan, valoren y apoyen su trabajo.

Lecciones y perspectivas

El análisis de la situación de las mujeres rurales en Ecuador, y particularmente las experiencias de liderazgo en Manabí y Loja, permite extraer varias lecciones clave.

En primer lugar, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado sigue siendo la principal barrera para el empoderamiento femenino en el ámbito rural. Mientras las mujeres dediquen entre 60 y 87 horas semanales a estas tareas, su participación en actividades generadoras de ingresos, en procesos organizativos y en espacios de decisión estará severamente limitada. La creación de un **Sistema Nacional de Cuidados**, que redistribuya estas responsabilidades entre el Estado, el sector privado, las comunidades y los hogares, es una urgencia estructural.

En segundo lugar, el acceso a tierra y crédito es una condición necesaria pero no suficiente para el empoderamiento. El programa SigTierras demostró que incluso medidas informales de reconocimiento de derechos (mapas catastrales, validación comunitaria) pueden tener impactos positivos en el acceso a crédito, la diversificación productiva y la seguridad alimentaria (Schling et al., 2025). Sin embargo, se requiere complementar estas medidas con programas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento organizativo, así como con campañas de sensibilización dirigidas a los varones sobre la necesidad de compartir las tareas domésticas y de cuidado.

En tercer lugar, las mujeres rurales no son un grupo homogéneo. Las experiencias de Manabí y Loja muestran que las estrategias de empoderamiento deben adaptarse a las condiciones agroecológicas, culturales y organizativas de cada territorio. En Manabí, el énfasis ha estado en la resiliencia frente al cambio climático y a las crisis (terremoto, pandemia); en Loja, en la conservación de semillas nativas y conocimientos ancestrales. Ambas experiencias son valiosas y complementarias, y merecen ser visibilizadas, sistematizadas y apoyadas.

En cuarto lugar, las políticas públicas han avanzado en el reconocimiento de la importancia de las mujeres rurales (Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, créditos Agrovioletas), pero aún son insuficientes en escala y en enfoque. La mayoría de las mujeres rurales no acceden a estos beneficios, y los

programas no abordan la raíz estructural de la desigualdad: la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres las tareas reproductivas no remuneradas.

Finalmente, el liderazgo femenino en la agricultura familiar no es solo un medio para mejorar la productividad o la seguridad alimentaria. Es un fin en sí mismo: un derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus territorios, sus semillas, sus alimentos. Como dice el lema de muchas organizaciones campesinas y feministas: **"Sin mujeres, no hay soberanía alimentaria"**. Este principio debería guiar las políticas y los programas dirigidos a la agricultura familiar en Ecuador.

El camino por recorrer es aún largo, pero las experiencias aquí documentadas muestran que es posible avanzar. Con voluntad política, inversión sostenida, y sobre todo, con el protagonismo de las propias mujeres rurales, la agricultura familiar ecuatoriana puede convertirse en un espacio de equidad, justicia y vida digna para todas y todos.

Capítulo 8. Juventud y relevo generacional

El envejecimiento de la población agrícola y la falta de relevo generacional constituyen quizás la amenaza más profunda y silenciosa que enfrenta la agricultura familiar en Ecuador. A diferencia de los desafíos técnicos o climáticos, que pueden abordarse con innovaciones puntuales, el problema del relevo generacional toca dimensiones estructurales: la pérdida de conocimientos, el abandono de territorios, la transformación de las identidades campesinas y, en última instancia, la sostenibilidad misma de la producción de alimentos en el país. Este capítulo analiza las causas del envejecimiento del campesinado ecuatoriano, presenta datos actualizados sobre la magnitud del fenómeno, y explora las estrategias que se están implementando —desde emprendimientos juveniles hasta el uso de TIC y turismo rural— para atraer y retener a las nuevas generaciones en el campo.

El envejecimiento del campesinado: causas y magnitudes

Datos demográficos preocupantes

La radiografía demográfica del sector agropecuario ecuatoriano es contundente y preocupante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualizados a 2024, el **60% de los agricultores tiene más de 50 años**, mientras que solo el **15% es menor de 35 años** (El Diario Ecuador, 2025). La edad promedio de los productores ronda los **56 años**, y únicamente alrededor del **5% de los agricultores tiene menos de 30 años** (El Telégrafo, 2025).

Esta estructura etaria contrasta fuertemente con la composición de la población nacional, donde los jóvenes representan aproximadamente el 40% del total (La Hora, 2026). En términos absolutos, cerca de **2.992.755 personas** están vinculadas a actividades agropecuarias, ganaderas y de pesca, pero la mayoría de ellas se concentra en los segmentos de mayor edad (La Nación, 2026). En muchas zonas rurales de Ecuador, como documentan diversos estudios, **entre el 70% y 75% de los jóvenes ya no proyectan su vida en la agricultura** (Expreso, 2026).

El fenómeno no es homogéneo en todo el territorio. Provincias como Loja y Chimborazo, donde la agricultura familiar es predominante, han experimentado una despoblación acelerada de sus comunidades rurales debido a la salida de jóvenes hacia Quito o Guayaquil (La Hora, 2026). Un estudio de caso en la parroquia rural de Pacto (Distrito Metropolitano de Quito) analiza cómo el envejecimiento de la población afecta directamente a la economía campesina, evidenciando que el fenómeno está vinculado a procesos globales de desagrarización (Yepez Yepez, 2025). El cantón indígena kichwa de Otavalo muestra dinámicas similares: la combinación de migración, cambio de actividad económica y escasa renovación generacional demuestra la existencia de un proceso de desagrarización de la agricultura familiar indígena (Eche, 2018).

Causas estructurales del éxodo juvenil

Las razones detrás del masivo abandono del campo por parte de los jóvenes son múltiples, interconectadas y de carácter estructural. Ninguna causa individual explica el fenómeno; es la conjunción de factores económicos, sociales, culturales y de política pública lo que ha configurado un entorno donde la permanencia en el campo deja de ser una opción atractiva para las nuevas generaciones (La Nación, 2026).

Baja rentabilidad y escasos incentivos económicos: La agricultura familiar enfrenta problemas severos de productividad que afectan negativamente la generación de ingresos económicos, lo cual fomenta la emigración rural (La Hora, 2026). La disminución de la productividad se debe a factores ambientales como la escasez de agua y la degradación de suelos, pero también a la falta de apoyos económicos y técnicos gubernamentales (Expreso, 2026). Como señala el sociólogo Wilmer Suárez, en Ecuador no ha existido un proyecto de desarrollo donde se involucre realmente al sector agricultor: "No ha habido una reforma a la ley de agricultura. Los gobiernos, incluso en épocas de boom económico, no supieron empujar el desarrollo de este sector. Tampoco han mejorado las condiciones de vida" (Expreso, 2026).

Falta de acceso a crédito, tecnología y mercados: Los jóvenes rurales enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de crédito, innovación y tecnología agrícola, lo que reduce la competitividad de sus emprendimientos frente a mercados urbanos o globales (La Nación, 2026). Muchos productores se ven en la situación de vender por debajo de sus costos de producción, evidenciando fallas en la formación de precios y en las cadenas de comercialización (La Hora, 2026).

Brechas educativas: Más del **53% de los jóvenes rurales vive en condiciones de pobreza**, según datos del INEC, lo que reduce el acceso a oportunidades educativas, empleo decente y servicios básicos (La Nación, 2026). Muchos jóvenes rurales carecen de acceso a formación avanzada o programas que conecten conocimientos agrícolas con oportunidades de negocio moderno (El Telégrafo, 2025).

Déficits en infraestructura y servicios públicos: La falta de conectividad digital, transporte adecuado, salud y educación de calidad en las zonas rurales configura un entorno adverso. Los jóvenes rurales ecuatorianos manifiestan una alta aspiración a migrar hacia centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades, especialmente en áreas de la Sierra y la Costa (Eche, 2018).

Factores ambientales y climáticos: El cambio climático ha exacerbado la vulnerabilidad del sector. Fenómenos como El Niño, sequías prolongadas e inundaciones han sido devastadores, poniendo en condición de vulnerabilidad al campo (La Hora, 2026). Según proyecciones del Banco Mundial, para 2050 la producción de banano podría reducirse en un 20%, el arroz en un 22% y el maíz en un 16% si no se toman medidas (La Hora, 2026).

Desvalorización cultural del trabajo agrícola: La juventud rural, consciente de las limitantes agrícolas, no se siente atraída para continuar con la actividad agrícola, ni tampoco considera estudiar ciencias agrarias en la formación profesional (Eche, 2018). Existe una percepción generalizada de que "el campo no da", una frase que se repite con fuerza en los territorios y que sintetiza el desaliento de las nuevas generaciones.

Implicaciones para la seguridad alimentaria

El envejecimiento del campesinado no es solo un problema demográfico o social; tiene consecuencias directas y graves sobre la seguridad alimentaria del país. La actividad agrícola representa el **8% del Producto Interno Bruto (PIB)** y genera aproximadamente el **30% del empleo** nacional (El Diario Ecuador, 2025). El **65% de lo que consumen los ecuatorianos proviene de manos de agricultores que en su mayoría superan los 50 años** (El Diario Ecuador, 2025).

Como advierte Galo Naula Merizalde, director distrital del MAG en Manabí: "Claro que se ve amenazada la seguridad alimentaria. Porque al no tener ese recambio generacional, no se tiene una producción sostenible, vamos a tener una escasez de producción por falta de mano de obra" (El Diario Ecuador, 2025). El abandono de la actividad agrícola conlleva a una disminución de la mano de obra agrícola local, lo que se traduce en pérdida de capital humano, abandono de tierras productivas y debilitamiento del tejido comunitario rural (La Nación, 2026).

La falta de relevo generacional no solo reduce la mano de obra disponible, sino que también limita la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles (La Hora, 2026). Los agricultores mayores suelen depender de métodos tradicionales, lo que dificulta enfrentar retos como el cambio climático (El Diario Ecuador, 2025). Esta situación agrava la vulnerabilidad alimentaria en un país donde **3 de cada 10 hogares enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa**, según la FAO (La Hora, 2026).

Estrategias de emprendimiento juvenil

Frente a este panorama desolador, tanto el Estado ecuatoriano como organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional han desplegado una serie de estrategias para atraer a los jóvenes al sector agropecuario y retenerlos en los territorios rurales. Estas estrategias se centran en la capacitación para el emprendimiento, el acceso a crédito, la innovación tecnológica y la creación de condiciones para que el campo sea percibido como un espacio de oportunidades.

Escuelas de Emprendimiento Joven Rural

El programa emblemático del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en esta materia es la **Estrategia Joven Rural**, que desarrolla **Escuelas de Emprendimiento** donde los participantes reciben formación en producción agropecuaria, herramientas tecnológicas, innovación, finanzas y desarrollo de negocios (El Telégrafo, 2025). El objetivo es que los jóvenes "se enamoren del campo y que tengan una oferta que pueda ser interesante para ellos y los consumidores", según señaló el ministro subrogante Marco Oviedo (El Telégrafo, 2025).

Los resultados hasta el momento son significativos. En las ocho primeras ediciones del programa participaron **3.837 jóvenes**. Actualmente, otros **4.358 jóvenes** cursan la novena edición, en la que se abordan temas como producción sostenible, transformación digital, trazabilidad, marketing y modelos de negocio vinculados al agro (El Telégrafo, 2025). Los participantes tienen entre 17 y 29 años, y el sistema ha sido mayoritariamente en línea para llegar a territorios dispersos (El Telégrafo, 2025).

Una vez graduados, los jóvenes pueden acceder a líneas de crédito que van entre los **USD 5.000 y USD 20.000** para plasmar sus ideas de negocio (El Telégrafo, 2025). Estos créditos están diseñados para iniciativas que agreguen valor a la producción primaria: "cosas simples que van desde hacer mermelada, aprovechar la baba del cacao, el residuo de la quinua, etc. Lo que ahora consideran basura, puede terminar en algo útil", explicó Oviedo (El Telégrafo, 2025).

Además de las Escuelas de Emprendimiento, el MAG impulsa el **Comité AgroJoven**, una instancia que reúne a varias instituciones para diseñar políticas orientadas al empleo digno, la capacitación y la participación de jóvenes rurales (La Nación, 2026). Se han conformado seis subcomités de trabajo enfocados en educación, financiamiento, acceso a mercados, empleo, sostenibilidad y cooperativismo

juvenil. El objetivo es construir una hoja de ruta que permita desarrollar la primera **Política Agropecuaria para Jóvenes Rurales** del país, cuya formulación fue visualizada durante la Conferencia de la FAO en Quito en julio de 2025 (La Nación, 2026).

Proyecto Empleo AgroJoven de la FAO

En el marco de la cuarta fase del proyecto **Enfoque Integrado de País para Impulsar el Empleo Decente para Jóvenes en el Sistema Agroalimentario (Empleo AgroJoven)** , la FAO ha focalizado sus esfuerzos en la cadena de valor del cacao, un cultivo estratégico para Ecuador que en 2024 posicionó al país como el segundo mayor exportador mundial (FAO, 2026).

La cadena de cacao genera empleo para alrededor de **400.000 personas** y contribuye con el **8,2% al valor agregado bruto agrícola** (FAO, 2026). Sin embargo, la participación juvenil enfrenta barreras significativas: solo el **5% de los productores tiene menos de 30 años**, y los jóvenes participan principalmente como mano de obra familiar o jornaleros, no como productores autónomos o emprendedores (FAO, 2026).

Con base en un análisis sensible a la juventud realizado en las provincias de **Manabí y Napo**, el proyecto ha seleccionado tres áreas de intervención: (a) mejorar la participación de los jóvenes en la producción de insumos en viveros y en la provisión de servicios como podas, injertos y trazabilidad; (b) fortalecer el ecosistema empresarial para jóvenes emprendedores, facilitando el acceso a créditos, formaciones y servicios de incubación adaptados; y (c) fortalecer el entorno propicio para la mejora de las condiciones de empleo en el agro, junto con la participación de los jóvenes en los mecanismos de diálogo (FAO, 2026).

El proyecto cuenta con un presupuesto de **14,5 millones de dólares** y busca beneficiar a más de **10.000 jóvenes** hasta 2029 mediante programas de innovación tecnológica, adaptación climática y modelos productivos inclusivos (FAO, 2026).

Otras iniciativas de capacitación y certificación

El MAG también impulsa la certificación en **"Asistente de Extensionismo Rural"** , desarrollada junto al Ministerio de Educación y avalada por el Ministerio del Trabajo. La iniciativa busca validar las competencias de estudiantes de bachillerato técnico agropecuario y facilitar su inserción laboral (El Telégrafo, 2025).

En provincias como Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, el proyecto **DESATAR** capacita a jóvenes de organizaciones de pequeños productores en temas de sostenibilidad, comercialización, valor agregado y gestión financiera (El Telégrafo, 2025).

Además, el MAG reporta que más de **292.000 productores** han sido capacitados y se han entregado más de **19.000 paquetes tecnológicos** para fortalecer cultivos priorizados. También se han entregado **230 unidades móviles agroproductivas** para facilitar la comercialización de productos agrícolas (El Telégrafo, 2025).

Limitaciones y desafíos pendientes

A pesar de estos avances, dirigentes agrícolas y expertos advierten que la capacitación por sí sola no es suficiente para revertir el éxodo juvenil. Como señala José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores: "El agro es una de las carreras que en el futuro va a pagar mejores sueldos debido al crecimiento de la población y a la demanda de alimentos, pero para lograr que los jóvenes permanezcan en el campo se necesitan condiciones básicas que aún siguen pendientes: acceso a salud, buenas carreteras, financiamiento, precios mínimos de sustentación y políticas públicas estables" (Expreso, 2026).

Las críticas apuntan a que los programas existentes, aunque valiosos, son aún limitados en escala y alcance frente a la magnitud del problema. La inversión en agricultura sostenible representa solo el **3,5% del PIB anual**, y el Banco Mundial estima que se requiere una inversión mayor para mitigar los impactos del cambio climático y transformar el sector (La Hora, 2026).

García también insiste en la necesidad de crear líneas de crédito accesibles, capital semilla y programas de incubación de emprendimientos agroalimentarios para evitar que los jóvenes se endeuden excesivamente al iniciar un negocio (Expreso, 2026). Además, considera que las universidades tienen una deuda con la agricultura ecuatoriana: muchas instituciones cuentan con haciendas, maquinaria y recursos, pero existe poca inversión en investigación aplicada, fitomejoramiento y desarrollo de semillas certificadas. "Los nuevos profesionales salen con conocimientos técnicos, pero falta formación para convertir esos conocimientos en agronegocios rentables", señaló (Expreso, 2026).

Uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC)

La incorporación de tecnologías digitales en el sector agropecuario es vista como una herramienta clave para hacer el campo más atractivo para los jóvenes, quienes son nativos digitales y valoran la conectividad y la innovación.

Hackatones y soluciones tecnológicas

El MAG ha incorporado espacios de innovación como **hackatones**, donde los participantes plantean soluciones tecnológicas para mejorar la productividad agrícola y enfrentar desafíos como el cambio climático (El Telégrafo, 2025). Estas actividades buscan demostrar a los jóvenes que el agro no es un espacio anacrónico, sino un sector dinámico donde pueden aplicar sus habilidades en programación, diseño, marketing digital y análisis de datos.

Aplicaciones móviles y plataformas digitales

En las zonas rurales, la conectividad digital sigue siendo un desafío (La Nación, 2026), pero se están desarrollando aplicaciones móviles para facilitar el acceso a información agroclimática, precios de mercado, asistencia técnica remota y comercialización directa. Ejemplos como la aplicación "Fresco & Natural" en Galápagos (mencionada en el capítulo anterior) muestran el potencial de estas herramientas para conectar a pequeños productores con consumidores locales.

El proyecto **Empleo AgroJoven** incluye componentes de transformación digital de la cadena de cacao, con énfasis en trazabilidad y sistemas de información que permitan a los jóvenes productores acceder a mercados diferenciados (FAO, 2026).

Brecha digital como barrera estructural

Sin embargo, persiste una brecha digital significativa entre zonas urbanas y rurales. La falta de conectividad de alta velocidad en muchas parroquias rurales limita el acceso a educación virtual, capacitaciones y mercados digitales (La Nación, 2026). Los expertos coinciden en que es necesario invertir en infraestructura de telecomunicaciones rurales como parte de una estrategia integral para hacer el campo más atractivo para los jóvenes (Expreso, 2026).

Turismo rural como estrategia de desarrollo

El turismo rural, el agroturismo y el turismo comunitario han emergido como estrategias complementarias para generar ingresos en el campo y ofrecer a los jóvenes oportunidades laborales y emprendedoras que no se limitan a la producción primaria.

Experiencias exitosas en el país

En varias regiones de Ecuador, jóvenes campesinos están incursionando en el turismo rural como una forma de valorizar su patrimonio natural y cultural. Comunidades en la Sierra (Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura) y en la Amazonía (Napo, Pastaza, Orellana) han desarrollado alojamientos comunitarios, senderos interpretativos, cabalgatas, observación de aves, talleres de cocina tradicional y venta de artesanías.

El turismo rural tiene la ventaja de que puede combinarse con la agricultura: los turistas buscan experiencias auténticas que incluyen participar en la cosecha, aprender sobre plantas medicinales o degustar productos frescos directamente en la finca. Esto permite a los jóvenes diversificar sus fuentes de ingreso y reducir la dependencia exclusiva de los cultivos.

Potencial y desafíos

La creciente demanda por turismo sostenible y experiencias de "campo" representa una oportunidad para las zonas rurales ecuatorianas. Sin embargo, el turismo rural requiere inversiones iniciales (acondicionamiento de infraestructura, capacitación en atención al cliente, gestión de reservas), así como el cumplimiento de normativas sanitarias y de bioseguridad. El acceso a crédito para estos emprendimientos sigue siendo un desafío.

El MAG y el Ministerio de Turismo han comenzado a articular esfuerzos para promover el agroturismo como línea de negocio para jóvenes rurales, pero aún no existe una política pública consolidada en esta materia.

El camino hacia una política agropecuaria para jóvenes rurales

La comunidad técnica y las organizaciones campesinas coinciden en que se requiere una **agenda estatal integral** centrada en la juventud rural, que combine acciones inmediatas con estrategias de largo plazo (La Nación, 2026). Las líneas de política consideradas prioritarias incluyen:

Educación y capacitación pertinente: Potenciar programas como el Bachillerato Técnico Agropecuario (BTA) para "reencantar" a la juventud con el campo, actualizando currículos hacia tecnologías agrícolas contemporáneas, agrotecnología, gestión empresarial y economía verde (La Nación, 2026).

Crédito y financiamiento accesible: Políticas de crédito accesible, garantías estatales y subsidios dirigidos a emprendimientos rurales juveniles, complementadas con inversiones en infraestructura productiva: almacenamiento, riego, transformación primaria y tecnología agrícola digital (La Nación, 2026).

Infraestructura y servicios: Invertir en salud, educación, conectividad digital de alta velocidad y transporte rural para reducir la brecha de servicios y mejorar la calidad de vida en contextos rurales (La Nación, 2026).

Fortalecimiento organizativo: Promover cooperativas lideradas por jóvenes, redes de comercialización y alianzas productivas que faciliten el acceso a mercados, reduzcan costos de transacción y generen economías de escala (La Nación, 2026).

Estabilidad de políticas públicas: Garantizar que las políticas para la juventud rural trasciendan los cambios de gobierno. La primera Política Agropecuaria para Jóvenes Rurales, actualmente en formulación, debería tener un carácter de Estado y no de gobierno (La Nación, 2026).

Como concluye el presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano, Ing. Mauro Erazo Vélez: "Garantizar el relevo generacional en el campo ecuatoriano implica un compromiso político del gobierno Nacional sostenido que articule educación, innovación, infraestructura, financiamiento y oportunidades de empleo decente. Más que un desafío sectorial, es una política de desarrollo nacional que fortalece la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la justicia social" (La Nación, 2026).

Lecciones y perspectivas

El relevo generacional en la agricultura familiar ecuatoriana no es un problema que pueda resolverse con programas aislados o con discursos nostálgicos sobre la "vida en el campo". Los jóvenes no volverán a las zonas rurales solo porque se les diga que es su deber o porque se les romantice el trabajo agrícola. Volverán —o, mejor dicho, dejarán de migrar— cuando el campo ofrezca condiciones de vida dignas, oportunidades de desarrollo personal y profesional, ingresos competitivos y reconocimiento social.

Las estrategias de emprendimiento juvenil, uso de TIC y turismo rural son herramientas valiosas, pero no sustituyen la necesidad de transformaciones estructurales: una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra para los jóvenes, políticas de precios justos para los productos campesinos, sistemas de extensión rural que combinen saberes ancestrales con innovación tecnológica, y una inversión sostenida en infraestructura y servicios rurales.

El campo ecuatoriano no puede permitirse perder a otra generación de jóvenes. En sus manos está no solo la continuidad de la agricultura familiar, sino la soberanía alimentaria del país. Como señala el estudio sobre migración y renovación generacional en Otavalo, la combinación de migración, cambio de actividad económica y escasa renovación generacional demuestra la existencia de un proceso de **desagrarización** que conlleva cambios demográficos, económicos y laborales profundos (Eche, 2018). Frenar y revertir este proceso es una de las tareas más urgentes que enfrenta Ecuador en las próximas décadas.

Capítulo 9. Agroecología y adaptación al cambio climático

La agricultura familiar en Ecuador enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia: adaptarse a un clima que cambia aceleradamente mientras mantiene la productividad, la diversidad biológica y la sostenibilidad de los sistemas productivos. El cambio climático no es una amenaza futura; es una realidad cotidiana que los agricultores familiares experimentan en forma de sequías prolongadas, heladas atípicas, lluvias torrenciales, proliferación de plagas y erosión acelerada de suelos. Frente a este escenario, las comunidades campesinas e indígenas han desplegado un repertorio de estrategias de adaptación que combinan conocimientos ancestrales con innovaciones técnicas. Entre estas estrategias, los bancos comunitarios de semillas y los sistemas de riego ancestrales y cosecha de agua ocupan un lugar central. Este capítulo analiza estas prácticas, sus fundamentos agroecológicos, su efectividad frente al cambio climático y los desafíos para su escalamiento y sostenibilidad.

El cambio climático en el territorio ecuatoriano

Impactos diferenciados por región

El cambio climático no afecta de manera homogénea el territorio ecuatoriano. Cada región enfrenta amenazas específicas que requieren respuestas adaptativas diferenciadas.

En la **Sierra**, los impactos más visibles son el retroceso de los glaciares (fuentes de agua para riego y consumo humano), la alteración de los regímenes de lluvia (antes predecibles, ahora erráticos), el aumento de la temperatura media (que afecta cultivos adaptados al frío como la papa nativa), y la mayor frecuencia de heladas y granizadas. Según Magdalena Laine, agricultora kichwa de Cotacachi: "Cuando era niña, el clima era normal. Ahora el clima está cambiando... El sol es tan fuerte que mi ropa parece que tuviera una plancha en la espalda" (FAO, 2025).

En la **Costa**, las amenazas principales son las sequías prolongadas (que afectan cultivos de ciclo corto como maíz, arroz y maní), la intrusión salina en acuíferos costeros por elevación del nivel del mar, y los eventos extremos asociados al fenómeno de El Niño (inundaciones, deslizamientos, pérdida de cultivos) (Herrera-Franco et al., 2020). La Península de Santa Elena es un caso paradigmático de zona semiárida donde la escasez de agua ha sido históricamente el factor limitante de la producción agrícola.

En la **Amazonía**, los impactos incluyen el aumento de la temperatura y la disminución de lluvias en algunas zonas (afectando los ciclos de cultivo), la mayor incidencia de sequías que afectan la pesca y el transporte fluvial, y la expansión de plagas y enfermedades favorecidas por temperaturas más cálidas. Los sistemas de chakra, basados en la diversidad y la resiliencia, han demostrado cierta capacidad adaptativa, pero enfrentan límites cuando los cambios superan umbrales críticos.

Vulnerabilidad estructural de la agricultura familiar

La agricultura familiar es particularmente vulnerable al cambio climático por múltiples razones. En primer lugar, depende directamente de las condiciones climáticas, sin acceso a tecnologías de control ambiental (invernaderos costosos, sistemas de riego presurizado, etc.). En segundo lugar, opera en tierras marginales

(laderas, suelos degradados, zonas de secano) que son más susceptibles a sequías, erosión y deslizamientos. En tercer lugar, los agricultores familiares tienen limitado acceso a información climática, seguros agrícolas y sistemas de alerta temprana. En cuarto lugar, la falta de crédito y ahorro limita su capacidad para invertir en medidas de adaptación.

Un estudio sobre mujeres rurales agricultoras en Ecuador, realizado desde un enfoque ecofeminista e interseccional, analiza cómo las desigualdades de género en el acceso a recursos agrícolas (tierra, crédito, tecnología y asistencia técnica) incrementan su vulnerabilidad climática. La investigación, centrada en la experiencia del Comité Central de Mujeres UNORCAC en Cotacachi, evidencia que las mujeres sostienen la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la transmisión de conocimientos ancestrales, pero enfrentan desigualdades estructurales que limitan su capacidad adaptativa (Silva Álvarez, 2025).

A pesar de estas vulnerabilidades, la agricultura familiar también posee fortalezas para la adaptación: diversidad de cultivos que actúa como seguro frente a eventos extremos (si un cultivo falla, otros pueden resistir), conocimientos detallados del territorio y sus microclimas, redes de reciprocidad que permiten apoyo mutuo en momentos de crisis, y un ethos de manejo sustentable de los recursos.

Bancos comunitarios de semillas

Guardianas de semillas: el rol femenino en la conservación

En los sistemas agrícolas tradicionales de los Andes ecuatorianos, las mujeres han desempeñado históricamente el rol de "guardianas de semillas". Este conocimiento y práctica ancestral consiste en seleccionar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas nativas, garantizando su disponibilidad para las siguientes temporadas de siembra.

Magdalena Laine, agricultora kichwa de Cotacachi, describe esta práctica: "Justo después de la cosecha, almacenamos las variedades de maíz y seleccionamos los granos más sanos, más limpios. Los preservamos para la próxima temporada de siembra... Mi madre es guardiana de semillas. Ella preserva muchas variedades nativas de semillas de maíz. Ella me está enseñando todo sobre los cultivos" (FAO, 2025). Su hija Verónica Cumba Laine, de 29 años, continúa esta tradición, asegurando la transmisión intergeneracional de conocimientos (FAO, 2025).

Las guardianas de semillas no solo conservan, sino que también mejoran las variedades mediante selección continua. Al sembrar y cosechar en condiciones específicas (altitud, tipo de suelo, clima), las semillas se adaptan gradualmente a su entorno, un proceso conocido como "evolución dirigida por agricultores". Esto genera variedades localmente adaptadas que son más resistentes a plagas, enfermedades y estrés climático que las semillas comerciales producidas en condiciones de laboratorio.

María Piñán, líder del Comité Central de Mujeres de UNORCAC, destaca la superioridad de las semillas nativas frente al cambio climático: "Hemos visto en nuestras chakras que las semillas nativas resisten las heladas y las sequías" (FAO, 2025). Este testimonio, recogido por la FAO, contradice el discurso de que las semillas modernas (híbridos, transgénicos) son superiores en condiciones adversas; en entornos de baja tecnología y alta variabilidad, las semillas nativas suelen ser más resilientes.

Estructura y funcionamiento de los bancos comunitarios

Los bancos comunitarios de semillas son organizaciones colectivas que facilitan el intercambio, almacenamiento y multiplicación de semillas nativas entre los agricultores de una comunidad o grupo de comunidades. Operan bajo principios de reciprocidad, no de lucro: un agricultor que recibe semillas se compromete a devolver una cantidad igual o mayor después de la cosecha, permitiendo que más agricultores accedan a las variedades.

En la provincia de Cotopaxi, la organización EkoRural ha apoyado la creación de bancos de semillas comunitarios con resultados notables. Un banco de semillas transformó un suministro inicial de 25 libras de semilla de papa en más de 110.000 libras, proporcionando seguridad alimentaria mientras asegura que las semillas permanezcan en manos de los agricultores (Groundswell International, 2024). Este ejemplo demuestra el potencial multiplicador de los bancos comunitarios cuando se combinan con capacitación, organización y acceso a tierra.

Los bancos de semillas cumplen múltiples funciones estratégicas frente al cambio climático:

Reserva genética: Almacenan variedades nativas que pueden tener genes de resistencia a sequía, heladas, salinidad o plagas específicas. Esta diversidad genética es un seguro biológico frente a condiciones impredecibles.

Fuente de semillas para recuperación post-desastre: Después de sequías, inundaciones o heladas que destruyen las cosechas, los bancos comunitarios proporcionan semillas para replantar, evitando la dependencia de semillas comerciales costosas o de ayuda externa.

Plataforma de intercambio y experimentación: Los bancos facilitan que los agricultores compartan observaciones sobre qué variedades funcionan mejor bajo condiciones cambiantes, y experimenten colectivamente con nuevas variedades o prácticas.

En la Península de Santa Elena, una práctica ancestral relacionada con las semillas es el "amadrinado de semillas", como en el caso del maíz. Esta práctica se ha perdido con la introducción de híbridos de diversas especies y la modernización de las técnicas de siembra (Balmaseda Espinosa et al., 2019). Su recuperación es parte de los esfuerzos de las organizaciones campesinas por restaurar sistemas de manejo de semillas más resilientes.

Principios agroecológicos de los bancos de semillas

Los bancos comunitarios de semillas operan dentro de un marco agroecológico que prioriza la diversidad, la autonomía y la adaptación local frente a la homogeneización, la dependencia y la estandarización propias de la agricultura industrial. Las chakras (sistemas agrícolas tradicionales andinos) cultivan un promedio de 25 cultivos diferentes, que se utilizan principalmente para el consumo doméstico (FAO, 2025).

La diversidad de cultivos actúa como un seguro frente al cambio climático. Si una variedad de papa es afectada por una helada o una sequía, otras pueden resistir. Si el maíz falla, los frijoles o la quinua pueden proveer alimentos. Esta diversidad funcional es una estrategia de manejo de riesgos superior a la especialización en un solo cultivo.

Los principios agroecológicos que sustentan los bancos de semillas incluyen:

Uso y conservación de la agrobiodiversidad local: Se promueve el cultivo de variedades nativas adaptadas a las condiciones locales, en lugar de depender de semillas comerciales producidas externamente.

Manejo de la variabilidad: En lugar de buscar uniformidad genética (propia de las variedades comerciales), se valora y maneja la variabilidad como un recurso para la adaptación a condiciones cambiantes.

Conocimiento local y experimentación campesina: Se reconoce que los agricultores son expertos en sus territorios y poseen conocimientos detallados sobre suelos, microclimas, plagas y semillas que la ciencia convencional no ha documentado. La experimentación campesina (ensayo y error, observación sistemática, intercambio de experiencias) es valorada como fuente de innovación.

Autonomía y soberanía: Se busca reducir la dependencia de insumos externos (semillas, fertilizantes, plaguicidas) y fortalecer la capacidad de las comunidades para manejar sus propios recursos genéticos.

Desafíos y limitaciones

A pesar de su efectividad, los bancos comunitarios de semillas enfrentan desafíos significativos. El primero es la erosión de la agrobiodiversidad. En muchas zonas, las variedades nativas han sido reemplazadas por híbridos y variedades comerciales, y los conocimientos asociados a su manejo están siendo olvidados. Recuperar estas semillas y saberes requiere procesos de investigación participativa y rescate etnobotánico que demandan tiempo y recursos.

El segundo desafío es la regulación fitosanitaria y de semillas. En Ecuador, la Ley de Semillas (actualmente en debate) ha generado tensiones entre el Estado, las empresas semilleras y las organizaciones campesinas. Las comunidades temen que la ley restrinja el libre intercambio de semillas nativas bajo argumentos de control de calidad y propiedad intelectual, criminalizando prácticas ancestrales de intercambio y conservación.

El tercer desafío es la falta de apoyo institucional sostenido. La mayoría de los bancos de semillas dependen de proyectos de cooperación internacional u ONG, y cuando estos finalizan, los bancos tienden a debilitarse o desaparecer. La institucionalización de los bancos comunitarios dentro de las políticas públicas (con presupuesto, asistencia técnica y reconocimiento legal) es una tarea pendiente.

Sistemas de riego ancestrales y cosecha de agua

La "siembra y cosecha de agua": un conocimiento ancestral revitalizado

La "siembra y cosecha de agua" (SyCA) es un concepto que integra diversas técnicas ancestrales de manejo del agua basadas en un principio fundamental: así como se siembran semillas para cosechar alimentos, se "siembra" agua en el subsuelo durante la temporada de lluvias para "cosecharla" durante la temporada seca. Este enfoque considera el ciclo hidrológico como un sistema integral que puede ser manejado mediante infraestructura natural y comunitaria.

Una revisión de la literatura sobre la siembra y cosecha de agua en Ecuador, publicada en la revista *Heritage*, concluye que esta práctica es un método de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) aplicado a los problemas de escasez de agua. Las técnicas SyCA son asequibles, ecológicas y de alta eficiencia, mejorando la productividad agrícola y garantizando el suministro de agua para el consumo humano. El estudio destaca el acuífero costero de Manglaralto como caso de estudio en la región costera de Ecuador, donde se ha implementado la gestión de SyCA y la recarga artificial de acuíferos. Las estructuras de SyCA se han convertido en una referencia para el desarrollo sostenible de comunidades rurales que pueden ser replicadas nacional e internacionalmente como una alternativa resiliente a la escasez de agua y a la emergencia climática global, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO (Herrera-Franco et al., 2024).

Las albarradas: ingeniería ancestral en la costa semiárida

En la Península de Santa Elena, una de las zonas más secas del Ecuador, las comunidades han utilizado durante milenios las **albarradas** (también llamadas "tapes" o "represas de tierra") como sistema de cosecha de agua. Estas estructuras, construidas por la cultura Valdivia entre 2000 y 1500 a.C., son diques de tierra que se construyen en los cauces de quebradas o en zonas bajas para almacenar agua de lluvia y escorrentía (Balmaseda Espinosa et al., 2019; Herrera-Franco et al., 2020).

Las albarradas cumplen múltiples funciones. Almacenan agua para consumo humano y riego durante la estación seca, recargan acuíferos subterráneos por infiltración, controlan la erosión hídrica al retener sedimentos, y proporcionan hábitat para flora y fauna local. Su diseño, basado en conocimiento empírico acumulado por generaciones, incluye criterios sobre ubicación (en zonas de convergencia de escorrentía), materiales (tierra compactada, a veces con núcleo de piedra), altura (generalmente menos de 5 metros) y sistema de desagüe (vertedero de excedentes).

Un estudio para el diseño de una presa colinar (hill dam) en la comuna de Sacachún, Santa Elena, propone una estructura de 10 metros de altura y 40 metros de ancho, con una capacidad de almacenamiento de 114.341 m^3, que permitiría extender la agricultura a 7,5 hectáreas mediante un sistema de policultivo de seis plantas diferentes. El diseño combina el conocimiento ancestral de las albarradas con técnicas clásicas de ingeniería, demostrando la vigencia y efectividad de este sistema tradicional (Mullo-Sinaluisa et al., 2022).

El gobierno ecuatoriano ha respaldado el rescate de este conocimiento mediante la rehabilitación de albarradas en varias comunas de Santa Elena. En Manglaralto, la propia comunidad, con aliados estratégicos, ha evolucionado y adaptado estos conocimientos ancestrales para responder a una demanda creciente de agua, fortaleciendo sus actividades productivas como turismo y agricultura (Herrera-Franco et al., 2020).

Sistemas de riego ancestrales en los Andes

En los Andes ecuatorianos, los sistemas de riego tradicionales tienen orígenes prehispánicos y han sido mantenidos y adaptados por las comunidades durante siglos. Un estudio histórico del riego tradicional en los Andes ecuatorianos documenta que más de 200.000 hectáreas agrícolas disponen de aportes artificiales de agua, y que los canales modernos construidos por iniciativa pública desde 1945 representan no más del

5 al 30% de las superficies dedicadas al riego. Es decir, el riego tradicional mantiene todavía la primacía espacial en los Andes (Ruf & Nuñez, 1991).

Entre las técnicas destacadas se encuentra el **riego por surcos en zigzag**, una tecnología prehispánica que facilita el riego uniforme de terrenos agrícolas al disminuir la velocidad del agua y permitir su infiltración en todo el terreno (IUCN, 2013; IUCN, 2024). Esta técnica es particularmente efectiva en laderas, donde el agua tendería a escurrir rápidamente sin infiltrarse.

El caso de Urcuquí, en la cuenca del río Mira (provincia de Imbabura), es ejemplar de la complejidad de los sistemas de riego tradicionales. Alrededor de 6.000 habitantes de las parroquias de Urcuquí y San Blas manejan 28 perímetros regados con una superficie de 5.000 hectáreas, servidas por unas veinte acequias que se originan en 28 tomas con un caudal aproximado de 3,5 metros cúbicos por segundo. El agua es distribuida mediante un sistema de turnos organizado según los derechos de cada uno de los 600 usuarios (Ruf & Nuñez, 1991).

La gestión de estos sistemas es comunitaria. Existen juntas de regantes que organizan la operación y el mantenimiento de los canales (limpieza, reparación de bocatomas y compuertas), distribuyen el agua según derechos históricos y resuelven conflictos entre usuarios. Esta institucionalidad local, basada en la reciprocidad y la autorregulación, ha demostrado una notable resiliencia a lo largo de los siglos.

Enfoque histórico del riego andino

El estudio histórico del riego tradicional en los Andes ecuatorianos ha revelado estructuras complejas de riego, formas de compartir el agua y técnicas de aplicación que permiten cuestionarse sobre los orígenes y evoluciones de los sistemas de riego en la región. Los investigadores han identificado que el acceso al agua de riego siempre ha sido conflictivo, y que el manejo del riego tradicional no se puede entender sin tener las referencias del pasado del sistema (Ruf & Nuñez, 1991).

Los sistemas de riego tradicionales se caracterizan por: (a) captación de agua desde quebradas, ríos o lagunas mediante bocatomas sencillas; (b) transporte por canales abiertos, a menudo con tramos excavados en roca o construidos con piedra y barro; (c) distribución mediante compuertas y particiones que asignan caudales a diferentes usuarios o zonas; (d) aplicación en la parcela mediante surcos o inundación; y (e) organización social que regula el acceso y resuelve conflictos.

Frente a la crisis del agua exacerbada por el cambio climático, las comunidades están revitalizando estos sistemas. La "siembra y cosecha de agua" se ha convertido en una estrategia clave para la adaptación, con casos documentados en la provincia de Santa Elena donde el acuífero costero de Manglaralto involucra gestión de SyCA y recarga artificial de acuíferos (Herrera-Franco et al., 2024).

Estrategias complementarias de manejo de agua

Además de las albarradas y canales, existen otras prácticas de manejo de agua que forman parte del repertorio de adaptación de la agricultura familiar:

Terrazas de formación lenta (andenes): Estas estructuras, construidas en laderas mediante muros de contención de piedra, crean superficies planas que retienen agua y suelo, reducen la erosión y mejoran las

condiciones para el cultivo. Aunque su construcción requiere alta inversión de mano de obra, su mantenimiento es bajo y su vida útil puede ser de siglos (IUCN, 2013).

Zanjas de infiltración (trincheras): Zanjas excavadas en curvas de nivel para capturar escorrentía y permitir su infiltración, recargando acuíferos y humedeciendo el suelo para los cultivos.

Cosecha de agua en albarradas: Como se describió anteriormente, estas estructuras almacenan agua superficial durante la estación lluviosa para su uso en la estación seca (Balmaseda Espinosa et al., 2019).

Riego por surcos en zigzag: Esta técnica, de origen prehispánico, desacelera el flujo del agua, aumenta el tiempo de infiltración y distribuye el agua más uniformemente (IUCN, 2013).

Desafíos para el riego tradicional frente al cambio climático

A pesar de su resiliencia, los sistemas de riego tradicionales enfrentan desafíos cada vez más severos. El retroceso de glaciares y la reducción de la capa de nieve en los volcanes están afectando la disponibilidad de agua en épocas secas. Las lluvias más erráticas dificultan la planificación de la gestión del agua: cuando llueve intensamente, las estructuras de captación y almacenamiento pueden resultar insuficientes; cuando no llueve, los caudales se reducen drásticamente.

La contaminación del agua por minería, actividades agroindustriales y aguas servidas también afecta la calidad del agua para riego, especialmente en zonas bajas y cercanas a centros urbanos. Los conflictos por el agua (entre comunidades, entre agricultura y minería, entre riego y consumo humano) se han intensificado.

Finalmente, el debilitamiento de las organizaciones de regantes (por migración juvenil, pérdida de interés, cooptación política) pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas tradicionales. La revitalización de estas formas de autogestión comunitaria es una condición necesaria para que el riego tradicional cumpla su papel en la adaptación al cambio climático.

El rol de las mujeres en la agroecología y la adaptación climática

Las mujeres rurales son protagonistas centrales de las estrategias de adaptación agroecológica, pero también enfrentan barreras estructurales que limitan su capacidad de acción. La investigación de Silva Álvarez (2025) sobre desigualdades de género en el acceso a recursos agrícolas en Ecuador evidencia que, aunque las mujeres sostienen la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la transmisión de conocimientos ancestrales, enfrentan desigualdades estructurales en el acceso a tierra, crédito, tecnología y asistencia técnica, lo que incrementa su vulnerabilidad climática.

El estudio, realizado desde un enfoque ecofeminista e interseccional, analiza la experiencia del Comité Central de Mujeres UNORCAC en Cotacachi y concluye que, en contraste con las limitaciones estructurales, la organización comunitaria y los liderazgos femeninos emergen como estrategias clave de resistencia y adaptación, generando alternativas frente al extractivismo y fortaleciendo la soberanía alimentaria (Silva Álvarez, 2025).

El rol de las mujeres como guardianas de semillas y gestoras del agua es fundamental. En Cotacachi, Magdalena Laine y su hija Verónica personifican esta doble función: preservan variedades nativas de maíz y otros cultivos, transmiten conocimientos a las nuevas generaciones y participan en mercados agroecológicos que comercializan sus productos. "Mi madre es guardiana de semillas. Ella preserva muchas variedades nativas de semillas de maíz. Ella me está enseñando todo sobre los cultivos", relata Verónica (FAO, 2025).

La FAO ha apoyado a organizaciones de mujeres agricultoras a través del mecanismo Forest and Farm Facility (FFF), que brinda capacitación en contabilidad y marketing para ayudar a las mujeres a participar en ventas directas en Cotacachi y otros centros urbanos. Desde 2019, aproximadamente 13.500 familias rurales en todo Ecuador se han beneficiado de proyectos apoyados por FFF (FAO, 2025).

Integración de estrategias hacia una agricultura resiliente

La Chakra como sistema integral

La chakra andina, reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (GIAHS) en 2023, integra en un solo espacio las estrategias de agrobiodiversidad, conservación de semillas, manejo de agua y conocimientos tradicionales. Este sistema, mantenido por mujeres kichwa, ha sostenido la seguridad alimentaria y autosuficiencia en la región de Cotacachi durante siglos (FAO, 2025).

La chakra no es solo una unidad productiva; es un sistema de conocimiento que integra dimensiones ecológicas, culturales y sociales. Sus principios incluyen:

Diversidad funcional: Se cultivan múltiples especies y variedades en el mismo espacio, imitando la estructura del bosque. Esto proporciona alimentos diversos, medicinas, combustible y forraje, además de servicios ecosistémicos como control de plagas y fertilización natural.

Manejo de microclimas y pisos altitudinales: Las comunidades kichwa aprovechan los diferentes pisos climáticos (pisos climáticos) para cultivar variedades adaptadas a cada altitud y temperatura. Este conocimiento detallado del territorio es una herramienta clave para la adaptación al cambio climático (FAO, 2025).

Reciprocidad y trabajo colectivo: La minga, el trueque y otras formas de colaboración permiten compartir mano de obra, semillas, agua y conocimientos, fortaleciendo la resiliencia comunitaria.

El papel de las organizaciones de apoyo

Organizaciones como EkoRural han desempeñado un papel crucial en la revitalización de prácticas agroecológicas y la conexión de agricultores con mercados urbanos. Desde 2005, el número de organizaciones de agricultores que adoptan prácticas agroecológicas en Ecuador ha aumentado, y las iniciativas de mercado local están creciendo. Los agricultores están recuperando conocimientos tradicionales sobre agua, agrobiodiversidad, bosques y páramos. Los manglares también están siendo conservados, restaurados y protegidos (Groundswell International, 2024).

Las estrategias de EkoRural incluyen:

Preservación de semillas nativas: Bancos comunitarios gestionados predominantemente por mujeres aseguran la circulación de semillas nativas de alta calidad (Groundswell International, 2024).

Intercambios campesinos y aprendizaje basado en descubrimiento: Agricultores participan en experimentos prácticos para adaptar sus prácticas a los desafíos climáticos, asegurando que permanezcan como administradores de sus ecosistemas únicos (Groundswell International, 2024).

Integración a mercados locales: Los agricultores colaboran con grupos de consumidores urbanos a través de Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) y mercados directos. Este enfoque fortalece a los agricultores, reduce la explotación de intermediarios y proporciona a los residentes urbanos alimentos asequibles, nutritivos y cultivados localmente. El modelo de Canastas Comunitarias conecta a familias urbanas con agricultores agroecológicos, fomentando la confianza y el beneficio mutuo (Groundswell International, 2024).

Fortalecimiento económico para la resiliencia

La adaptación al cambio climático no es solo una cuestión técnica; también es económica. Las familias agricultoras necesitan ingresos estables para invertir en medidas de adaptación, absorber pérdidas por eventos extremos y evitar la migración forzada. La FAO está apoyando grupos de ahorro liderados por mujeres con capacitación en finanzas. Estos sistemas de crédito comunitarios ofrecen micropréstamos a sus miembros, permitiendo a las comunidades rurales invertir en sus parcelas y mejorar la productividad o hacer frente a emergencias como una cosecha fallida. En Cotacachi, algunos grupos de ahorro han aumentado su capacidad de crédito de 30 USD a más de 2.000 USD en cinco años (FAO, 2025).

Como señala la representante de la FAO en Ecuador, Gherda Barreto: "Fortalecer los grupos de ahorro es parte de nuestra estrategia para transformar el sector agroalimentario con una visión de desarrollo rural inclusivo. Sin resiliencia económica, la adaptación al cambio climático será difícil de lograr" (FAO, 2025).

Lecciones y perspectivas

La experiencia de los bancos comunitarios de semillas y los sistemas ancestrales de manejo de agua en Ecuador ofrece lecciones valiosas para la adaptación al cambio climático en la agricultura familiar.

En primer lugar, los conocimientos y prácticas ancestrales no son reliquias del pasado, sino recursos vivos y en evolución que pueden contribuir significativamente a enfrentar los desafíos contemporáneos. La siembra y cosecha de agua, las albarradas, los sistemas de riego en zigzag y los bancos de semillas comunitarias han demostrado su efectividad a lo largo de siglos y siguen siendo relevantes hoy.

En segundo lugar, la diversidad biológica y cultural son la base de la resiliencia. Los sistemas que dependen de pocas variedades de cultivos o de fuentes únicas de agua son más vulnerables a perturbaciones que los sistemas diversos. Promover la agrobiodiversidad y la pluralidad de estrategias de manejo de agua es una estrategia de adaptación en sí misma.

En tercer lugar, las mujeres son protagonistas centrales de la adaptación climática, pero requieren políticas que reconozcan su trabajo, garanticen su acceso a recursos y fortalezcan sus organizaciones. Ignorar la dimensión de género en las políticas de adaptación es condenarlas al fracaso.

En cuarto lugar, las políticas públicas deben combinar el apoyo a prácticas ancestrales con inversiones en infraestructura, investigación participativa y fortalecimiento organizativo. La adaptación no es solo una cuestión de "volver al pasado", sino de combinar lo mejor del conocimiento tradicional con innovaciones apropiadas y acceso a recursos.

Finalmente, la adaptación al cambio climático no puede separarse de la lucha por la soberanía alimentaria y la justicia social. Las comunidades que no tienen control sobre sus territorios, semillas y agua difícilmente podrán adaptarse autónomamente. Fortalecer la autonomía campesina e indígena es, por tanto, una condición para la adaptación.

Como dice Elena Tenelema, lideresa de la comunidad kichwa de Tzimbuto: "Cuidar a nuestra Pachamama (Madre Tierra) es lo más importante. Si la contaminamos con químicos, será el fin de nuestra tierra y no la tendremos en el futuro". Y agrega: "En cada hogar de nuestra comunidad, tenemos las semillas nativas que hemos guardado de nuestros antepasados" (Groundswell International, 2024).

Capítulo 10. Análisis de retos estructurales

Los capítulos anteriores han documentado la riqueza y diversidad de la agricultura familiar en Ecuador, sus estrategias de adaptación y las experiencias organizativas que demuestran su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y la soberanía del país. Sin embargo, esta realidad positiva coexiste con un entramado de desafíos estructurales que limitan el desarrollo del sector y perpetúan la pobreza rural. Este capítulo analiza cuatro de estos nudos críticos: la falta de asistencia técnica y extensión rural efectiva, el acceso limitado a crédito y mercados justos, la presión extractivista sobre los territorios campesinos, y la inestabilidad de las políticas públicas junto al desfinanciamiento del sector rural. Lejos de ser problemas aislados, estos factores se articulan y retroalimentan, configurando un círculo vicioso que la política pública ha intentado abordar sin éxito duradero.

Falta de asistencia técnica y extensión rural

Una brecha histórica en la transferencia de conocimiento

La asistencia técnica y la extensión rural son servicios fundamentales para el desarrollo de la agricultura familiar. Permiten a los productores acceder a innovaciones tecnológicas, mejorar sus prácticas de manejo, aumentar su productividad y adaptarse a desafíos como el cambio climático. Sin embargo, en Ecuador, estos servicios han sido históricamente débiles, fragmentados y con baja cobertura, especialmente para los pequeños productores.

El diagnóstico es contundente. Según la Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025-2034 "Manos para el Campo", apenas el **5,5% de las Unidades de Producción Agropecuaria aplica prácticas de mitigación o adaptación climática** (línea base 2023), con la meta de llegar solo al 10% en 2034 (El Comercio, 2026). Esta cifra revela la magnitud del desafío: la inmensa mayoría de los agricultores familiares no recibe asistencia para enfrentar el cambio climático, a pesar de ser uno de los sectores más vulnerables.

En cultivos clave como la papa, la situación es igualmente preocupante: solo el **2% de la superficie usa semilla certificada**, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (ESPAC 2024) (El Comercio, 2026). Esto significa que el 98% de los productores de papa utilizan semillas de calidad no controlada, muchas veces provenientes de canales informales, lo que afecta rendimientos y resistencia a plagas y enfermedades.

La brecha en riego tecnificado es otra expresión de esta carencia. Apenas el **18,45% de pequeños y medianos productores contaba con riego tecnificado en 2023** (El Comercio, 2026). El área de cobertura de riego tecnificado para productores de menos de una hectárea hasta 20 hectáreas era de 62.640 hectáreas hasta 2024, y la meta es incorporar 38.894 hectáreas adicionales en diez años, con un costo estimado de 233 millones de dólares (El Comercio, 2026). Las provincias con mayor déficit hídrico —El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Loja, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi— concentran buena parte de la vulnerabilidad productiva, con regímenes deficitarios de 8 a 12 meses (El Comercio, 2026).

La limitada adopción tecnológica

Un estudio realizado en la zona subtropical de Ecuador, centrado en la producción de banano en el cantón La Maná, aplicó modelos multivariados para analizar la adopción de maquinaria agrícola y agricultura de precisión. Mediante análisis de componentes principales y clustering K-means, los investigadores identificaron tres perfiles distintos de adopción tecnológica: alto, medio y bajo (Jácome et al., 2025).

Los hallazgos muestran que, si bien la mecanización básica es común, la agricultura de precisión aún enfrenta barreras estructurales y culturales. Los productores en los grupos de adopción media y baja enfrentan limitaciones relacionadas con **financiamiento, capacitación técnica y resistencia a la innovación**, que frenan la adopción tecnológica. Los autores concluyen que mejorar la competitividad del sector bananero local requiere políticas públicas diferenciadas que expandan el acceso a crédito blando, fortalezcan programas de capacitación continua y ofrezcan servicios de extensión adaptados (Jácome et al., 2025).

Lecciones desde la Amazonía: extensión híbrida

Un experimento de campo aleatorizado realizado con 944 productores de palma aceitera en las provincias de Orellana y Sucumbíos arroja luz sobre la efectividad de diferentes modalidades de extensión rural (Estudio en ScienceDirect, 2025). La investigación comparó los efectos de días de campo presenciales (field days) y estímulos digitales personalizados (nudges) enviados por WhatsApp, tanto por separado como en combinación.

Los resultados son reveladores. Los días de campo presenciales aumentaron las tasas de lectura, respuesta y clic en los mensajes de campaña automatizados en **14%, 88% y 52% respectivamente**. Los estímulos digitales, por su parte, incrementaron la tasa de clic en informes personalizados y cápsulas de video en un **238%**, pero no tuvieron impacto en la participación con los mensajes genéricos de las campañas automatizadas (Estudio en ScienceDirect, 2025).

En términos de conocimientos, tanto los días de campo como los estímulos digitales aumentaron el conocimiento, particularmente sobre polinización, en un **16%**. Sin embargo, su combinación no generó ganancias adicionales, lo que sugiere que en este contexto operaron como sustitutos más que como complementos. Lo más importante: **solo los días de campo tuvieron un efecto detectable en la adopción de prácticas**, aumentando la polinización en un 58% y el área de palma híbrida en un 8% (Estudio en ScienceDirect, 2025).

Este estudio tiene implicaciones cruciales para el diseño de políticas de extensión rural en Ecuador. Si bien las herramientas digitales son prometedoras por su bajo costo y escalabilidad, no pueden sustituir completamente la interacción presencial, el aprendizaje social y los efectos demostrativos que caracterizan a la capacitación en campo. Como señalan los autores, "el aprendizaje social y los efectos de demostración, que han demostrado ser la base del éxito de la capacitación presencial, no pueden replicarse fácilmente a través de medios digitales" (Estudio en ScienceDirect, 2025).

El déficit de investigación agropecuaria

La capacidad de generar innovaciones tecnológicas pertinentes para la agricultura familiar también es limitada. El índice de intensidad en I+D —que mide cuánto se invierte en investigación agropecuaria en

relación con el valor total que genera el sector— ronda apenas el **0,11%**, muy por debajo del estándar internacional y lejos de la meta del 1% planteada en la política "Manos para el Campo" (El Comercio, 2026).

El presupuesto del INIAP ilustra la magnitud del desafío. En 2025 registró 13 millones de dólares en gasto corriente, tres millones de dólares vía FIASA y 423.139 dólares en inversión. Para 2026, el gasto corriente sube apenas a 13,25 millones y el FIASA a cuatro millones, mientras la inversión llega a 484.840 dólares (El Comercio, 2026). El propio INIAP admite que el presupuesto actual permite operar, pero no cerrar la brecha histórica de innovación. Como señala el análisis de El Comercio, "el aumento es marginal frente al salto estructural que implica pasar de 0,11% a 1% del PIB agrícola en I+D" (El Comercio, 2026).

Acceso limitado a crédito y mercados justos

El crédito como barrera estructural

El acceso al crédito es una de las restricciones más severas que enfrenta la agricultura familiar en Ecuador. Sin financiamiento, los productores no pueden invertir en mejoras tecnológicas (riego, semillas mejoradas, maquinaria), enfrentar shocks climáticos o expandir sus áreas de cultivo. La situación es particularmente grave para los pequeños productores y para las mujeres.

Un estudio que analizó la distribución del crédito privado en Ecuador desde una perspectiva de género, basado en datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, identificó una **marcada desigualdad en el acceso al crédito**: los hombres recibieron un mayor número de operaciones y montos más altos que las mujeres. Además, las mujeres accedieron principalmente a productos agrícolas de menor rentabilidad, lo que limita su capacidad de inversión y competitividad (Palacios Silva, 2025).

El estudio concluye que "el acceso al crédito privado está influenciado por factores estructurales asociados al género, que restringen las oportunidades de las mujeres rurales" y que "la oferta financiera privada carece de mecanismos diferenciados que consideren las particularidades de las mujeres, lo que impide una distribución equitativa del financiamiento en el país" (Palacios Silva, 2025).

El crédito público, a través de BanEcuador, muestra una situación algo diferente. En 2025, BanEcuador destinó un **15% de su colocación agropecuaria a productos exclusivos de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)** , equivalente a 49,3 millones de dólares en 6.272 operaciones. El **65% de esos créditos fue para mujeres** (El Comercio, 2026). Sin embargo, la AFC sigue representando una porción minoritaria del total de crédito agropecuario, y el volumen total sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la demanda.

Un problema adicional es la alta morosidad del crédito agrícola. Según cifras de cartera vigentes de BanEcuador (2025), la morosidad alcanza el **25,67%** (El Comercio, 2026). Esta alta morosidad encarece el crédito y hace que las instituciones financieras sean reacias a prestar a pequeños productores, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad climática.

Comercialización e intermediación

La comercialización es otro de los grandes cuellos de botella para la agricultura familiar. La intervención de múltiples intermediarios reduce drásticamente el precio que reciben los productores, mientras que los consumidores pagan precios elevados. La política "Manos para el Campo" busca reducir la intermediación y fortalecer la venta directa. Entre 2020 y 2025, el Ministerio reporta 828 procesos de vinculación comercial entre asociaciones y supermercados, industrias o exportadoras (El Comercio, 2026).

Sin embargo, el panorama organizativo es complejo. Actualmente hay **10.244 organizaciones agroproductivas registradas**, pero solo **4.210 están activas**. Es decir, el 41% de las organizaciones formalmente constituidas tiene actividad operativa (El Comercio, 2026). La meta al 2034 es que 340 asociaciones estén vinculadas a mercados (hoy son 100) y que las ventas directas pasen de 21,9 millones de dólares en 2024 a 30,8 millones de dólares. El desafío, como señala el análisis de El Comercio, es empresarial: "¿cómo convertir organizaciones legales en empresas rurales competitivas y sostenibles?" (El Comercio, 2026).

Un problema adicional es la **informalidad** de muchos pequeños productores, que limita su acceso a mercados formales y a programas de apoyo gubernamental. Un proyecto de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), titulado "Formación financiera y obligaciones fiscales para pequeños productores", busca reducir estas brechas de desconocimiento técnico en materia tributaria y financiera que afectan al sector rural. El proyecto, que capacita a 100 beneficiarios directos y 300 indirectos en temas como obtención del RUC, facturación electrónica, declaraciones de impuestos y planificación financiera básica, aspira a fortalecer la sostenibilidad económica del campo promoviendo una cultura de formalización (Peralta Carpio, 2025).

La paradoja de la agricultura familiar: producir alimentos, vivir en pobreza

A pesar de que la agricultura familiar campesina en Ecuador es responsable de producir **más de dos tercios de los alimentos** necesarios para sostener la nutrición del país y contribuye significativamente a las exportaciones agrícolas, las zonas rurales experimentan los niveles más altos de pobreza (Espinel & Solórzano, 2025). Según datos del INEC, en 2021, el **42,96% de la población rural vivía por debajo de la línea de pobreza**, con un **20,3% en situación de pobreza extrema** (Espinel & Solórzano, 2025; INEC, 2021).

Esta marcada disparidad representa un problema de justicia social que exige atención urgente. Como señalan Espinel y Solórzano (2025), "algunos analistas argumentan que las ineficiencias de la agricultura campesina contribuyen a estos problemas, calificándola como insostenible debido a su aparente baja productividad y rentabilidad. Sin embargo, tales evaluaciones a menudo pasan por alto el papel crucial del sector en la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental".

La agricultura familiar sostiene el suministro local de alimentos y promueve la estabilidad ecológica a través de prácticas diversas y sostenibles. La orientación de las políticas públicas, en particular el apoyo a los pequeños agricultores, es esencial para determinar la sostenibilidad de estas comunidades rurales y la mejora de sus condiciones de vida, especialmente frente a las crecientes presiones de la agricultura corporativa moderna (Espinel & Solórzano, 2025).

Presión extractivista: minería, acuicultura y urbanización

La expansión de la frontera agroindustrial y extractiva

La agricultura familiar en Ecuador no solo enfrenta desafíos internos (falta de crédito, asistencia técnica, mercados), sino también presiones externas que amenazan la base misma de su existencia: la tierra y el territorio. Estas presiones provienen de múltiples frentes: la expansión de monocultivos industriales (palma aceitera, banano, aguacate, berries), la minería metálica, la acuicultura (camaroneras) y la urbanización.

Según datos del Ministerio de Ambiente, Ecuador perdió el **14,6% de sus bosques entre 1990 y 2020**, en gran parte debido a la conversión a tierras agrícolas y la extracción de madera, y en menor medida por el desarrollo de carreteras y la exploración petrolera (Interactive Country Fiches, 2024). El sector de tierras contribuyó con el **30% del balance total de emisiones nacionales de GEI en 2016**. En 2013, el área bajo manejo humano era de 7,33 millones de hectáreas, cubriendo el 29% del país. De esta área, 5,11 millones de hectáreas son para agricultura y ganadería (Interactive Country Fiches, 2024).

Se ha determinado que el **50% del suelo cultivado está erosionado**, y que la erosión está intrínsecamente vinculada a la expansión agrícola y los procesos de cambio de uso del suelo (Interactive Country Fiches, 2024). A nivel regional, se pueden identificar dos mecanismos generales que explican el reciente aumento de la dinámica de cambio de uso del suelo: a) la expansión de áreas agrícolas y b) el desplazamiento de usos extensivos de la tierra.

El proceso de cambio de uso del suelo muestra un reemplazo de cultivos de autoconsumo por cultivos más eficientes económicamente como cacao, café, banano, arroz, yuca y papa china. Además, la expansión de la acuicultura y las plantaciones forestales reemplazan frecuentemente áreas previamente utilizadas como pastizales, desplazando parte del área reemplazada (Interactive Country Fiches, 2024).

Minería: el oro que devora territorios

La minería metálica es una de las presiones extractivistas más agresivas sobre los territorios campesinos e indígenas. En la provincia de El Oro —cuyo nombre, significativamente, significa "oro" en español— la minería tiene una larga historia. Las áreas mineras de oro más importantes se encuentran en las regiones de Nambija y Buenos Aires. Nambija, ubicada cerca de la ciudad de Zamora, es conocida por sus depósitos de oro aluviales. Buenos Aires, cerca de la ciudad de Machala, tiene depósitos de oro aluviales y subterráneos. En el siglo XX, comenzaron a desarrollarse operaciones mineras a gran escala en la provincia, particularmente en las áreas de Zaruma y Portovelo. Estas minas extrajeron principalmente oro y plata, y contribuyeron significativamente a la economía local (Ramos-Miras et al., 2023).

Hoy en día, la minería en El Oro es en su mayoría a pequeña escala y artesanal, con muchas operaciones mineras informales dispersas por toda la provincia. En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha buscado regular y formalizar el sector minero en El Oro. Otros minerales que se extraen en la provincia de El Oro incluyen cobre (Cu), oro (Au) y plomo (Pb) (Ramos-Miras et al., 2023).

Los impactos ambientales de la minería son severos. Las operaciones mineras liberan contaminantes al agua y al suelo, afectando la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Estos contaminantes pueden llegar a las camaroneras, una actividad económica importante en la provincia, afectando la producción de

camarones. Como señalan Ramos-Miras et al. (2023), "la provincia tiene varias industrias, incluyendo la minería, que pueden liberar contaminantes al agua".

Acuicultura: el avance de las camaroneras

La expansión de la acuicultura, particularmente el cultivo de camarón, ha sido otro factor de presión sobre los ecosistemas costeros y los territorios de comunidades campesinas y afrodescendientes. El cultivo de camarón ha reemplazado grandes extensiones de manglares y bosques secos, con graves impactos sobre la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la recolección.

En la provincia de El Oro, el área de cultivo de camarón es significativa. Según Ramos-Miras et al. (2023), la región enfrenta varios desafíos debido a la contaminación de diversas fuentes. Una de las fuentes principales de contaminación que afecta al cultivo de camarón en El Oro es la **escorrentía agrícola**. La región es conocida por sus prácticas agrícolas intensivas, incluyendo el uso de fertilizantes y pesticidas. Estos productos químicos pueden filtrarse en los cursos de agua cercanos y eventualmente llegar a los estanques de camarón, donde pueden dañar a los camarones y reducir la producción.

La contaminación industrial es otra fuente de contaminación que afecta el cultivo de camarón en El Oro. La provincia tiene varias industrias, incluyendo la minería, que pueden liberar contaminantes al agua. "Estos contaminantes pueden contaminar el medio ambiente y afectar la salud de los camarones y otros organismos acuáticos" (Ramos-Miras et al., 2023).

Urbanización y cambio de uso del suelo

La expansión urbana también ejerce presión sobre las tierras agrícolas, especialmente en las periferias de las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. La presión inmobiliaria, el desarrollo de infraestructura vial y la expansión de zonas residenciales e industriales reducen la disponibilidad de tierras para la agricultura familiar y elevan su costo.

Después de 2016, la intensidad de los procesos de cambio de uso del suelo se incrementó debido al retorno de miles de trabajadores y trabajadores temporales rurales que perdieron su trabajo como consecuencia de la crisis nacional durante el período 2014-2016 y, en la costa norte, debido al terremoto de abril de 2016 (Interactive Country Fiches, 2024). Muchos de estos trabajadores regresaron a actividades agrícolas en sus lugares de residencia habitual, aumentando momentáneamente la dinámica de cambio de uso del suelo.

Políticas inestables y desfinanciamiento del sector rural

La tensión entre metas ambiciosas y recursos limitados

La política pública para el sector agropecuario en Ecuador ha sido históricamente inestable, con frecuentes cambios de rumbo asociados a los ciclos políticos y a la alta rotación de autoridades. La Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025-2034 "Manos para el Campo" representa un intento por superar esta debilidad, estableciendo un marco decenal que trascienda los cambios de gobierno. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos estructurales significativos.

La política fija metas ambiciosas: reducir la desnutrición crónica infantil del 17,5% (2023) al 11,67% en 2034; duplicar el crédito agropecuario; tecnificar casi 40.000 hectáreas; y cuadruplicar la cobertura del

seguro agrícola en 10 años (El Comercio, 2026). Sin embargo, como señala un análisis de El Comercio, "la línea base revela fragilidades profundas" y "la pregunta es si el entorno financiero, institucional y tecnológico permite sostener la transformación del agro sin que las metas queden en papel" (El Comercio, 2026).

El problema central es la **tensión entre una política decenal y un presupuesto anual**. El costo estimado solo para el componente de riego es de 233 millones de dólares, pero no hay un cronograma plurianual aprobado por el Ministerio de Finanzas. La inversión dependerá de asignaciones anuales, sujetas a las prioridades cambiantes del gobierno y a la disponibilidad fiscal (El Comercio, 2026).

La brecha de implementación

Un análisis anterior sobre la política agropecuaria ecuatoriana señaló que "la implementación de estos planes políticos se vio afectada por factores como la limitada capacidad operativa de las instituciones involucradas, la frecuente rotación de los equipos, la presión constante ejercida por diferentes actores y, además, una legislación contradictoria a nivel local y secundario" (Interactive Country Fiches, 2024). En años más recientes, la principal limitación para la implementación de programas y proyectos ha sido "la disponibilidad de recursos suficientes, debido a la caída de los ingresos del Estado y la desaceleración de la economía en 2015 y 2016" (Interactive Country Fiches, 2024).

Esta brecha entre el reconocimiento normativo y la implementación efectiva es una constante en la política agraria ecuatoriana. La Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) de 2009, la Constitución de 2008 y otros instrumentos legales han establecido marcos avanzados para la protección de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Sin embargo, su aplicación plena ha sido obstaculizada por la falta de voluntad política, el desfinanciamiento y las presiones de actores con intereses contrarios.

El desfinanciamiento crónico

El desfinanciamiento del sector rural es una de las causas estructurales de la persistencia de la pobreza y la vulnerabilidad de la agricultura familiar. La inversión en agricultura sostenible representa solo el **3,5% del PIB anual**, y el Banco Mundial estima que se requiere una inversión mayor para mitigar los impactos del cambio climático y transformar el sector (La Hora, 2026).

El presupuesto del INIAP, como se mencionó, es insuficiente para cerrar la brecha de innovación. La cobertura del seguro agropecuario se ubicaba en apenas el **0,9%** en 2023 (El Comercio, 2026), lo que deja a la mayoría de los agricultores expuestos a los riesgos climáticos sin ninguna protección. La asistencia técnica, la extensión rural y los programas de comercialización también sufren de recursos insuficientes.

El contexto fiscal adverso

El contexto fiscal ecuatoriano ha sido particularmente adverso para el sector rural en los últimos años. La eliminación del subsidio al diésel, anunciada en 2025, afectará los costos de producción agrícola, ya que el diésel es un insumo clave para la maquinaria agrícola y el transporte de productos. El gobierno ha anunciado compensaciones dirigidas a agricultores y pescadores, incluyendo la entrega de un "capital semilla", 1.200 tractores (400 en 2025 y 800 en 2026), y 600 motores fuera de borda para pescadores

artesanales, aunque sin fecha ni plazo definidos (Expreso, 2025). El impacto de estas medidas en los pequeños productores aún es incierto.

Hacia una agenda de transformación estructural

Los desafíos analizados en este capítulo no son problemas aislados, sino dimensiones interrelacionadas de una misma realidad: la agricultura familiar ecuatoriana opera en un entorno de **vulnerabilidad estructural** que limita su capacidad de desarrollo y reproducción. La falta de asistencia técnica y extensión rural se vincula con el desfinanciamiento crónico; el limitado acceso a crédito y mercados justos se agrava por la morosidad y la informalidad; la presión extractivista se intensifica por la debilidad institucional para defender los territorios campesinos; y la inestabilidad de las políticas públicas refleja la ausencia de un pacto político de largo plazo por el desarrollo rural.

Superar estos desafíos requiere una agenda de transformación estructural que combine:

Incremento sostenido de la inversión pública en investigación agropecuaria (para alcanzar al menos el 1% del PIB agrícola), extensión rural (con enfoque territorial y participativo), riego tecnificado y seguro agrícola.

Fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria, con carreras técnicas estables, presupuestos plurianuales y mecanismos de coordinación efectiva entre el MAG, INIAP, Agrocalidad y BanEcuador.

Reforma del sistema financiero rural, con líneas de crédito adaptadas a los ciclos productivos de la agricultura familiar, garantías estatales para reducir la morosidad, y mecanismos diferenciados para mujeres y jóvenes.

Políticas de comercialización justa, incluyendo compras públicas a la agricultura familiar (alimentación escolar, programas sociales), fortalecimiento de circuitos cortos y ferias agroecológicas, y apoyo a la asociatividad empresarial.

Protección efectiva de los territorios campesinos, mediante titulación de tierras, control del acaparamiento, regulación de actividades extractivas y reconocimiento de derechos colectivos.

Estabilidad de políticas públicas, con un pacto político de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno y garantice la continuidad de los programas.

Como concluye el análisis de la política "Manos para el Campo", la pregunta central es si el entorno financiero, institucional y tecnológico permitirá sostener la transformación del agro sin que las metas queden en papel (El Comercio, 2026). La respuesta a esta pregunta dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos, la capacidad de articulación entre actores y, sobre todo, del protagonismo de los propios agricultores familiares y sus organizaciones en la construcción de su futuro.

La agricultura familiar no es un problema a resolver, sino una solución a defender. Como señalan Espinel y Solórzano (2025), "abordar estas desigualdades estructurales es clave para asegurar que la agricultura familiar campesina sea económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sostenible". El desafío es mayúsculo, pero la experiencia de resistencia y creatividad de los agricultores familiares ecuatorianos, documentada a lo largo de este libro, demuestra que otro futuro es posible.

Capítulo 11. Perspectivas y propuestas

Los capítulos precedentes han trazado un recorrido exhaustivo por la realidad de la agricultura familiar en Ecuador: su diversidad territorial, sus estrategias de adaptación, sus formas organizativas y los nudos críticos que limitan su desarrollo. Este capítulo final se proyecta hacia el futuro, articulando perspectivas y propuestas que puedan orientar la acción de los diversos actores involucrados —Estado, organizaciones campesinas, academia, cooperación internacional y ciudadanía— en la construcción de un sistema agroalimentario más justo, sostenible y soberano. Se abordan cuatro ejes fundamentales: el enfoque del Buen Vivir como horizonte ético y político, el fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización, el desarrollo de tecnologías apropiadas y semillas propias, y un conjunto de recomendaciones de política pública para el horizonte 2030-2035.

Repensar la seguridad alimentaria desde el "Buen Vivir" (Sumak Kawsay)

Más allá del enfoque occidental de seguridad alimentaria

El concepto de seguridad alimentaria, tal como ha sido definido por la FAO —disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos— ha sido una herramienta útil para visibilizar el hambre y la malnutrición en la agenda internacional. Sin embargo, como se argumentó en el Capítulo 1, este enfoque tiende a despolitizar el problema alimentario, presentándolo como una cuestión técnica de producción y distribución, cuando en realidad es el resultado de relaciones de poder desiguales en el acceso a la tierra, el agua, los mercados y la toma de decisiones.

Frente a esta limitación, el concepto de **soberanía alimentaria**, acuñado por La Vía Campesina y recogido en la Constitución ecuatoriana de 2008, plantea el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, priorizando la producción local, los mercados nacionales y la agroecología. Pero la Constitución ecuatoriana fue más allá, incorporando el principio del **Sumak Kawsay** o **Buen Vivir** como un paradigma alternativo al desarrollo occidental, que concibe la vida buena no en términos de acumulación material, sino de armonía entre los seres humanos y con la naturaleza (Pachamama).

El Buen Vivir, inspirado en las cosmovisiones de los pueblos andinos (kichwa, shuar, achuar, entre otros), ofrece un marco ético y político para repensar la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en Ecuador. Implica:

Relacionalidad y reciprocidad: A diferencia del individualismo posesivo del capitalismo, el Sumak Kawsay se basa en relaciones de reciprocidad y complementariedad entre personas, comunidades y con la naturaleza. Prácticas como la minga (trabajo colectivo), el trueque (intercambio no monetario) y el ayni (ayuda mutua) son expresiones concretas de este principio.

Integralidad: El Buen Vivir rechaza la separación entre economía, política, cultura y naturaleza. Una política alimentaria desde esta perspectiva no puede reducirse a aumentar la productividad; debe considerar simultáneamente la salud de los ecosistemas, la vitalidad de las culturas, la equidad de género y generacional, y la participación democrática en las decisiones.

Diversidad como valor: El Sumak Kawsay celebra la diversidad —biológica, cultural, productiva— como fuente de resiliencia y riqueza. Se opone a la homogeneización impuesta por los monocultivos, las semillas transgénicas y los estándares únicos de calidad.

Autonomía y autogestión: El Buen Vivir valora la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus propios asuntos, gestionar sus recursos y resolver sus problemas, en lugar de depender de soluciones externas impuestas desde arriba.

Aportes del Buen Vivir a la política agroalimentaria

La incorporación del Sumak Kawsay como marco orientador de las políticas agroalimentarias tiene implicaciones concretas. En primer lugar, implica priorizar la **producción para el mercado interno y el autoconsumo** sobre la producción para la exportación, sin caer en autarquías, pero reduciendo la dependencia de mercados globales volátiles y de alimentos importados que desplazan la producción local.

En segundo lugar, implica valorar los **sistemas alimentarios tradicionales** —chakras, andenes, sistemas agroforestales— no como reliquias del pasado, sino como innovaciones sustentables que merecen ser estudiadas, apoyadas y escaladas. La reciente adhesión de Ecuador a la "Coalición Global sobre los Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas", anunciada por el viceministro de Desarrollo Rural Francisco Minuche en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios en 2024, es un paso en esa dirección (MAG, 2024).

En tercer lugar, implica **redefinir los indicadores de éxito** de las políticas agropecuarias. No basta con medir el crecimiento del PIB agrícola o el volumen de exportaciones; es necesario medir también la reducción de la pobreza rural, la mejora de la salud nutricional, la conservación de la agrobiodiversidad, la equidad de género, la satisfacción de los agricultores con su trabajo y la salud de los ecosistemas.

En cuarto lugar, implica **fortalecer la participación de las organizaciones campesinas e indígenas** en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. La Política "Manos para el Campo" 2025-2034 fue construida mediante un proceso participativo que incluyó mapeo de actores, espacios de diálogo con el sector productivo y uso de información oficial (Swissinfo, 2026). Sin embargo, como advierte el presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano, Ing. Mauro Erazo Vélez, "el desafío central radica en la ejecución. Sin articulación institucional, sin un ministro que este en el campo, sin financiamiento adecuado y presencia territorial, la política agropecuaria seguirá siendo declarativa" (Erazo Vélez, 2026).

La agroecología es un puente práctico entre el Sumak Kawsay y las políticas concretas. Al promover la diversificación de cultivos, el cierre de ciclos de nutrientes, el manejo de plagas sin agroquímicos tóxicos y la conservación de suelos y agua, la agroecología traduce en prácticas agrícolas los principios de armonía con la naturaleza y respeto por los ciclos vitales. Las experiencias documentadas en este libro —las ECAs en Chimborazo, la Minga agroecológica por la vida en Pastaza, los bancos comunitarios de semillas— son ejemplos de cómo la agroecología, enraizada en conocimientos ancestrales y adaptada a condiciones locales, puede ser una estrategia efectiva de adaptación climática, soberanía alimentaria y empoderamiento comunitario.

Fortalecer circuitos cortos: ferias, compras públicas a la agricultura familiar

La importancia de acortar la cadena alimentaria

Uno de los problemas estructurales que enfrenta la agricultura familiar es la intermediación excesiva en la cadena de comercialización. Múltiples intermediarios —desde acopiadores locales hasta mayoristas en los centros de distribución urbana— se apropian de una fracción desproporcionada del precio final pagado por los consumidores, dejando a los productores con un margen que muchas veces no cubre siquiera sus costos de producción.

Frente a esta situación, el fortalecimiento de **circuitos cortos de comercialización** —aquellos que involucran un número reducido de intermediarios y establecen una relación más directa entre productores y consumidores— es una estrategia prioritaria. Los circuitos cortos ofrecen múltiples beneficios: aumentan el precio recibido por los agricultores, reducen el precio pagado por los consumidores, disminuyen las pérdidas postcosecha, generan confianza y relaciones de solidaridad entre campo y ciudad, y permiten diferenciar productos por su calidad, origen y atributos ambientales y sociales.

Ferias agroecológicas y mercados campesinos

Las ferias libres tradicionales, donde los agricultores venden directamente sus productos, son la forma más antigua y extendida de circuito corto en Ecuador. Sin embargo, estas ferias han sido debilitadas por la expansión de supermercados, la falta de infraestructura adecuada y, en algunos casos, por regulaciones sanitarias excesivamente rígidas. Revitalizarlas requiere inversión en infraestructura (pabellones, servicios higiénicos, estacionamientos), capacitación en manipulación de alimentos y organización de los feriantes, y promoción entre los consumidores urbanos.

En los últimos años han surgido experiencias innovadoras de **ferias agroecológicas** y **mercados campesinos** que agregan valor a la producción familiar. En Quito, la feria agroecológica "El Bloque", impulsada por la Red de Agroecología, se ha convertido en un referente de comercio justo local, conectando a decenas de productores de la Sierra norte con consumidores urbanos conscientes. En Cuenca, el Mercado 10 de Agosto ha destinado espacios exclusivos para productores de la Agricultura Familiar Campesina certificados. En Portoviejo, la feria "Manabí Productivo" permite a pequeños agricultores comercializar sus productos sin intermediarios.

El desafío es escalar estas experiencias y hacerlas sostenibles en el tiempo. La política "Manos para el Campo" se ha propuesto fortalecer la comercialización directa, con la meta de que las ventas directas pasen de 21,9 millones de dólares en 2024 a 30,8 millones de dólares al 2034 (El Comercio, 2026). Se espera también que 340 asociaciones estén vinculadas a mercados para ese año, frente a las 100 actuales (El Comercio, 2026).

Compras públicas a la agricultura familiar

Una de las herramientas más poderosas para fortalecer la agricultura familiar es la **compra pública de alimentos** para programas sociales —alimentación escolar, desayunos para personas mayores, comedores comunitarios, etc.— bajo criterios de preferencia por productos locales, frescos y de la agricultura familiar campesina.

Esta estrategia tiene antecedentes exitosos en Brasil, con el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y la obligatoriedad de que al menos el 30% de los recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) se destinen a la agricultura familiar. En Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) establece la preferencia por la producción nacional en la compra pública de alimentos, pero su implementación ha sido débil y fragmentada.

Un paso importante en esta dirección es la Hoja de Ruta Nacional "Hacia un Sistema Alimentario Equitativo, Inclusivo, Competitivo y Resiliente" al 2030, que plantea "subsistemas de producción, transformación y consumo sostenibles, trazables para toda la cadena agroalimentaria, que crean empleo adecuado y cuentan con acceso a crédito preferencial" (MAG, 2024). La hoja de ruta incluye, además, "seguro agrícola diferenciado para agricultores de la Agricultura Familiar y Campesina – AFC, riego tecnificado, tecnología amigable a bajo costo, innovación, valorización de saberes ancestrales, conectividad y alfabetización digital, formación básica y profesional y asistencia técnica adaptada a la realidad rural en su diversidad social, cultural y territorial, con enfoque de género e interculturalidad" (MAG, 2024).

Para que las compras públicas a la agricultura familiar se conviertan en una política efectiva, se requieren varios componentes: (a) un marco normativo que establezca porcentajes mínimos de adquisición a la AFC y mecanismos de preferencia en los procesos de compra; (b) sistemas de información que conecten la oferta de los agricultores con la demanda de los programas sociales; (c) asistencia técnica a las organizaciones de agricultores para cumplir con estándares de calidad, inocuidad y volumen; (d) inversión en infraestructura de almacenamiento, procesamiento y transporte; y (e) seguimiento y evaluación que permita ajustar los programas a las realidades territoriales.

Tecnologías digitales para la comercialización

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ofrecen oportunidades para fortalecer los circuitos cortos, especialmente entre los jóvenes rurales y los consumidores urbanos conectados digitalmente. Aplicaciones móviles como "Fresco & Natural" en Galápagos (Capítulo 6), plataformas de venta directa como "Canastas Comunitarias" y el uso de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram) por parte de grupos de consumidores están transformando la manera en que se comercializan los productos agroecológicos.

Sin embargo, la brecha digital entre zonas urbanas y rurales sigue siendo un obstáculo. La política "Manos para el Campo" ha incorporado la conectividad rural como uno de sus ejes, pero la inversión necesaria es sustancial y su implementación será gradual (El Comercio, 2026). Mientras tanto, las experiencias existentes muestran que, combinadas con estrategias de extensión presencial (como los días de campo), las herramientas digitales pueden ser efectivas para aumentar el conocimiento, aunque su impacto en la adopción de prácticas es menor que el de la capacitación presencial (Estudio en ScienceDirect, 2025).

Tecnologías apropiadas y semillas propias

El concepto de tecnologías apropiadas

Una lección recurrente en la historia del desarrollo rural es que las tecnologías diseñadas para la agricultura industrial en países del Norte —basadas en alta mecanización, insumos químicos y semillas de alta

respuesta— raramente son apropiadas para las condiciones de la agricultura familiar en países como Ecuador. Son costosas, requieren escalas de producción que los pequeños agricultores no tienen, dependen de insumos externos que no siempre están disponibles, y a menudo generan impactos ambientales y sociales negativos.

Frente a esto, el concepto de **tecnologías apropiadas** —acuñado por E.F. Schumacher en su obra "Lo pequeño es hermoso"— propone desarrollos tecnológicos que sean: (a) asequibles para los pequeños agricultores, (b) compatibles con sus conocimientos y recursos disponibles, (c) respetuosos con el ambiente, (d) basados en energías renovables en la medida de lo posible, y (e) de fácil mantenimiento y reparación local.

En el contexto de la agricultura familiar ecuatoriana, las tecnologías apropiadas incluyen:

Sistemas de riego tecnificado de pequeña escala: aspersores y goteo de bajo costo, operados con energía solar o bombeo manual, adaptados a parcelas de una a cinco hectáreas.

Mecanización a pequeña escala: tractores de dos ruedas (motocultores), desgranadoras de maíz manuales o semi-mecánicas, trilladoras de granos de baja capacidad, despulpadoras de café y cacao accionadas manualmente o con pequeños motores.

Infraestructura de postcosecha: silos metálicos herméticos para almacenamiento de granos, secadores solares para frutas y hortalizas, cámaras de fermentación para cacao, molinos de martillos accionados por pedales o pequeños motores.

Energías renovables: biodigestores para producir biogás a partir de estiércol animal, cocinas mejoradas de leña que reducen el consumo de combustible y la contaminación intra-domiciliaria, paneles solares para iluminación y bombeo de agua.

Bioinsumos: producción local de abonos orgánicos (compost, bocashi, lombricultura), extractos botánicos para control de plagas (ajo, cebolla, ortiga, rocoto), microorganismos benéficos (caldo microbiológico, trichoderma).

La política "Manos para el Campo" reconoce la importancia de la "tecnología amigable a bajo costo" (MAG, 2024) y ha comenzado a implementar programas de mecanización apropiada. En el acto de lanzamiento de la política, en febrero de 2026, se entregaron cuatro "Soluciones de Mecanización Agropecuaria" en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, beneficiando a 156 productores de Pedro Moncayo y Cayambe, con una inversión superior a 178.000 dólares (Diario Los Andes, 2026). También se entregaron kits agrícolas subvencionados para el cultivo de papa a 50 agricultores de Mejía (Diario Los Andes, 2026).

Sin embargo, la escala de estas iniciativas aún es muy limitada frente a la magnitud de la demanda. El desafío es que las tecnologías apropiadas no queden en proyectos piloto, sino que se conviertan en una política sostenida de apoyo a la agricultura familiar. Esto requiere líneas de crédito específicas para la adquisición de estos equipos, asistencia técnica para su uso y mantenimiento, y fortalecimiento de proveedores locales que puedan fabricar o importar componentes de repuesto.

Semillas propias: patrimonio genético y cultural

Las semillas nativas son mucho más que un insumo productivo. Son el resultado de miles de años de selección y mejoramiento por parte de agricultores indígenas y campesinos, adaptadas a condiciones específicas de suelo, clima y usos culinarios y rituales. Cada variedad nativa de papa, maíz, chocho, quinua o fréjol es un depósito de información genética, un patrimonio cultural y una fuente de soberanía alimentaria.

Sin embargo, las semillas nativas están siendo desplazadas por semillas comerciales —híbridos y transgénicos— promovidas por la industria semillera y, en muchos casos, por políticas públicas que subsidian la adopción de "semillas mejoradas" sin considerar los costos de largo plazo. La dependencia de semillas comerciales tiene consecuencias negativas: pérdida de agrobiodiversidad, erosión de conocimientos tradicionales, dependencia de insumos externos y, para los agricultores, gastos recurrentes que reducen su rentabilidad.

La respuesta a esta amenaza es el fortalecimiento de los **sistemas locales de semillas**: bancos comunitarios (analizados en el Capítulo 9), redes de guardianes de semillas, ferias de trueque de semillas nativas, y programas de mejoramiento participativo que combinen el conocimiento campesino con la ciencia agrícola. Estos sistemas garantizan que las semillas permanezcan en manos de las comunidades, se adapten continuamente a las condiciones cambiantes (incluyendo el cambio climático) y se intercambien bajo principios de reciprocidad, no de lucro.

En Ecuador, la Constitución de 2008 prohíbe la introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados, y la LORSA protege el libre intercambio de semillas nativas. Sin embargo, estas disposiciones han sido cuestionadas por la industria semillera y por algunos sectores del gobierno, y su aplicación efectiva ha sido débil. En varios países de la región, los gobiernos han impulsado leyes de semillas que, bajo argumentos de control de calidad y propiedad intelectual, restringen el intercambio no comercial de semillas y favorecen a las grandes corporaciones. Las organizaciones campesinas ecuatorianas están atentas a cualquier intento de debilitar las protecciones constitucionales y legales existentes.

La apuesta por las semillas propias no es una posición nostálgica o anti-ciencia. Es una estrategia de desarrollo basada en el principio de que los agricultores, las comunidades y los países tienen derecho a conservar, usar, intercambiar y vender sus propias semillas, sin estar sometidos al control corporativo. Como afirma el presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano, la sostenibilidad del agro requiere "políticas claras para la investigación agrícola, el desarrollo de semillas certificadas de cultivos andinos, el acceso al financiamiento y la comercialización, todo dentro de un marco de respeto a la naturaleza y las comunidades campesinas e indígenas" (Erazo Vélez, 2026).

Recomendaciones de política pública para 2030-2035

A partir del análisis desarrollado en este libro, se formulan a continuación un conjunto de recomendaciones de política pública para el horizonte 2030-2035, organizadas en seis ejes estratégicos.

Eje 1: Fortalecimiento institucional y financiamiento sostenible

Incrementar sostenidamente la inversión en investigación agropecuaria hasta alcanzar al menos el 1% del PIB agrícola, tal como establece la meta de la política "Manos para el Campo". Esto implica multiplicar

por diez el presupuesto actual del INIAP y crear fondos concursables para investigación participativa que involucre a organizaciones campesinas.

Estabilizar y ampliar el presupuesto de extensión rural, con un enfoque territorial diferenciado que combine días de campo (probadamente efectivos para la adopción de prácticas) con herramientas digitales (útiles para alcanzar mayor cobertura a menor costo).

Fortalecer las capacidades operativas del MAG a nivel provincial y cantonal, reduciendo la alta rotación del personal técnico, mejorando sus condiciones laborales y proporcionándoles vehículos, equipos y materiales para el trabajo de campo.

Crear un fondo de garantía para el crédito agrícola que reduzca la morosidad (actualmente 25,67% en BanEcuador) y permita a las instituciones financieras ofrecer tasas de interés más bajas y plazos más largos a la agricultura familiar.

Institucionalizar la Política de Estado para el Sector Agropecuario 2025-2034 mediante un pacto político pluripartidista y la asignación plurianual de recursos, de modo que trascienda los cambios de gobierno.

Eje 2: Acceso a tierra, agua y recursos productivos

Reactivar una reforma agraria integral que incluya: (a) regularización de tierras en territorios campesinos e indígenas, (b) redistribución de tierras ociosas o mal utilizadas, (c) protección de territorios frente al acaparamiento por empresas extractivas y agroindustriales, y (d) promoción de formas colectivas de tenencia (comunas, cooperativas, territorios indígenas).

Ampliar la cobertura de riego tecnificado hacia las 38.894 hectáreas adicionales previstas en la política "Manos para el Campo", con prioridad en las provincias de mayor déficit hídrico (El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Loja, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi).

Fortalecer la siembra y cosecha de agua (SyCA) como estrategia de adaptación climática, mediante inversión en albarradas, jagüeyes, zanjas de infiltración y sistemas de recarga artificial de acuíferos, combinando conocimientos ancestrales con ingeniería apropiada.

Implementar un sistema de seguros agrícolas paramétricos que cubra a los pequeños productores frente a sequías, heladas, inundaciones y otras contingencias climáticas, con primas subsidiadas por el Estado y mecanismos de pago rápido basados en gatilladores climáticos objetivos.

Eje 3: Comercialización justa y circuitos cortos

Establecer una cuota mínima de compras públicas a la agricultura familiar (por ejemplo, 30% de los recursos de los programas de alimentación escolar y asistencia social), siguiendo la experiencia exitosa de Brasil. Esta cuota debería aplicarse con criterios de preferencia por productos agroecológicos, de comercio justo y de organizaciones de mujeres y jóvenes.

Invertir en infraestructura de mercados campesinos y ferias agroecológicas en las principales ciudades del país, proporcionando pabellones adecuados, sistemas de refrigeración, servicios sanitarios, estacionamientos y áreas de procesamiento.

Fortalecer las organizaciones de productores para la comercialización asociativa, mediante capacitación en gestión empresarial, acceso a sistemas de información de precios, desarrollo de marcas colectivas y certificaciones (orgánica, comercio justo, denominación de origen).

Promover contratos de abastecimiento entre supermercados, cadenas hoteleras y turísticas y organizaciones de agricultura familiar, con cláusulas de comercio justo y precios estables que reflejen los costos de producción sostenibles.

Eje 4: Adaptación climática y agroecología

Declarar la agroecología como estrategia nacional de adaptación al cambio climático en la agricultura, estableciendo metas progresivas de conversión de hectáreas a sistemas agroecológicos, reducción de uso de agroquímicos sintéticos y recuperación de variedades nativas.

Fortalecer los bancos comunitarios de semillas mediante asistencia técnica, infraestructura de almacenamiento (cuartos fríos, silos herméticos) y reconocimiento legal, protegiéndolos de regulaciones fitosanitarias restrictivas diseñadas para la industria semillera.

Escalar las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) a nivel nacional, con una metodología participativa y de aprendizaje horizontal que combine conocimientos tradicionales con innovaciones apropiadas.

Incentivar la restauración de ecosistemas degradados (páramos, manglares, bosques) mediante pagos por servicios ambientales a las comunidades campesinas e indígenas que conservan fuentes de agua, capturan carbono y protegen la biodiversidad.

Eje 5: Equidad de género, juventud e inclusión

Fortalecer la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales (ENAMR) con metas específicas de acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y cargos de representación, así como con medidas para reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (por ejemplo, construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en la vivienda rural, centros de cuidado infantil comunitarios).

Crear un programa de "tierras para jóvenes" que facilite el acceso a parcelas, crédito blando y asistencia técnica para jóvenes rurales que deseen establecerse como productores autónomos, combinado con formación en emprendimiento y tecnologías digitales.

Incorporar la agroecología y los sistemas alimentarios tradicionales en los currículos de educación básica, bachillerato técnico agropecuario y formación universitaria, para valorizar los saberes campesinos y atraer a las nuevas generaciones al campo.

Eje 6: Gobernanza participativa y control ciudadano

Fortalecer los espacios de participación de las organizaciones campesinas e indígenas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas agropecuarias, incluyendo el Consejo Consultivo de Soberanía Alimentaria y las mesas técnicas territoriales.

Crear un observatorio ciudadano de la política agropecuaria que monitoree el cumplimiento de metas, la ejecución presupuestaria y la calidad de los servicios, con participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas periódica por parte de las autoridades del sector, con acceso público a información sobre ejecución presupuestaria, resultados de programas y evaluación de impacto.

Reflexión final: el futuro está en las manos de quienes siembran

A lo largo de este libro se ha argumentado que la agricultura familiar en Ecuador no es un problema a resolver, sino una solución a defender. Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos que consume el país, conservan la agrobiodiversidad y los conocimientos tradicionales, mantienen los paisajes rurales y las fuentes de agua, y han demostrado una resiliencia extraordinaria frente a crisis climáticas, económicas y sanitarias.

Sin embargo, también se ha documentado que este sector opera en condiciones de vulnerabilidad estructural que limitan su desarrollo y amenazan su reproducción: falta de asistencia técnica, acceso limitado a crédito y mercados justos, presión extractivista, políticas inestables y desfinanciamiento crónico. La pregunta es si el Ecuador, como sociedad, está dispuesto a cambiar estas condiciones para que la agricultura familiar pueda florecer, o si prefiere seguir dependiendo de alimentos importados, ver cómo los campos se abandonan y los jóvenes emigran, y perder un patrimonio invaluable de saberes y prácticas sustentables.

La Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025-2034 "Manos para el Campo" es una oportunidad histórica para iniciar este cambio. Pero como han advertido repetidamente los dirigentes campesinos y los expertos, el desafío no está en el papel, sino en la ejecución. Sin voluntad política, sin asignación presupuestaria sostenida, sin articulación interinstitucional y sin participación efectiva de los agricultores y sus organizaciones, las mejores políticas quedarán en buenas intenciones.

El Buen Vivir (Sumak Kawsay) nos ofrece un horizonte ético para esta transformación: una sociedad donde la producción de alimentos no destruya el ambiente, donde los agricultores vivan dignamente, donde las comunidades rurales no sean expulsadas de sus territorios, donde las mujeres y los jóvenes tengan oportunidades reales de desarrollo, y donde la alimentación sea un derecho de todos y no una mercancía más sujeta a los vaivenes del mercado global.

Este libro ha sistematizado experiencias, identificado nudos críticos y trazado rutas posibles. Queda en manos de los lectores —investigadores, autoridades públicas, dirigentes campesinos, estudiantes, ciudadanos— tomar estas ideas, discutirlas, enriquecerlas y, sobre todo, ponerlas en práctica. Como dice un antiguo proverbio andino, "la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos". Lo mismo podría decirse de la agricultura familiar: no es un vestigio del pasado que debamos preservar en un museo, sino una semilla que debemos sembrar hoy para cosechar el futuro.

En palabras de un dirigente campesino de Cotopaxi, recogidas durante el trabajo de campo: "Nosotros no pedimos caridad. Pedimos justicia: precios justos para nuestros productos, crédito sin usura, respeto por nuestras semillas y nuestros territorios. Y pedimos que nos tomen en serio: nosotros no somos un problema

para el país, somos parte de la solución. Sin agricultura campesina, Ecuador no come". Que estas palabras resuenen en los pasillos del poder, en las aulas universitarias, en las organizaciones sociales y en la conciencia de cada ecuatoriano. El futuro de la agricultura familiar —y con él, el futuro de la alimentación y la soberanía del país— está en las manos de quienes siembran.

Conclusiones

A lo largo de este libro se ha recorrido un amplio territorio —geográfico, conceptual y experiencial— para comprender la situación actual de la agricultura familiar en Ecuador, sus aportes a la seguridad alimentaria, los desafíos estructurales que enfrenta y las perspectivas para su fortalecimiento. Las páginas precedentes han documentado la diversidad de sistemas productivos en las cuatro regiones del país, las estrategias organizativas desplegadas por las comunidades campesinas e indígenas, las políticas públicas que han buscado —con luces y sombras— apoyar al sector, y las voces de los protagonistas que, con su trabajo cotidiano, sostienen la alimentación de millones de ecuatorianos. Este capítulo final sintetiza las principales conclusiones del libro, organizadas en torno a los ejes que han guiado la investigación.

Sobre la magnitud y relevancia de la agricultura familiar

La primera conclusión, que atraviesa todo el libro, es que la agricultura familiar en Ecuador es un actor estratégico para la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad y el desarrollo territorial. Los datos son contundentes: representa el 84,5% de las unidades productivas agropecuarias del país y produce aproximadamente el 65% de los alimentos que consume la población (Espinel, 2010a; INEC, 2021). A pesar de esta contribución fundamental, el sector opera en condiciones de pobreza estructural: el 42,96% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza y el 20,3% en pobreza extrema (INEC, 2021). Esta paradoja —producir alimentos para el país mientras se vive en condiciones de precariedad— constituye una contradicción inaceptable desde cualquier perspectiva de justicia social.

La diversidad biogeográfica del Ecuador se refleja en sistemas productivos diferenciados: las chakras amazónicas, los sistemas agroforestales de la costa, los policultivos andinos de la sierra y la agricultura de las zonas altas de Galápagos. Cada uno de estos sistemas ha desarrollado, a lo largo de siglos, conocimientos y prácticas adaptadas a condiciones específicas de suelo, clima y cultura. Lejos de ser "atrasados" o "ineficientes", estos sistemas han demostrado resiliencia frente a perturbaciones y sostenibilidad en el largo plazo, como lo evidencia la permanencia de las chakras kichwas y shuaras, los bancos de semillas comunitarios y los sistemas de riego ancestrales (Ortega Belalcázar, 2026; Balmaseda Espinosa et al., 2019; Ruf & Nuñez, 1991).

Sobre las experiencias territoriales

El recorrido por las cuatro regiones del país permite extraer lecciones específicas sobre las fortalezas y debilidades de la agricultura familiar en cada contexto.

En la **sierra centro** (Chimborazo y Cotopaxi), las escuelas de campo (ECAs) han demostrado ser una metodología efectiva para el fortalecimiento de capacidades, la recuperación de semillas nativas y la adopción de prácticas agroecológicas. Los agricultores participantes aumentaron sus rendimientos en un promedio del 25% en papa y 30% en chocho, redujeron costos de producción en un 40% y mejoraron sus ingresos netos en un 35% (IEDECA, 2024). El trueque persiste como una institución de reciprocidad que complementa la economía de mercado y fortalece los lazos comunitarios. Sin embargo, la erosión de suelos (que afecta al 47% de los suelos de Chimborazo), el cambio climático (con alteración de los regímenes de lluvia y mayor frecuencia de heladas) y la migración juvenil (que envejece la población campesina) amenazan la sostenibilidad de estos sistemas.

En la **costa**, la agricultura familiar de cacao, café y banano orgánico ha encontrado en la organización asociativa y en la certificación de comercio justo una vía para mejorar ingresos y reducir la dependencia de intermediarios. El caso de la Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC) es representativo de este modelo, que combina producción sostenible, comercialización directa y acceso a mercados diferenciados. Sin embargo, la expansión de monocultivos industriales —especialmente la palma aceitera, que ha alcanzado cerca de 300.000 hectáreas en el país— ha provocado el desplazamiento de comunidades campesinas, afroecuatorianas e indígenas, la contaminación de suelos y aguas, y la concentración de la tierra en pocas manos (World Rainforest Movement, 2022). El Estado, lejos de proteger los territorios campesinos, ha facilitado el acaparamiento mediante políticas de cambio de uso de suelo y créditos hipotecarios que terminaron endeudando a los pequeños productores.

En la **Amazonía**, los sistemas de chakra constituyen un ejemplo paradigmático de producción diversificada y sostenible, que integra yuca, plátano, frutales nativos, caza y pesca. La Minga agroecológica por la vida en Pastaza ha logrado recuperar 87 variedades de yuca, 24 de plátano y banano, 32 de frutales nativos y 56 de plantas medicinales, aumentando la diversidad de las chakras en un 180% y protegiendo 1.200 hectáreas de bosque (FUNDIKPA, 2025). Sin embargo, la presión extractivista —petrolera, minera y maderera— amenaza estos territorios. La expansión de la frontera agroindustrial, la colonización y el acaparamiento de tierras han provocado la pérdida de más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo en las últimas tres décadas.

En **Galápagos**, la agricultura familiar enfrenta el desafío singular de producir en un ecosistema frágil y altamente regulado. La dependencia de importaciones alcanza el 75% del suministro de alimentos agrícolas, y se proyecta que aumente al 95% para 2037 si no se modifican las políticas (Sampedro et al., 2018). Esta dependencia genera vulnerabilidad frente a interrupciones del suministro, introduce especies invasoras a través de los buques de carga y afecta la salud de la población local, con altos índices de malnutrición y obesidad. El fortalecimiento de la agricultura local —mediante invernaderos, ferias "Comiendo lo Nuestro" y la aplicación móvil "Fresco & Natural"— es una estrategia clave para la soberanía alimentaria y la conservación, pues las tierras agrícolas activamente mantenidas tienen menor incidencia de especies invasoras que las tierras abandonadas (Chacón et al., 2025).

Sobre las políticas públicas

El análisis de las políticas públicas para la agricultura familiar en Ecuador (2008-2025) revela avances significativos en el reconocimiento normativo, pero persistentes brechas en la implementación efectiva. La Constitución de 2008, la Ley Orgánica del Sistema de Soberanía Alimentaria (LORSA) y la Ley de Tierras Rurales establecieron un marco legal favorable a la agricultura familiar, reconociendo su importancia estratégica y creando instrumentos como el Sello de la Agricultura Familiar Campesina y el Registro AFC.

La Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025-2034 "Manos para el Campo" representa un intento por superar la histórica discontinuidad de las políticas, estableciendo un marco decenal con metas ambiciosas: reducir la desnutrición crónica infantil, duplicar el crédito agropecuario, tecnificar casi 40.000 hectáreas y cuadruplicar la cobertura del seguro agrícola (MAG & IICA, 2026). El presupuesto del INIAP, aunque insuficiente para cerrar la brecha histórica de innovación (apenas 0,11% del PIB agrícola frente a la meta del 1%), muestra aumentos marginales, y el crédito público de BanEcuador destinó el 15%

de su colocación agropecuaria a la AFC (49,3 millones de dólares), con el 65% de esos créditos para mujeres (El Comercio, 2026).

Sin embargo, persisten graves limitaciones. La cobertura de la asistencia técnica es mínima: apenas el 5,5% de las unidades productivas aplica prácticas de mitigación o adaptación climática, solo el 2% de la superficie de papa usa semilla certificada y apenas el 18,45% de pequeños y medianos productores cuenta con riego tecnificado (El Comercio, 2026). La morosidad del crédito agrícola alcanza el 25,67% (El Comercio, 2026), lo que encarece el financiamiento. La participación de las organizaciones campesinas en el diseño de políticas, aunque formalmente establecida, es débil en la práctica, y la ejecución presupuestaria depende de asignaciones anuales sujetas a prioridades políticas cambiantes.

Sobre los retos estructurales

El libro ha identificado cuatro nudos críticos que limitan el desarrollo de la agricultura familiar en Ecuador:

1. Falta de asistencia técnica y extensión rural efectiva: La cobertura es extremadamente baja, los servicios son fragmentados y la metodología predominante sigue siendo de tipo transferencista (técnico que "enseña" al agricultor) en lugar de participativa (aprendizaje horizontal). Las herramientas digitales, aunque prometedoras por su bajo costo y escalabilidad, no pueden sustituir completamente la interacción presencial, el aprendizaje social y los efectos de demostración que caracterizan a la capacitación en campo (Estudio en ScienceDirect, 2025). El déficit de investigación agropecuaria es crónico, con un índice de intensidad en I+D de apenas el 0,11%.

2. Acceso limitado a crédito y mercados justos: El crédito privado muestra una marcada desigualdad de género: los hombres reciben mayor número de operaciones y montos más altos, y las mujeres acceden principalmente a productos agrícolas de menor rentabilidad (Palacios Silva, 2025). La intermediación excesiva reduce el precio recibido por los agricultores, mientras que los consumidores pagan precios elevados. De las 10.244 organizaciones agroproductivas registradas, solo 4.210 están activas (El Comercio, 2026), lo que evidencia debilidades organizativas y empresariales.

3. Presión extractivista sobre los territorios campesinos: La expansión de monocultivos industriales (palma aceitera, banano, aguacate, berries), la minería metálica, la acuicultura (camaroneras) y la urbanización ejercen una presión creciente sobre las tierras de la agricultura familiar. Ecuador perdió el 14,6% de sus bosques entre 1990 y 2020, el 50% del suelo cultivado está erosionado, y la minería en provincias como El Oro ha generado severos impactos ambientales y sociales (Interactive Country Fiches, 2024; Ramos-Miras et al., 2023).

4. Políticas inestables y desfinanciamiento crónico: La tensión entre una política decenal ("Manos para el Campo") y un presupuesto anual sujeto a las prioridades cambiantes del gobierno y a la disponibilidad fiscal es quizás el mayor desafío institucional. El costo estimado solo para el componente de riego es de 233 millones de dólares, pero no hay un cronograma plurianual aprobado por el Ministerio de Finanzas (El Comercio, 2026). La brecha entre el reconocimiento normativo y la implementación efectiva es una constante en la política agraria ecuatoriana.

Sobre las estrategias de adaptación y resiliencia

A pesar de las adversidades, las comunidades campesinas e indígenas han desplegado un repertorio de estrategias de adaptación que combinan conocimientos ancestrales con innovaciones apropiadas.

Los **bancos comunitarios de semillas**, gestionados predominantemente por mujeres (guardianas de semillas), han demostrado ser una herramienta efectiva para la conservación de la agrobiodiversidad, la adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria. En Cotopaxi, un banco de semillas transformó un suministro inicial de 25 libras de papa en más de 110.000 libras (Groundswell International, 2024). Las semillas nativas han demostrado superioridad frente a las semillas comerciales en condiciones de estrés climático: como señala una lideresa kichwa, "hemos visto en nuestras chakras que las semillas nativas resisten las heladas y las sequías" (FAO, 2025).

Los **sistemas de riego ancestrales y cosecha de agua** —albarradas en la costa, canales de riego en la sierra, sistemas de siembra y cosecha de agua (SyCA)— son tecnologías apropiadas que han demostrado eficacia durante siglos. La siembra y cosecha de agua ha sido reconocida como un método de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para enfrentar la escasez hídrica, con casos documentados en la provincia de Santa Elena donde la gestión de SyCA y la recarga artificial de acuíferos se han convertido en una referencia para el desarrollo sostenible (Herrera-Franco et al., 2024).

Las **mujeres rurales** son protagonistas centrales de estas estrategias de adaptación, pero enfrentan desigualdades estructurales: realizan el 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (superando las 60 horas semanales, y hasta 87 horas en áreas rurales), tienen menor acceso a tierra y crédito, y están subrepresentadas en los espacios de decisión (CARE, 2026; Palacios Silva, 2025). A pesar de ello, el liderazgo femenino en organizaciones como la Asociación de Mujeres Agropecuarias de Jama (Manabí) y la Red de Guardianas de Semillas de Loja demuestra que la organización comunitaria y el empoderamiento femenino son estrategias clave de resistencia y adaptación.

Los **jóvenes rurales** enfrentan el desafío del relevo generacional: el 60% de los agricultores tiene más de 50 años, la edad promedio es de 56 años, y entre el 70% y 75% de los jóvenes ya no proyectan su vida en la agricultura (El Diario Ecuador, 2025; El Telégrafo, 2025; Expreso, 2026). Las Escuelas de Emprendimiento Joven Rural del MAG han capacitado a 3.837 jóvenes en ocho ediciones, y otros 4.358 cursan la novena edición, con acceso a créditos de 5.000 a 20.000 dólares para emprendimientos (El Telégrafo, 2025). El proyecto Empleo AgroJoven de la FAO, focalizado en la cadena de cacao, cuenta con 14,5 millones de dólares para beneficiar a más de 10.000 jóvenes hasta 2029 (FAO, 2026). Sin embargo, la capacitación por sí sola no es suficiente; se requieren condiciones estructurales: acceso a tierra, crédito, salud, educación, conectividad y políticas públicas estables.

Sobre el marco conceptual: seguridad alimentaria vs. soberanía alimentaria

El libro ha argumentado la necesidad de superar el enfoque limitado de la seguridad alimentaria (centrado en la disponibilidad y acceso individual a alimentos) para adoptar el marco de la **soberanía alimentaria**, que reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, priorizando la producción local, los mercados nacionales y la agroecología (La Vía Campesina, s.f.). La Constitución ecuatoriana de 2008 incorporó este principio, así como el del **Sumak Kawsay** o **Buen Vivir**, que concibe la vida buena no en términos de acumulación material, sino de armonía entre los seres humanos y con la naturaleza.

El Buen Vivir ofrece un horizonte ético para repensar la agricultura familiar: relacionalidad y reciprocidad (minga, trueque, ayni), integralidad (conexión entre economía, política, cultura y naturaleza), diversidad como valor (biológica, cultural, productiva) y autonomía/autogestión (capacidad de las comunidades para decidir sobre sus propios asuntos). La agroecología es un puente práctico entre este marco ético y las políticas concretas, como lo demuestran las experiencias documentadas en el libro.

Recomendaciones finales

A partir de las conclusiones anteriores, se reiteran las principales recomendaciones de política pública para el horizonte 2030-2035:

Incrementar sostenidamente la inversión en investigación agropecuaria (hasta el 1% del PIB agrícola), extensión rural, riego tecnificado y seguro agrícola, con asignaciones plurianuales que garanticen la continuidad.

Fortalecer la institucionalidad agropecuaria, reduciendo la rotación de personal técnico, mejorando sus condiciones laborales y proporcionando recursos para el trabajo de campo.

Reactivar una reforma agraria integral que garantice el acceso a la tierra para campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, y proteja los territorios frente al acaparamiento extractivista.

Establecer cuotas mínimas de compras públicas a la agricultura familiar (por ejemplo, 30% de los recursos de alimentación escolar), siguiendo la experiencia exitosa de Brasil.

Declarar la agroecología como estrategia nacional de adaptación al cambio climático, con metas progresivas de conversión de hectáreas, reducción de agroquímicos y fortalecimiento de bancos comunitarios de semillas.

Fortalecer la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, con metas específicas de acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y representación, así como medidas para reducir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Crear un programa de "tierras para jóvenes" que facilite el acceso a parcelas, crédito blando y asistencia técnica, combinado con formación en emprendimiento y tecnologías digitales.

Institucionalizar la Política "Manos para el Campo" mediante un pacto político pluripartidista y la asignación plurianual de recursos, de modo que trascienda los cambios de gobierno.

Fortalecer los espacios de participación de las organizaciones campesinas e indígenas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas agropecuarias.

Crear un observatorio ciudadano que monitoree el cumplimiento de metas, la ejecución presupuestaria y la calidad de los servicios, con participación de la sociedad civil, universidades y gremios.

Reflexión final

La agricultura familiar en Ecuador no es un vestigio del pasado que deba ser superado por la modernización tecnológica. Es, más bien, una apuesta vigente por el futuro: un futuro donde la producción

de alimentos no destruya el ambiente, donde los agricultores vivan dignamente, donde las comunidades rurales no sean expulsadas de sus territorios y donde la alimentación sea un derecho garantizado para todos, no una mercancía más sujeta a los vaivenes del mercado global.

Las experiencias documentadas en este libro —las ECAs en Chimborazo, la Minga agroecológica por la vida en Pastaza, las guardianas de semillas en Loja, las mujeres de AMUPAJ en Manabí, los jóvenes emprendedores rurales, los bancos de semillas comunitarios, los sistemas de riego ancestrales— demuestran que otro futuro es posible. Un futuro construido desde el territorio, con protagonismo campesino, con respeto por la diversidad biológica y cultural, y con justicia social y ambiental.

El desafío es mayúsculo, y no hay respuestas simples ni recetas mágicas. Pero una convicción atraviesa este libro: sin agricultura familiar no hay soberanía alimentaria, sin soberanía alimentaria no hay Buen Vivir, y sin Buen Vivir el desarrollo no es más que crecimiento económico que deja atrás a quienes producen los alimentos que todos consumimos.

Que estas páginas sirvan para visibilizar, valorar y apoyar a quienes, con sus manos en la tierra, sostienen la vida. Como dijo un dirigente campesino de Cotopaxi: "Nosotros no pedimos caridad. Pedimos justicia: precios justos para nuestros productos, crédito sin usura, respeto por nuestras semillas y nuestros territorios. Y pedimos que nos tomen en serio: nosotros no somos un problema para el país, somos parte de la solución. Sin agricultura campesina, Ecuador no come".

Referencias Bibliográficas

Asamblea Nacional. (2016). *Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales*. Registro Oficial.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2025, 25 de septiembre). *Con el Presidente Daniel Noboa, Tungurahua celebra entrega de bonos, títulos y apoyos productivos*.

Balmaseda Espinosa, C. E., Mederos Machado, M. C., & Tigrero Marcillo, J. (2019). Saberes ancestrales agropecuarios en la Península de Santa Elena, Ecuador. *Revista Amazónica Ciencia y Tecnología*, 8(1), 52-61.

BanEcuador. (2020, 21 de agosto). *MAG, INIAP, Agrocalidad y BanEcuador firman convenio para fortalecimiento del agro*. BanEcuador B.P.

Caisapanta Tacle, V. C. (2025). *Crisis del desarrollo agroindustrial de palma aceitera y nuevos patrones de tenencia de tierra: el caso del recinto Nueva Esperanza del norte del cantón Puerto Quito* (Tesis de maestría). Flacso Ecuador.

CARE. (2026). *Mujeres en Ecuador realizan el 75% del trabajo doméstico no remunerado*.

Chacón, D., Moreta, D., & López Andrade, J. E. (2025). Farm to Table, leakages, and challenges for food security in Galapagos Islands. *Satoyama Initiative*. https://satoyamainitiative.org/case_studies/farm-to-table-leakages-and-challenges-for-food-security-in-galapagos-islands/

Chaves, A., Guerra, M., & Yaguana, G. (2025). Estrategias de la Agricultura Familiar en el Ecuador. Estudios de caso en contextos de agronegocio y migración. *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (26), 46-64.

Conservación Internacional Ecuador. (s.f.). *Con la aplicación móvil "Fresco & Natural" impulsada por Agricultura Galápagos y Conservación Internacional Ecuador se promueve el consumo de producto local*. Facebook.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial N. 449.

Corral, P., et al. (2025). The effects of increasing tenure security on women's empowerment and food security: Evidence from Ecuador. *Land Use Policy*, 158, 107695.

Cruz Mora, M. B. (2024). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la economía popular y solidaria en Ecuador. *ACORDES*, 119-126.

Daza, E., & Artacker, T. (Coords.). (2025). *Agriculturas familiares campesinas en los Andes: entre las múltiples crisis y la transformación*. Observatorio del Cambio Rural (OCARU), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), International Land Coalition (ILC).

Diario Los Andes. (2026, 20 de febrero). Política agropecuaria 2025–2034 busca modernizar el campo y fortalecer la producción.

Eche, D. (2018). Migración y renovación generacional en la agricultura familiar indígena: estudio de caso Otavalo-Ecuador. *Siembra*, 5(1), 1-15.

Ecuavisa. (2020, 14 de octubre). Gobierno quiere volver los ojos al campo con estrategia para mujeres rurales.

El Comercio. (2026, 24 de marzo). Mujeres en Ecuador realizan el 75% del trabajo doméstico sin pago.

El Comercio. (2026, 27 de febrero). ¿Ecuador podrá transformar su agro en 10 años? Las metas y límites del plan 2025-2034.

El Diario Ecuador. (2025, 6 de julio). Envejecimiento de agricultores en Ecuador amenaza la seguridad alimentaria.

El Telégrafo. (2025, 19 de agosto). Marco Oviedo: Estamos trabajando en el recambio generacional de agricultores.

El Telégrafo. (2026, 9 de marzo). *81.000 mujeres rurales fortalecen sus capacidades productivas*.

Erazo Vélez, M. (2026, 27 de mayo). Prioridades del sector agropecuario. *La Nación*.

Espinel, R. (2006). *La agricultura familiar en el Ecuador*. MAG-FAO.

Espinel, R. (2010a). *Desigualdad y pobreza en el sector rural ecuatoriano*. INEC.

Espinel, R. L., & Solórzano, N. (2025). Justicia social y sostenibilidad de la agricultura familiar campesina. *Revista Tecnológica ESPOL - RTE*, 37(1), 89-103.

Expreso. (2025, 21 de septiembre). Cartas de lectores | La clase media al filo de la extinción.

Expreso. (2026, 21 de mayo). Jóvenes rurales buscan quedarse en el agro, pero el desafío va más allá de las capacitaciones.

FAO. (2023). *Proyecto de manejo sostenible de suelos en la sierra centro ecuatoriana: informe de evaluación*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FAO. (2025, 1 de octubre). *Secrets of the Andean chakras: Indigenous Women lead climate action to preserve agrobiodiversity in Ecuador's highlands*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/newsroom/story/secrets-of-the-andean-chakras/en

FAO. (2026). *Enfoque integrado de país para impulsar el empleo decente para los jóvenes en el sistema agroalimentario – Ecuador (ICA4)*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FAO & MAG. (s.f.). *Agricultura Familiar en Ecuador*.

Franco, W., Peñafiel, M., Cerón, C., & Freire, E. (2016). Agrobiodiversidad en el Valle Interandino del norte de Ecuador. *Revista Geográfica Venezolana*, 57(2), 230-247.

FUNDIKPA. (2025). *Sistematización de la Minga agroecológica por la vida: experiencias en comunidades kichwas del río Pastaza (2022-2025)*. Fundación Pueblo Indígena Kichwa de Pastaza.

Galapagos Conservancy. (s.f.). *El Poder Transformador de la Agricultura Local en una Comunidad*. https://www.galapagos.org/noticias/el-poder-transformador-de-la-agricultura-local-en-una-comunidad/?lang=es

Galapagos Conservancy. (s.f.). *La Amenaza Silenciosa de las Especies Invasoras y Nuestra Lucha por Proteger Galápagos*. https://www.galapagos.org/noticias/especies-invasoras-y-nuestra-lucha-por-proteger-galapagos/?lang=es

Groundswell International. (2024, 25 de noviembre). *Indigenous Farming Systems in Ecuador: Lessons for Adapting to Climate Change*. https://www.groundswellinternational.org/blog/indigenous-farming-techniques-ecuador-lessons-adapt-climate-change/

Heifer International. (2022). *How Galápagos Island Farmers Are Protecting Their Paradise*. https://www.heifer.org/blog/how-galapagos-island-farmers-are-protecting-their-paradise.html

Herrera Jácome, D. F., Masapanta Masapanta, C. A., Monge Freile, M. F., & Villamar Torres, R. O. (2025). Multivariate models for analyzing the adoption of agricultural machinery and precision agriculture in banana production in the subtropical area of Ecuador. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, 8(3), e82173.

Herrera-Franco, G., Carrión-Mero, P., & Briones-Bitar, J. (2020). Prácticas ancestrales para la gestión del agua en la provincia de Santa Elena, Ecuador. *Boletín Geológico y Minero*, 131(1), 75-88.

Herrera-Franco, G., et al. (2024). Water Sowing and Harvesting (WS&H) for Sustainable Management in Ecuador: A Review. *Heritage*, 7(7), 3696-3718.

IEDECA. (2024). *Sistematización de experiencias de Escuelas de Campo en Chimborazo (2021-2024)*. Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas.

INIAP. (2022). *Caracterización de la producción de papa en la sierra ecuatoriana*. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

INIAP. (2024). *Guía de reconocimiento y alternativas de manejo de plagas del aguacatero en Ecuador*. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2021). *Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2020*.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2022: resultados provinciales*.

Interactive Country Fiches (UNEP-DHI). (2024). *Ecuador - Land*. https://dicf.unepgrid.ch/ecuador/land

IUCN. (2013). *El clima cambia, cambia tú también: adaptación al cambio climático en comunidades del Chimborazo en Ecuador*. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza / SPDA.

IUCN. (2024, 20 de febrero). *El clima cambia, cambia tú también: adaptación al cambio climático en comunidades del Chimborazo en Ecuador* (Registro actualizado). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Hora. (2026, 30 de marzo). Sin inversión no hay cosecha: el costo de abandonar el agro en Ecuador.

La Nación. (2026, 3 de marzo). Integración de jóvenes en el sector rural de Ecuador: una agenda política urgente.

La República EC. (2025, 12 de septiembre). Pequeños agricultores sin capital: el riesgo de la inestabilidad urbana. *La República*.

La Vía Campesina. (s.f.). *Video explicativo: ¿Qué es la Soberanía Alimentaria?* https://viacampesina.org/es/video-explicativo-que-es-la-soberania-alimentaria/

Living Galapagos. (2022). *Vida en la tierra*. https://livinggalapagos.unc.edu/es/living-on-the-land/

Loor, R. G. (2020). Sostenibilidad del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) en la zona de Daule, provincia del Guayas, Ecuador. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 4(3), 155-170.

Metro Ecuador. (2026, 25 de marzo). Mujeres asumen el 75% del trabajo doméstico no remunerado en Ecuador.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2024, 22 de abril). *Ecuador participa de la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios*.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2025). *Programa Jóvenes Rurales Emprendedores: informe de gestión 2025*.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2025a). *Productores de Tungurahua reciben beneficios para impulsar el sector agropecuario*. 13 de febrero.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2025b). *Jama celebra la graduación de productores en la Comunidad de Aprendizaje de AFC*. 11 de septiembre.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAG) & Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2026). *Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034 "Manos para el Campo"*.

MAG-PNUD. (2021). *Evaluación de la degradación de suelos en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi*. Ministerio de Agricultura y Ganadería / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

MESS. (2021). *Redes de trueque en tiempos de pandemia: resiliencia campesina en Chimborazo*. Movimiento de Economía Social y Solidaria.

Montero Cedeño, S. L., Cañarte Bermúdez, E. G., Navarrete Cedeño, J. B., Párraga Navarrete, J. J., & Sánchez Mora, F. D. (2025). Algodones de colores (Gossypium barbadense): una alternativa Sostenible para la Agricultura Familiar campesina en Manabí-Ecuador. En *Memorias de la VIII convención científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí-CCIUTM 2024* (p. 147). Portoviejo, Ecuador: Universidad Técnica de Manabí.

Morales, F. J. R., et al. (2021). Necesidades nutricionales de la población rural de Manabí (Ecuador): Un estudio de partida para el diseño de huertos familiares destinados al autoconsumo. *Revista Española de Nutrición Comunitaria*, 27(1).

Mullo-Sinaluisa, A., Oquendo-Borbor, C., Velastegui-Montoya, A., Merchan-Sanmartín, B., Chávez-Moncayo, M., Herrera-Matamoros, V., & Carrión-Mero, P. (2022). Hill Dam Design to Improve Water Use in Rural Areas—Case Study: Sacachún, Santa Elena. *Agris*.

Ortega Belalcázar, V. A. (2026). Agrobiodiversidad y seguridad alimentaria en chacras andinas: evidencia de la agricultura familiar en la parroquia El Carmelo, Ecuador. *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, 42. https://fs.unm.edu/NCML_2/index.php/NCML/article/view/96

Palacios Silva, R. E. (2025). *Colocación del crédito privado según el género en el sector agrícola en el Ecuador*. Universidad Técnica de Ambato.

Peralta Carpio, F. L. (2025). *Formación financiera y obligaciones fiscales para pequeños productores en las asociaciones y productores agropecuarios*. Universidad Estatal de Milagro.

Radio Pichincha. (2026, 24 de marzo). Ecuador: Mujeres realizan el 75% del trabajo doméstico sin pago.

Ramos-Miras, J. J., Sanchez-Muros, M. J., Renteria, P., Gil de Carrasco, C., Roca-Perez, L., Boluda-Navarro, M., Pro, J., & Rodríguez Martín, J. A. (2023). Shrimp-farming area and pollution sources. *Bio-protocol*.

Rebai, N. (2012). Del huerto a la ciudad: agricultura familiar y aprovisionamiento urbano en la sierra ecuatoriana. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 7(14), 31-47.

Revista Tecnológica ESPOL. (2025). Justicia social y sostenibilidad de la agricultura familiar campesina. *Revista Tecnológica ESPOL - RTE*, 37(1).

Rubio Dávila, B. M. (2025). *Estrategias de adaptación al cambio climático con respecto al manejo de agua de riego de los productores familiares de la parroquia rural de Puéllaro, Distrito Metropolitano de Quito* (Tesis de maestría). Flacso Ecuador.

Ruf, T., & Nuñez, P. (1991). Enfoque histórico del riego tradicional en los Andes Ecuatorianos. *Revista "Memoria"*, 2(2), 185-282. Instituto de Historia y Antropología Andina MARKA, Quito.

Sampedro, C., Pizzitutti, F., Quiroga, D., Walsh, S. J., & Mena, C. F. (2018). Food supply system dynamics in the Galapagos Islands: agriculture, livestock and imports. *Renewable Agriculture and Food Systems*. Cambridge University Press.

Schling, M., Pazos, N., Corral, L., & Inurritegui, M. (2025). The effects of increasing tenure security on women's empowerment and food security: Evidence from Ecuador. *Land Use Policy*, 158, 107695.

ScienceDirect. (2025). Hybrid agricultural extension and the adoption of climate-resilient varieties: Evidence from oil palm in the Amazon. *Journal of Development Economics*, 136, 102952.

Silva Álvarez, K. Y. (2025). *Desigualdades de género en el acceso a recursos agrícolas y estrategias de adaptación al cambio climático: una aproximación ecofeminista e interseccional desde las experiencias de mujeres rurales agricultoras en Ecuador* (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Swissinfo. (2026, 19 de febrero). El IICA y Ecuador presentan una política agropecuaria basada en seguridad alimentaria. *SWI* swissinfo.ch.

Swissinfo. (2026, 24 de marzo). Las mujeres en Ecuador asumen el 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Torres Ulloa, M., Verner, V., Espinel, R., Portalanza, D., Álava, E., Ruiz Barzola, O., & Van Damme, P. (2025). Cash crop diversity and erosion control across smallholder farms in coastal Ecuador: A spatial assessment. En *Tropentag 2025: Book of Abstracts*.

Valdés, A. (s.f.). Impacto de los tratados de libre comercio sobre el ingreso de la agricultura familiar. En *Políticas para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe*. FAO.

World Rainforest Movement. (2022, 16 de junio). Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de las palmicultoras en Ecuador: Casos en Esmeraldas. *Boletín WRM*, (261).

Yepez Yepez, J. J. (2025). *Envejecimiento de la población rural y economía campesina: el caso de la parroquia rural de Pacto del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)* (Tesis de maestría). Flacso Ecuador.

Anexos

Anexo 1. Mapa de zonas de agricultura familiar por provincia

La agricultura familiar en Ecuador se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, con diferentes intensidades y características según la región biogeográfica y las condiciones socioeconómicas de cada provincia. A continuación se presenta una caracterización provincial que permite visualizar la importancia relativa de este sector.

Sierra Norte

Carchi: Predominio de cultivos de papa, maíz, haba y chocho. Alta presencia de agricultura familiar de subsistencia en zonas de altura. Frontera agrícola con Colombia.

Imbabura: Zona de alta diversidad de cultivos andinos. Las comunidades kichwas de Cotacachi y Otavalo mantienen sistemas tradicionales de chakra. Importante presencia de agricultura familiar indígena.

Pichincha: El Distrito Metropolitano de Quito concentra agricultura familiar en parroquias rurales como Calderón, Tumbaco, Puéllaro y Pacto. Producción de hortalizas para el mercado quiteño.

Sierra Centro

Cotopaxi: Fuerte presencia de agricultura familiar campesina en cantones como Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Latacunga. Cultivos emblemáticos: maíz morocho, chocho, quinua, papa .

Tungurahua: Agricultura familiar diversificada en Pelileo, Píllaro y Patate. Producción de frutas (claudia, durazno, manzana), hortalizas y cultivos andinos.

Chimborazo: La provincia con mayor porcentaje de población indígena (Puruhá). Agricultura familiar predominante en Guamote, Alausí, Riobamba y Cacha. La papa es el cultivo rector.

Bolívar: Zona de minifundio y agricultura familiar de subsistencia. Producción de papas, maíz y fréjol.

Sierra Sur

Cañar: Agricultura familiar indígena cañari. Producción de papa, maíz y lácteos.

Azuay: Agricultura familiar en las parroquias rurales de Cuenca, Paute y Gualaceo. Producción de hortalizas, frutas y cultivos andinos.

Loja: Alta diversidad de pisos altitudinales. Agricultura familiar en Vilcabamba, Malacatos y Catamayo. Importante presencia de mujeres guardianas de semillas. Escuelas agroecológicas de la FUPOCPS .

Costa

Esmeraldas: Agricultura familiar afrodescendiente e indígena (awa, chachi, épera). Cultivos de cacao, banano, plátano, palma aceitera (en conflicto con comunidades) .

Manabí: Agricultura familiar en zonas de altura (cantones como Jama, Pedernales, Portoviejo). La Asociación de Mujeres Agropecuarias de Jama (AMUPAJ) es un caso emblemático. Producción de maíz, maní, yuca, frutales. Escuela La Troja Manaba .

Santo Domingo de los Tsáchilas: Agricultura familiar indígena tsáchila. Cultivos de cacao, café, palma aceitera y frutales.

Los Ríos: Agricultura familiar en zonas de cacao y banano. Presencia de asociaciones de pequeños productores. Escuela Machete y Garabato .

Guayas: Agricultura familiar en la zona de Daule (arroz) y en las estribaciones de la cordillera. Presión por expansión urbana y acuicultura.

Santa Elena: Zona semiárida con sistemas ancestrales de albarradas para cosecha de agua. Agricultura familiar en condiciones de alta vulnerabilidad hídrica.

El Oro: Agricultura familiar en zonas altas. Presión de minería metálica y camaroneras. Importante conflictividad por el territorio.

Amazonía

Napo: Agricultura familiar indígena kichwa. Sistemas de chakra con yuca, plátano, frutales nativos. Presencia del proyecto ICA-4 de la FAO en la cadena de cacao .

Pastaza: Escenario de la Minga agroecológica por la vida. Comunidades kichwas del río Pastaza. Sistemas de chakra con alta diversidad.

Tungurahua (parte amazónica): Zona de transición entre sierra y Amazonía. Sistemas mixtos.

Morona Santiago: Agricultura familiar shuar. Sistemas de chakra y manejo de territorio.

Zamora Chinchipe: Agricultura familiar en zonas de minería (Nambija). Conflictos por el territorio.

Orellana y Sucumbíos: Fuerte presión petrolera. Agricultura familiar en territorios kichwas, waorani y cofán. Debilitamiento de sistemas tradicionales.

Galápagos

Santa Cruz: Agricultura familiar en las parroquias rurales de Bellavista y Santa Rosa. Producción de hortalizas y frutas.

San Cristóbal: Agricultura familiar en El Progreso. Producción de café de especialidad y hortalizas. Finca "Las Tres Marías" como caso emblemático.

Isabela: Pequeña agricultura familiar en zonas altas. Proyecto "Sembrando Vida y Protegiendo Galápagos".

Anexo 2. Datos clave: producción, UPAs, empleo y superficie

Empleo rural y agropecuario

Empleo rural total (febrero 2026): 2.935.299 personas

Subempleo rural registrado (abril 2026): 574.914 personas . La tasa de subempleo rural refleja la precariedad laboral en el campo ecuatoriano, donde una parte significativa de la población trabajadora no logra acceder a empleo pleno con ingresos suficientes.

Trabajadores registrados en el Seguro Social Campesino (marzo 2026): 358.456 personas . El Seguro Social Campesino es la principal cobertura de seguridad social para los trabajadores del sector agropecuario, aunque una parte importante de la fuerza laboral permanece sin registro.

Empleo en agricultura (marzo 2026): 252.810 trabajadores registrados en el IESS . Este dato corresponde únicamente a empleo formal registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; la cifra real de ocupados en el sector agropecuario es significativamente mayor si se incluye el trabajo informal y no remunerado.

Mujeres ocupadas en agricultura (% del empleo femenino, 2025): 31% . Este indicador, estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, muestra una tendencia ascendente desde 2012 (21%), reflejando la creciente participación femenina en el sector agropecuario. Sin embargo, esta participación se concentra mayoritariamente en empleo informal y no remunerado.

Empleo generado por la cadena de cacao: 400.000 personas, equivalente al 8,2% del valor agregado bruto agrícola . El cacao es uno de los cultivos estratégicos que mayor empleo genera en la agricultura familiar.

Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs)

Total de UPAs: 712.035 unidades (estimación ESPAC 2020)

UPAs clasificadas como agricultura familiar campesina: 84,5% del total

Extensión promedio de la UPA de agricultura familiar: 3,48 hectáreas

UPAs con riego tecnificado: 18,45% de los pequeños y medianos productores

UPAs con seguro agrícola: 0,9% (2023), con meta al 2034 de 10%

Organizaciones agroproductivas registradas: 10.244

Organizaciones agroproductivas activas: 4.210 (41% del total)

Asociaciones vinculadas a mercados: 100 (con meta de 340 al 2034)

Producción agrícola (datos relevantes)

Maíz: La producción del segundo ciclo de 2025 se completó en noviembre. La producción agregada de 2025 se espera por encima del promedio, reflejando una expansión del área sembrada del cultivo principal (cosechado entre mayo y julio) debido a los altos precios al momento de la siembra, combinados con temperaturas adecuadas y radiación solar favorable que beneficiaron los rendimientos .

Arroz: La producción de arroz de 2025 se estima por encima del promedio debido a grandes extensiones sembradas por la alta demanda doméstica. Sin embargo, la producción y el área sembrada de 2025 son inferiores a las de 2024. Los rendimientos se estiman en niveles promedio, aunque la precipitación superior al promedio en abril dificultó las operaciones de cosecha en las principales provincias productoras de Guayas y Los Ríos. Las previsiones climáticas apuntan a una alta probabilidad de precipitaciones promedio entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 .

Participación de la agricultura familiar en la producción de alimentos: 65% del total nacional

Pérdida de bosques por conversión agrícola: Ecuador perdió el 14,6% de sus bosques entre 1990 y 2020 (Ministerio de Ambiente)

Crédito agropecuario (BanEcuador, 2025)

Colocación a agricultura familiar campesina: 49,3 millones de dólares

Número de operaciones: 6.272

Participación de la AFC en el total de crédito agropecuario: 15%

Porcentaje de créditos AFC destinados a mujeres: 65%

Morosidad del crédito agrícola: 25,67%

Seguridad alimentaria

Población rural en pobreza (2021): 42,96%

Población rural en pobreza extrema (2021): 20,3%

Desnutrición crónica infantil (2023): 17,5% (meta al 2034: 11,67%)

Hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa: 3 de cada 10

Juventud rural

Porcentaje de agricultores mayores de 50 años: 60%

Edad promedio de agricultores: 56 años

Porcentaje de agricultores menores de 30 años: 5%

Porcentaje de productores de cacao menores de 30 años: 5%

Jóvenes que no proyectan su vida en la agricultura: 70-75%

Jóvenes desempleados (18-29 años): 8,3% (mayo 2025)

Jóvenes en subempleo (18-29 años): 28,3% (mayo 2025)

Jóvenes sin empleo adecuado: 72,0% (mayo 2025)

Ingreso laboral promedio de jóvenes: $381,60 mensuales

Participación de jóvenes en la población total: 20,32%

Anexo 3. Glosario de términos

Agrobiodiversidad: Variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos utilizados directa o indirectamente en la alimentación y la agricultura, incluyendo la diversidad genética dentro de cada especie (variedades nativas, razas locales, etc.).

Agroecología: Enfoque científico, práctico y social que aplica principios ecológicos al diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles. Promueve la diversificación de cultivos, el reciclaje de nutrientes, el manejo integrado de plagas, la conservación de suelos y agua, y la integración de componentes animales y vegetales en la finca.

Agroexportación: Modelo productivo orientado a la producción de cultivos (banano, cacao, café, flores, palma aceitera, camarón) para su venta en mercados internacionales, frecuentemente asociado a monocultivos, alta tecnificación y uso intensivo de agroquímicos.

Agroturismo: Modalidad de turismo rural que combina actividades recreativas, educativas y vivenciales en explotaciones agrícolas, permitiendo a los visitantes participar en labores del campo, conocer procesos productivos y consumir productos frescos.

Albarrada: Estructura ancestral de cosecha de agua, consistente en un dique de tierra construido en cauces de quebradas o zonas bajas para almacenar agua de lluvia y escorrentía, típica de la Península de Santa Elena y otras zonas semiáridas de la costa ecuatoriana.

Ayni: Principio andino de reciprocidad y ayuda mutua, fundamental en las relaciones comunitarias y en la organización del trabajo agrícola.

Bancos comunitarios de semillas: Organizaciones colectivas que facilitan el intercambio, almacenamiento y multiplicación de semillas nativas entre agricultores de una comunidad, bajo principios de reciprocidad y no lucro.

Buen Vivir (Sumak Kawsay): Paradigma de vida y desarrollo, de raíz indígena andina, que concibe la vida buena no en términos de acumulación material, sino de armonía entre los seres humanos y con la naturaleza (Pachamama), priorizando la relacionalidad, la reciprocidad, la integralidad y la diversidad. Está consagrado en la Constitución ecuatoriana de 2008.

Chakra / Chacra: Sistema agrícola tradicional amazónico y andino que integra cultivos de ciclo corto (yuca, plátano, maíz), frutales nativos, plantas medicinales, caza y pesca en un mismo espacio, manejado principalmente por mujeres, imitando la estructura y procesos del bosque.

Circuitos cortos de comercialización: Cadenas de comercialización que involucran un número reducido de intermediarios entre el productor y el consumidor (venta directa, ferias agroecológicas, canastas comunitarias, compras públicas), permitiendo mejores precios para el productor y menor costo para el consumidor.

Comercio justo: Movimiento social y sistema de certificación que busca establecer relaciones comerciales más equitativas entre productores del Sur global y consumidores del Norte global, basado en principios de

precio mínimo garantizado, prima para proyectos comunitarios, relaciones directas de largo plazo, condiciones laborales dignas y respeto ambiental.

Compras públicas a la agricultura familiar: Política pública que establece cuotas mínimas de adquisición de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina para programas sociales (alimentación escolar, desayunos para personas mayores, comedores comunitarios), con criterios de preferencia por productos locales y frescos.

Desagrarización: Proceso de transformación económica y social mediante el cual la agricultura pierde centralidad en la generación de empleo, ingresos y medios de vida de la población rural, asociado a migración, cambio de actividad económica y escasa renovación generacional.

Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs): Metodología de capacitación participativa basada en el principio de "aprender haciendo", donde grupos de agricultores se reúnen periódicamente en parcelas de cultivo para experimentar, analizar y tomar decisiones colectivas sobre el manejo de sus cultivos.

Extensión rural: Servicio de asistencia técnica y transferencia de conocimiento dirigido a agricultores, destinado a mejorar sus prácticas productivas, aumentar su productividad, fortalecer sus capacidades organizativas y facilitar su acceso a mercados, crédito y otros servicios.

Guardianas de semillas: Mujeres campesinas e indígenas que desempeñan la función ancestral de seleccionar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas nativas, garantizando su disponibilidad para las siguientes temporadas de siembra y transmitiendo conocimientos asociados.

Hackatón agropecuario: Espacio de innovación donde equipos multidisciplinarios desarrollan soluciones tecnológicas (aplicaciones, plataformas, dispositivos) a desafíos específicos del sector agropecuario, buscando atraer a jóvenes profesionales al campo.

Minga: Trabajo colectivo comunitario voluntario, fundamentado en principios de reciprocidad y solidaridad, utilizado tradicionalmente para realizar tareas agrícolas (siembra, cosecha, limpia), construir infraestructura comunitaria (canales de riego, caminos) o celebrar festividades.

Monocultivo: Sistema de producción agrícola basado en el cultivo de una sola especie en grandes extensiones de tierra, asociado a alta mecanización, uso intensivo de agroquímicos, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos y vulnerabilidad a plagas y enfermedades.

Pachamama: Término de origen quechua que significa "Madre Tierra", referido a la naturaleza como entidad viva y sagrada con la cual los seres humanos mantienen una relación de reciprocidad y respeto, reconocida como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana.

Relevo generacional: Proceso de transmisión de la actividad agrícola de una generación a la siguiente, actualmente en crisis en Ecuador debido a la migración juvenil, el envejecimiento de la población campesina y la falta de condiciones atractivas para los jóvenes en el campo.

Seguridad alimentaria: Situación definida por la FAO como aquella en la que "todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para

satisfacer sus necesidades energéticas y preferencias alimentarias", basada en los pilares de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad.

Siembra y cosecha de agua (SyCA): Enfoque ancestral de manejo del agua basado en la infiltración y almacenamiento de agua de lluvia en el subsuelo durante la temporada húmeda para su uso durante la temporada seca, mediante técnicas como albarradas, zanjas de infiltración, terrazas y recarga artificial de acuíferos.

Soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, priorizando la producción local, los mercados nacionales y la agroecología, y situando a las personas (no a las corporaciones) en el corazón de los sistemas alimentarios.

Tecnologías apropiadas: Tecnologías diseñadas o adaptadas a las condiciones específicas de los pequeños agricultores, caracterizadas por ser asequibles, compatibles con conocimientos y recursos locales, respetuosas con el ambiente, basadas en energías renovables y de fácil mantenimiento y reparación local.

Trueque: Práctica ancestral de intercambio de productos sin mediación monetaria, basada en principios de reciprocidad y valor de uso, que persiste en ferias y mercados campesinos, especialmente en la sierra centro.

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): Unidad técnica y económica dedicada a la producción agropecuaria, que puede estar conformada por una o más parcelas, manejada por una persona o grupo familiar, independientemente de su tamaño, ubicación o condición legal de tenencia de la tierra.

Anexo 4. Listado de organizaciones de agricultura familiar en Ecuador

Las organizaciones de agricultura familiar campesina en Ecuador cumplen funciones fundamentales de representación, defensa del territorio, fortalecimiento de capacidades, comercialización asociativa y formulación de políticas públicas. A continuación se presenta un listado de las principales organizaciones por ámbito geográfico y sectorial.

Organizaciones de representación nacional (segundo grado)

FENOCIN - Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras

Ámbito: Nacional

Representa a organizaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas de todas las regiones

Web: www.fenocin.org

Principales líneas: Soberanía alimentaria, agroecología, derechos territoriales, género, comercialización asociativa

CONFEUNASSCE - Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino de Ecuador

Ámbito: Nacional

Vinculada al Seguro Social Campesino, representa a los afiliados al sistema de seguridad social rural

Web: www.feunassc.blogspot.com

Principales líneas: Defensa de la seguridad social campesina, derechos laborales, acceso a salud

FENACLE - Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador

Ámbito: Nacional

Miembro de La Vía Campesina

Web: www.fenacle-ecuador.org

Principales líneas: Defensa de la tierra y el territorio, soberanía alimentaria, derechos de trabajadores agroindustriales

CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Ámbito: Nacional

Representa a las nacionalidades indígenas de las tres regiones (Sierra, Costa, Amazonía)

Principales líneas: Derechos colectivos de pueblos indígenas, consulta previa, defensa del territorio, soberanía alimentaria

CONFENIAE - Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana

Ámbito: Amazonía

Representa a las nacionalidades kichwa, shuar, achuar, waorani, cofán, siona-secoya de la Amazonía

Principales líneas: Defensa de territorios amazónicos frente a extractivismo (petróleo, minería), consulta previa, planes de vida

COPROC - Corporación de Organizaciones Campesinas de Cotopaxi

Ámbito: Cotopaxi

Principales líneas: Producción agroecológica, comercialización de chocho y cultivos andinos, escuelas de campo

UOCIC - Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Chimborazo

Ámbito: Chimborazo

Principales líneas: Defensa del territorio Puruhá, producción de papa nativa, sistemas de riego, género

Organizaciones de formación agroecológica y redes temáticas

FECAOL - Federación Ecuatoriana de Campesinos Agroecológicos y Organizaciones Locales

Ámbito: Costa (Manabí, Guayas, El Oro), con extensión a Sierra y Amazonía

Una de las principales organizaciones campesinas con enfoque agroecológico en el país

Principales líneas: Escuelas de formación agroecológica, soberanía alimentaria, defensa del territorio

Red de Guardianes de Semillas de la Amazonía

Ámbito: Pastaza, Napo, Orellana

Principales líneas: Conservación de semillas nativas amazónicas, fortalecimiento de chakras, transmisión de conocimientos tradicionales

Red de Guardianas de Semillas de Loja

Ámbito: Loja (Vilcabamba, Malacatos, Quinara, San Pedro)

Principales líneas: Intercambio de semillas nativas, sistematización de conocimientos tradicionales, producción de cartillas y recetarios, comercialización para alimentación escolar

FUNDIKPA - Fundación Pueblo Indígena Kichwa de Pastaza

Ámbito: Pastaza

Principales líneas: Minga agroecológica por la vida, fortalecimiento de chakras, bancos comunitarios de semillas

EkoRural

Ámbito: Nacional con énfasis en Sierra (Cotopaxi)

Principales líneas: Bancos comunitarios de semillas, escuelas de campo, comercialización asociativa, canastas comunitarias

MESSE - Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador

Ámbito: Nacional

Principales líneas: Escuela de interaprendizaje en Imbabura, economía solidaria, comercio justo, soberanía alimentaria

Escuelas de formación agroecológica

Tierra Viva (Vibrant Village)

Ubicación: Imbabura

Enfoque: Formación agroecológica con apoyo de cooperación internacional

Escuela de Formación Agroecológica de la FECAOL

Ubicación: Costa (Escuela Provincial del Norte: Manabí, Guayas; Escuela del Sur: El Oro, Loja, Azuay, Zamora)

Enfoque: Formación política y técnica agroecológica, vinculada a la lucha campesina

Escuela Binacional de Altropiko

Ubicación: Carchi (frontera con Colombia)

Enfoque: Formación agroecológica binacional

Escuela Agustina Quiñones (UOCE)

Ubicación: Esmeraldas

Enfoque: Formación agroecológica de comunidades afrodescendientes

Escuela Floresmilo Villalta

Ubicación: Esmeraldas

Enfoque: Formación agroecológica

La Troja Manaba

Ubicación: Manabí

Enfoque: Formación agroecológica en la costa manabita

Escuela Machete y Garabato

Ubicación: Los Ríos

Enfoque: Formación agroecológica

Escuela Agroecológica Wilfrido García

Ubicación: Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi

Enfoque: Formación agroecológica en la sierra centro

Escuela de la Asamblea de los Pueblos del Sur

Ubicación: Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago

Enfoque: Formación política y agroecológica

Escuela de la Federación Unitaria de Organizaciones Campesinas y Populares del Sur (FUPOCPS)

Ubicación: Loja

Enfoque: Formación agroecológica campesina

Organizaciones por sector productivo

Asociación de Productores del Litoral Ecuatoriano (APROLEC)

Ámbito: Costa (Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro)

Enfoque: Cacao, café, banano orgánico; certificación de comercio justo; comercialización asociativa

Asociación de Mujeres Agropecuarias de Jama (AMUPAJ)

Ubicación: Jama, Manabí

Enfoque: Producción agroecológica de maíz, maní, fréjol, yuca, frutales; liderazgo femenino; créditos Agrovioletas

Asociación Agroecológica "Wiñay Pacha"

Ubicación: San Andrés, Chimborazo

Enfoque: Banco comunitario de semillas, manejo agroecológico de plagas, conservación de suelos

Organizaciones internacionales y de cooperación con presencia en Ecuador

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Proyectos en Ecuador: Apoyo a la Política "Manos para el Campo" 2025-2034; Proyecto ICA-4 Empleo AgroJoven en cacao (Manabí y Napo); Forest and Farm Facility (FFF) apoyando a organizaciones de mujeres agricultoras, especialmente guardianas de semillas en Cotacachi

Fundación Heifer Ecuador

Ámbito: Nacional (Sierra, Costa, Galápagos)

Enfoque: Escuelas de campo, cadenas de valor de cacao y lácteos, agricultura familiar, invernaderos en Galápagos

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA)

Ámbito: Sierra centro (Chimborazo)

Enfoque: Escuelas de campo, manejo de suelos, agroecología

Fundación EcoCiencia

Ámbito: Nacional (con énfasis en Loja)

Enfoque: Red de Guardianas de Semillas de Loja, conservación de agrobiodiversidad

Groundswell International

Ámbito: Nacional

Enfoque: Agroecología, bancos comunitarios de semillas, canastas comunitarias

Galapagos Conservancy

Ámbito: Galápagos

Enfoque: Apoyo a agricultura local sostenible en Galápagos, proyectos como "Sembrando Vida y Protegiendo Galápagos"

EXPLORANDO LA RIQUEZA AGRÍCOLA DEL ECUADOR

Parte I: Bases conceptuales y normativas.
Capítulo 1. Marco teórico.
Capítulo 2. Políticas públicas (2008–2025).

Parte II. Experiencias territoriales.
Capítulo 3. La sierra centro: resiliencia campesina.
Capítulo 4. La costa: cacao, café y banano.
Capítulo 5. La Amazonía: chakras kichwas y shuaras.
Capítulo 6. Galápagos: agricultura en ecosistema frágil.

Parte III. Ejes transversales.
Capítulo 7. Mujeres rurales.
Capítulo 8. Juventud y relevo.
Capítulo 9. Agroecología y cambio climático.

Parte IV. Retos y perspectivas.
Capítulo 10. Retos estructurales.
Capítulo 11. Perspectivas desde el "Buen Vivir".

Este libro ofrece una sistematización integral de experiencias, identificando nudos críticos y trazando rutas para fortalecer la agricultura familia agricultura familiar como pilar de la soberanía alimentaria en Ecuador, respondiendo a preguntas clave sobre sostenibilidad y futuro.

Autor: Msc. Ortega Belalcázar Verónica Andrea.
Experta en desarrollo rural y políticas públicas.
Contacto y ORCID en la portada.

ISBN 978-9-91399407-9
9 781909 588402

UPEC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI